**ACTA N° 48-2020**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL**. - San José, a las nueve horas del catorce de mayo de dos mil veinte.

En esta sesión extraordinaria de Presupuesto 2021 con asistencia del Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente; del Máster Carlos Montero Zúñiga, doctor Gary Amador Badilla, la licenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, la Master Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, el Master Erick Mora Leiva Jefe Proceso de Planeación y Evaluación, el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyectos y la Licda. Alejandra García Sánchez, Coordinadora de Unidad de Presupuesto de la Dirección de Gestión Humana, en calidad de asesores.

**ARTÍCULO I**

**Documento N° 5649-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, informa que la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 1569-DE-2020 de este 7 de mayo de 2020, comunica que el Consejo Superior en la sesión N° 24-2020 celebrada el 19 de marzo del 2020, artículo XI, conoció el proyecto denominado “**Protocolo Interno de Actuación en Caso de activación de las Alarmas contra Incendio en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia**”, y al respecto se tomó el siguiente acuerdo:

*“Se acordó: Acoger la gestión presentada por la máster. Alexandra Mora Steller y el Ing. José Guillermo Vindas Cantillano, por su orden, jefa y Sub Jefe del Departamento de Servicios Generales y remitida por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, en oficio N°763-DE-2020 del 11 de marzo de 2020, en consecuencia: 1.) Aprobar el “Protocolo Interno de Actuación en Caso de activación de las Alarmas contra Incendio en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia”. 2.) Reactivar la Brigada de Emergencias de ese edificio, a esos efectos, el Subproceso de Salud Ocupacional coordinará lo que corresponda. 3.) Aprobar la realización de prácticas de evacuación con la participación de todas las personas servidoras que laboran en la edificación, incluida la jerarquía. De igual forma el Subproceso de Salud Ocupacional realizará las acciones que resulten necesarias para cumplir este objetivo. 4.) El Departamento de Servicios Generales con el acompañamiento de las dependencias y personas que elaboraron el protocolo, así como el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, procederán a socializar el protocolo mediante una presentación a los involucrados directos y a través de una campaña de prensa. 5.) Priorizar para el año 2021 la presupuestación de un sistema de voceo que permita informar a las personas que laboran en la edificación que se trata de una situación de emergencia o falsa alarma, de forma tal que no se tenga una dependencia absoluta de los compañeros y compañeras que integran las brigadas, por lo que el Departamento de Seguridad brindará el dato del costo a la Dirección de Planificación.”* (énfasis agregado)

- 0 -

Además, en el oficio se indica que con respecto al punto 5. del acuerdo, se le comunica que este proyecto será abordado por etapas, las cuales se detallan en el oficio N° 172-DS-2020 del 07 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Edward Rodríguez Murillo, Jefe del Departamento de Seguridad, en el cual indica que para la primera etapa a realizarse en el año 2021, se debe formular la suma de $ 164.365,03. (aproximadamente ¢100.591.398)

Adicionalmente, se copia a las demás instancias involucradas para que, en atención a lo acordado por el Consejo Superior, lleven a cabo las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de las actividades necesarias para la ejecución de este proyecto.



- 0 -

Señala la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “El sistema se coordinó con el Área de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, porque el voceo se encontrará integrado en todos los edificios, no solamente para el de la Corte, lo hemos determinado como un requerimiento importante, porque hemos visto que ante las emergencias las personas no saben cuándo tiembla si hay que salir o no hay que salir, considerando que los integrantes de las brigadas son personas voluntarias y eso genera una serie de inconvenientes; cuando está de por medio la vida, tenemos que valorarlo y sopesarlo, consideramos que el sistema era necesario. La inversión inicial es alta; pero va a permitir cuando se compre esa infraestructura ir abordando todos los edificios de la periferia, creemos que es una inversión necesaria y procedente”.

- 0 -

Sin objeción alguna **se acordó:** Aprobar la solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva y por tanto, incorporar al presupuesto ordinario del 2021 un total de ¢100.591.398 para la adquisición de un sistema de voceo que permita informar a las personas que laboran en la edificación que se trata de una situación de emergencia o falsa alarma, de forma tal que no se tenga una dependencia absoluta de los compañeros y compañeras que integran las brigadas.

La Dirección Ejecutiva, la Dirección de Planificación y la Dirección de Gestión Humana, tomarán nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO II**

**Documento N° 5650-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, informa que mediante oficio 0319-ODCV-2019 de este 07 de mayo de 2020, la máster. Ana Daisy Quirós Barrantes, Fiscala Adjunta de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV), comunica a la Administración del Ministerio Público los detalles de los **recursos necesarios a fin de facilitar y agilizar la adquisición de bienes y servicios para el pago de ayudas económicas urgentes a víctimas de delito (vestuario, atención e implementos médicos, gastos procesales y gastos funerarios) así como mejoramiento de la ODCV, correspondiente al período 2021**.

Adicionalmente, vía telefónica solicitó al licenciado Minor Alvarado Chaves, jefe del Subproceso de Presupuesto y Proyectos de la Dirección de Planificación presentar esta solicitud ante el Consejo Superior en la sesión de este viernes 8 de mayo.

En este oficio se indica:

*“ (...)*

*Estimado señor:*

*Reciba un cordial saludo. Con relación al Proyecto de presupuesto para la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (en adelante ODCV), le adjuntamos dos.*

*El total de dinero proyectado para el presupuesto ordinario-honorarios de la ODCV para el año 2021, de acuerdo a las dos opciones que se presentan es el siguiente:*

*1)- ¢281.773.174,00*

*2)- ¢558.631.624,00*

*Cuyo detalle se establece en documento adjunto, de conformidad con las partidas específicas que corresponden.*

*Lo anterior, dado que esta oficina se encontraba a la espera del criterio de Dirección Jurídica requerido por Corte Plena (mediante oficio N° 1066-2020 del 3 de febrero del 2020, sesión N° 2-2020 celebrada el 13 de enero del año en curso, artículo XLVI), en cuanto a la forma de trasladar los recursos que genera producto de honorarios, debido a que el Ministerio de Hacienda había indicado que se requería el traslado de dinero mediante estimación por ingresos recurrentes, razón por la cual Corte Plena requirió en su momento a la Dirección Jurídica se pronunciara al respecto, no obstante, en correo del 6 de mayo de 2020, el Lic. Rodrigo Campos Hidalgo, refirió que se iba a comunicar dicho criterio el día 7 de mayo, pero a horas de la tarde de este último día, no se ha recibido dicho pronunciamiento, razón por la cual, al ser necesario que el Honorable Consejo Superior conozca, valore y apruebe las partidas necesarias para trasladar a Caja Única del estado y hacer frente a los rubros para mejoramiento de la oficina, se trasladan las propuestas:*

1. *De no recibirse criterio de Dirección Jurídica sobre el tema acotado, se solicita se valore y aplique el presupuesto por el monto de ¢281.773.174,00*
2. *De recibirse el criterio de Dirección Jurídica y si mantiene éste que la totalidad de dinero que se encuentra en cuenta de la ODCV debe trasladarse al Ministerio de Hacienda bajo la modalidad de ingreso recurrente, sin que puedan separar los recursos de la ODCV para años posteriores, se solicita se valore y apruebe el segundo escenario, por un monto de ¢558.631.624,00*

*Para este segundo escenario se aporta oferta del propietario del bien a adquirir en la localidad de Pérez Zeledón, a efecto de hacer constar que se ha avanzado con el proceso para la compra de edificación en esa zona, dado el factor de hacinamiento que se mantiene en Tribunales de Pérez Zeledón y que sería para ubicar a la ODCV y a la Oficina de Justicia Restaurativa.*

*Importante mencionar que los recursos se esperan ejecutar en el 2021, de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. (…)”*



- 0 -

Al respecto, la Dirección Jurídica mediante oficio DJ-C-227-2020 del 7 de mayo anterior, remitido a la Secretaría de la Corte, ratificó que los recursos correspondientes a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima deben ser parte de la Caja única del Estado, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda abra una cuenta particular para dichos fondos y señaló que el Ministerio de Hacienda debe mantener el destino de dichos recursos, aunque integre la caja única del Estado, en el entendido de que no son sujetos de la aplicación de las disposiciones del artículo 25 de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP) citado, en tanto que, en dicho caso, estamos en los supuestos de un destino específico señalado por ley.

Lo anterior, conforme se desprende del contenido del oficio señalado:

*“(…)*

*Nos referimos a la solicitud de revisión y aclaración del criterio N° DJ-C-85-2020 de 3 de marzo de 2020 de esta Dirección, relacionada con el oficio N° 1066-2020 de 3 de febrero de 2020 mediante el cual se comunicó el acuerdo de Corte Plena de sesión 02-2020 de 13 de enero de 2020, referente a los recursos de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, en cuanto los mismos provienen de una ley en especial.*

*En relación con lo solicitado, nos permitimos expresar lo siguiente:*

*Con el fin de dar debida respuesta, debe tomarse en consideración como referente fundamental, que la* ***Constitución Política*** *establece la existencia del órgano de la Tesorería Nacional como único competente para el pago de obligaciones del Estado. Al respecto, el artículo 185 del texto constitucional indica lo siguiente:*

***“ARTÍCULO 185.-*** *La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales”.*

*Lo anterior debe complementarse con el artículo 180 del texto constitucional que expresa:*

*“Artículo 180.-*

*El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo”.*

*La* ***Sala Constitucional*** *ha indicado que conforme a las anteriores normas, el presupuesto es un instrumento de planificación y control de la administración pública, de las siguiente manera:*

*“El concepto de presupuesto ordinario ha evolucionado a tal punto que actualmente se entiende, no solo como un documento jurídico contable, sino como un instrumento técnico organizador de la economía del Estado, consolidándose así su función de plan y control. Es importante observar, de conformidad con el artículo 176 constitucional, que el presupuesto se presenta como un acto de mera previsión o cálculo contable de los ingresos, mientras que respecto a los egresos públicos, mantiene el triple efecto: autorización del gasto público, limitación de la cantidad a gastar , fijación del destino que haya de darse a los créditos aprobados en el presupuesto (...) Todo lo expuesto da una idea clara de la naturaleza del presupuesto como proyección de los ingresos que cubra los gastos autorizados de la Administración Pública, por lo que consiste en una expresión de términos contables del plan de acción del Gobierno para un período determinado.” Sala Constitucional, Voto 1971-96, en el mismo sentido ver Voto 760-92.*

*Consecuentemente con lo anterior, la Sala Constitucional ha establecido los principios que rigen la materia presupuestaria de la siguiente manera:*

*“De carácter sustancial tenemos los: de ‘equilibrio’ y de ‘anualidad’ y formales podemos apuntar los de ‘unidad’, de ‘universalidad’ de ‘no afectación de recursos’ y de ‘especificación de gastos’. (Sala Constitucional, resolución N° 137-95).*

*En lo que nos interesa, el* ***Principio de Caja Única*** *aplicable a la materia implica la existencia de un único fondo a nombre del Estado, en el cual convergen todos los ingresos y egresos de las dependencias pertenecientes al Gobierno Central, que están bajo la administración de la Tesorería Nacional.*

*En lo que respecta al Poder Judicial, debe entenderse que el mismo queda incorporado en los incisos a) y b) del artículo 1 de la* ***Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos****, siendo así que además dicho cuerpo normativo estableció que el* ***artículo 127*** *de esa misma ley, contempló que se derogaba:*

***“e)*** *Las disposiciones que otorguen a órganos de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1 la facultad de manejar recursos financieros sin que estos ingresen a la caja única del Estado.*

***f)*** *Cualquier otra norma referida a la administración de los recursos financieros del Estado que se oponga a la presente Ley”*

*Como se advierte el principio de caja única tiene una relación sistémica con los otros* ***principios presupuestarios*** *y con la razón de ser de las normas constitucionales citadas, en tanto que el presupuesto se ve como un instrumento de control y programación y en donde se incorpora la universalidad de los recursos de la administración central.*

*La* ***Sala Constitucional*** *ha indicado sobre este principio:*

*“…El principio constitucional de Caja Única determina que todos los ingresos del Estado central, así como todos sus egresos de dinero, deberán ser canalizados a través de una oficina especializada por Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional, de modo que para las autoridades de control de la Hacienda Pública, en especial para la Contraloría General de la República, resulte más eficaz la vigilancia sobre el buen uso que se dé de los fondos públicos. La Sala Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que son contrarias al derecho de la Constitución las normas o prácticas públicas que permitan que fondos del Presupuesto de la República sean manejados por órganos diversos de la Tesorería Nacional. (Cfr. sentencias números 04907-95, 05399-95, 04528-99, 04529-99, etc.)…”. Sala Constitucional, resolución N° 8675-2005 de 9:56 hrs. de 1 de julio de 2005.*

*Por su parte, dentro del anterior orden de ideas, la* ***Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos*** *dispone como uno de los objetivos del Sub Sistema de Tesorería lo siguiente:*

*“d) Administrar la liquidez del Gobierno de la República en procura del mayor beneficio de las finanzas públicas…”*

*Complementario con lo anterior, el artículo 66 de dicho cuerpo normativo indica:*

*“ARTÍCULO 66.- Caja única Todos los ingresos que perciba el Gobierno, entendido este como los órganos y entes incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1º de esta Ley, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones o en otra moneda.*

*Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino se depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central de Costa Rica. Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto. La Tesorería Nacional girará los recursos a los órganos y entes, de conformidad con sus necesidades financieras según se establezca en la programación presupuestaria anual”.*

*Las anteriores normas deben ser complementadas con el artículo 43 de dicho cuerpo normativo en tanto dispone:*

***“ARTÍCULO 43.-*** *Ejecución de transferencias presupuestarias Los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias, tanto a favor de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación financiera que realice el Ministerio de Hacienda, con base en la programación que le presenten los respectivos destinatarios y la disponibilidad de recursos del Estado.”*

*Sobre la ratio de estas normas, la* ***Procuraduría General de la República*** *ha indicado lo siguiente:*

*“… No obstante que el principio de caja única está contenido en la Constitución Política y a pesar de su reiteración en los artículos 10 y siguientes de la anterior Ley de Administración Financiera, es lo cierto que diversas leyes han permitido la creación de fondos o cuentas especiales o bien, que órganos del Estado administren los recursos asignados con absoluto desconocimiento del principio de caja única. La creación de recursos con destino específico se acompañó normalmente de una autorización para que esos recursos fuesen recaudados en una cuenta especial o para que el Banco Central, como recaudador de impuestos, girase directamente los recursos. De ese hecho, éstos no ingresaban a caja única. A lo anterior se unió, sobre todo a partir de la década de los noventa, la costumbre de otorgar personalidad jurídica instrumental a determinados órganos de los Ministerios. Aspectos todos que contribuyeron a vaciar parcialmente de contenido el principio constitucional de caja única. Diversas disposiciones de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos pretenden hacer realidad el principio constitucional y la jurisprudencia que sobre él se ha desarrollado…” (Procuraduría General de la República dictamen N° C-297-05 de 18 de agosto del 2005. En igual sentido véase Opinión Jurídica N° OJ-104-2008 de 20 de octubre del 2008).*

*Otro cuerpo normativo más reciente que recoge el concepto de caja única es la* ***Ley de Eficiencia en la Administración de Recursos Públicos****, toda vez que en su artículo 2 contempla las transferencias recibidas de la Administración Central de la siguiente manera:*

*“Transferencia: son los recursos financieros que las instituciones reciben de la Administración Central para satisfacer necesidades públicas de diversa naturaleza, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos. Incluye las transferencias de destino específico autorizadas por ley, con o sin fuente de financiamiento, las voluntarias, los subsidios, las subvenciones y las donaciones”.*

*La anterior norma le es aplicable al Poder Judicial, en tanto el artículo 3 de la Ley en tanto indica:*

***“ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación.*** *La presente ley es de aplicación exclusiva para los siguientes recursos:*

*a) Los recursos de la Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y los órganos auxiliares de estos…”*

*De la aplicación de este artículo se exceptúan lo relativo a la administración de los recursos de terceros y las transferencias establecidas por norma constitucional”.*

*En el indicado cuerpo normativo se establece lo siguiente:*

***“ARTÍCULO 5.- Ejecución de los recursos.*** *Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta ley, y sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente en un período máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central…”*

***“ARTÍCULO 10.- Giro de las transferencias.*** *El giro de las transferencias con destinos específicos dispuestos mediante ley de la República deberá realizarse tomando en consideración la disponibilidad de los ingresos efectivamente recaudados, de manera que se garanticen los porcentajes que sobre su distribución estén asignados por ley a las entidades.*

*Los destinatarios de los recursos provenientes de las transferencias asociadas a los destinos a los que se hace referencia en el párrafo anterior presentarán ante la Autoridad Presupuestaria, al final de cada ejercicio económico, un informe de rendición de cuentas donde se detallen los resultados que han tenido los recursos otorgados a cada institución”.*

*Por su parte, en el capítulo III de la* ***Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*** *se da la posibilidad de un margen de discrecionalidad del Ministerio de Hacienda para el giro de destinos específicos no impuestos por Constitución o ley, de la siguiente manera:*

***“ARTÍCULO 15-*** *Destinos específicos Si la deuda del Gobierno central supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias”.*

***ARTÍCULO 25-*** *Gestión administrativa de los destinos específicos En el caso de los destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la Constitución Política, o su financiamiento no provenga de una renta especial creada para financiar el servicio social de forma exclusiva, el Ministerio de Hacienda determinará el monto a presupuestar, según el estado de las finanzas públicas para el periodo presupuestario respectivo y los criterios contemplados en el artículo 23 de esta ley.”*

*Si bien en el caso de destinos establecidos por ley, la discreción del artículo 25 desaparece, si se evidencia la relación de control y planificación del presupuesto con las finanzas estatales a efecto de limitar su impacto en la macroeconomía del país.*

*Con relación a este tema, la* ***Procuraduría General de la República****, en un reciente criterio concluyó:*

*“1-. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N. 9635 de 3 de diciembre de 2018, permite al Ministerio de Hacienda presupuestar la asignación de recursos dispuesta por las leyes que crean destinos específicos a partir de la valoración de las condiciones fiscales y otros imperativos de política pública. Por ende, le permite ajustar esa asignación a los recursos financieros con que se cuente.*

*2-. En el ejercicio de esas nuevas facultades, el Poder Ejecutivo tiene como límites los destinos específicos creados por la Constitución, así como los creados por ley para financiar un servicio social en forma exclusiva. Por el contrario, no constituyen un límite los destinos referidos a tributos destinados a financiar en forma general los gastos públicos, como pueden ser los destinos a cargo de impuestos como la renta o ahora el impuesto al valor agregado…” (criterio de 5 de abril, 2019, C-099-2019).*

*Por su parte, el* ***Reglamento de Caja Única del Estado*** *indica lo siguiente:*

*“Artículo 3º-Objetivos. Los principales objetivos que persigue la aplicación de la Caja Única son:*

1. *Disminuir los costos del endeudamiento interno, mediante la utilización de una única cuenta general, en la cual todas las instituciones del Gobierno Central depositarán sus fondos mientras los mismos no requieran ser utilizados…”.*

*Por otra parte, con respecto a las reglas que rigen las cuentas de los sujetos públicos el indicado reglamento dispone:*

***“Artículo 7º-La Caja Única del Estado.*** *Los recursos líquidos de las entidades participantes serán depositados en la Caja Única del Estado y administrados por la Tesorería Nacional, para lo cual se abrirá una o más cuentas en colones y en dólares en el Banco Central de Costa Rica en su condición de cajero general.*

***Artículo 8º-Las Cuentas de Caja Única.*** *Para la administración clara y transparente de los fondos, la Tesorería Nacional definirá mediante resolución las normas de procedimiento para el funcionamiento y operación de las Cuentas de Caja Única (CCU). Mediante estas cuentas se administrarán contablemente las disponibilidades financieras de cada entidad participante.*

***Artículo 9º-Naturaleza contable de las cuentas.*** *Los saldos existentes en las CCU pertenecerán a la respectiva entidad participante. La Contabilidad Nacional deberá clasificar estos importes como pasivos en la contabilidad patrimonial del Gobierno Central.*

***Artículo 10.-Asignación de cuentas.*** *Todos los participantes tendrán una CCU en colones. Adicionalmente, en caso de que sus ingresos fuesen percibidos en dólares, podrán tener una CCU en esta moneda. Si por alguna razón justificada la entidad participante requiere una cuenta adicional, la misma deberá ser solicitada a la Tesorería Nacional con su debida justificación, quedando esta última en potestad de aprobar o rechazar la solicitud realizada”.*

*Por consiguiente, no hay duda de que lo indicado en el criterio DJ-C-85-2020 es acorde con las regulaciones aplicables en la materia.*

*No es óbice indicar que un reciente criterio de la* ***Procuraduría General de la República*** *se establecieron disposiciones que deben tomarse en consideración en la materia, a saber:*

*“1-. En la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el interés del legislador está centrado en el destino de los superávits libres, sin que haya regulado el destino de los superávits específicos.*

*2-. En consecuencia, no se ha previsto en estas leyes que los superávits específicos, producto de destinos específicos o de recursos propios, deban ser reintegrados al presupuesto nacional o bien, que estos recursos tengan que ser destinados a financiar determinadas partidas, como sucede con los superávits libres.*

*3-. La eficiencia en la ejecución de los recursos que promueve la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos se determina respecto de transferencias de la Administración Central o del presupuesto nacional pero no en relación con otras fuentes de financiamiento que pueda tener el beneficiario de una transferencia y en concreto, los órganos con personalidad jurídica instrumental.*

*4-. La finalidad que dio origen a una determinada fuente de financiamiento (sea este un destino específico, sea los recursos propios) puede no haber sido satisfecha en el período presupuestario. Lo que origina un remanente que, en principio, continuará financiando la finalidad hasta su satisfacción en períodos presupuestarios subsiguientes. Así, esos superávits deben ser presupuestados para la finalidad para la cual los recursos fueron otorgados…” (criterio de 8 de octubre, 2019, C-292-2019).*

*Finalmente, debe indicarse que esta unidad asesora realizó una revisión exhaustiva de los antecedentes tanto a nivel del Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda en lo referente al manejo de cuentas que rompen el principio de caja única y no encuentra elementos de convicción que impliquen modificar el criterio externado.*

*De conformidad con las anteriores normas, puede determinarse las siguientes consideraciones:*

1. *Se ratifica que los recursos correspondientes a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima deben ser parte de la Caja única del Estado, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda abra una cuenta particular para dichos fondos.*
2. *El Ministerio de Hacienda debe mantener el destino de dichos recursos, aunque integre la caja única del Estado, en el entendido de que no son sujetos de la aplicación de las disposiciones del artículo 25 de* ***Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*** *(LFFP) citado, en tanto que, en dicho caso, estamos en los supuestos de un destino específico señalado por ley.*

*(…)”*

- 0 -

Por su parte, mediante oficio N° FGR-415-2020 del 11 de mayo anterior, suscrito por la Fiscala General Emilia Navas Aparicio, dirigido a la Dirección Ejecutiva, le informa sobre la solicitud planteada por la Licda. Ana Daysi Quirós Barrantes, Fiscala Adjunta de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, para la incorporación **dentro del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial de la suma de ¢500.000.000,00**, **para la compra de un Edificio en Pérez Zeledón**, para albergar a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y Oficina de Justicia Restaurativa, dada la necesidad de espacio por hacinamiento existente en Tribunales de Justicia de dicha zona.

Señala además que estos recursos provienen del cobro de honorarios generados de los procesos en los que se ha delegado la acción civil resarcitoria al Ministerio Público, y que se mantienen en la cuenta especial de la ODCV, contando en la actualidad con la suma total de ¢558.631.624,00.

Finalmente, indica que mediante oficios DGPN-SD-0287-2018 y DGPN-SD-0322-2019 remitidos por el Ministerio de Hacienda, se gira las instrucciones para que estos recursos sean trasladados a Caja Única del Estado, lineamiento que debe ser acatado de manera definitiva a partir del año 2021.

Por esta razón, se plantea la necesidad de trasladar los recursos e incluirlos dentro de la corriente presupuestaria y destinarlos para facilitar y agilizar la adquisición de bienes y servicios para el pago de ayudas económicas urgentes a víctimas de delito (vestuario, atención e implementos médicos, gastos procesales y gastos funerarios) así como mejoramiento de la oficina, conforme el detalle incluido en el oficio remitido:

****

En el citado oficio, la Fiscala General indica que dentro de esta proyección, se tiene previsto destinar recursos para la adquisición de un edificio, pero, es necesario tomar en cuenta la duración de estos procesos, que puede provocar la eventual pérdida de los recursos, por la dificultad del cumplimiento de todos los requisitos de ley durante el año presupuestario.

Debido a lo anteriormente expuesto, y tomando en consideración que el Poder Judicial cuenta con la figura del Fideicomiso y que recientemente se autorizó la adenda para incluir dentro de este al Ministerio Público, se solicita valorar la posibilidad de incluir a la ODCV, con el fin de poder gestionar por medio de este la compra de la edificación y asegurar una ejecución satisfactoria de los recursos.

- 0 -

Refiere la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Esta es la solicitud que realizan los compañeros de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, se muestran 2 vías, en las que presentan 2 escenarios para la incorporación de los recursos partiendo del criterio que estaba pendiente de la Dirección Jurídica. ¿recuerda señor presidente, magistrado Cruz que usted nos había solicitado requerirle al máster Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico que nos ayudara en verificar lo que había indicado el Ministerio de Hacienda en relación a que si se incorporaban esos recursos como parte del límite que se le había impuesto al Poder Judicial?, ahí se muestra el documento, a esos efectos, el máster Rodrigo emitió el criterio e indica en resumen que; el monto debe de estar consignado dentro del total, por lo menos ahora en la mañana así lo confirme con él, también señala que, se adjunta un criterio de la Procuraduría General de la República en donde manifiesta que los recursos se deberían de consignar o asignar en la caja única del Estado, pero de forma independiente, generándose una cuenta independiente para estos recursos, de tal forma que se mantengan ahí y no se utilicen para otras necesidades del Gobierno por estar en caja única, ese criterio también fue dado por esa Procuraduría y en el documento se encuentra anexo, eso ya clarifica la duda que se había planteado en relación al límite. Entendiendo este punto, la solicitud que nos están realizando iría dentro del monto del límite propuesto de este Consejo Superior a la Corte Plena.

El siguiente tema que se propone, son 2 escenarios en la incorporación de los recursos, un escenario en el entendido que se puedan asignar ₡500.000.000 (quinientos millones de colones) a la figura del fideicomiso, ya que están interesados en comprar un edificio en Pérez Zeledón, si se pudiera realizar esa figura del fideicomiso entonces que se incorpore alrededor de 558 y el primer escenario de no darse estas condiciones seria de ₡281.773.174, (doscientos ochenta y un millones setecientos setenta y tres mil ciento setenta y cuatro colones).

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, estaba dando un mayor detalle de la información que tiene con respecto al fideicomiso”.

Indica la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Esta semana nos llegó esa gestión para considerar la incorporación de los recursos al fideicomiso, han insistido con el tema, en otra ocasión habían hecho una petitoria para otros fondos en términos similares, lo que sucede es que ya el contrato de fideicomiso tiene una connotación de fideicomiso operativo y cualquier gestión de adendas tiene que ser objeto de un estudio legal para ver el impacto que tendría, el problema es que al haber llegado esta semana esa valoración no se ha hecho y la preocupación sería incluir recursos en fideicomiso y después no poderlos ejecutar porque los perderían. Considero que habría que dar un compás de espera para asignar esos recursos, de toda suerte lo pueden mantener en la cuenta, o incorporarlos a través de un extraordinario cuando ya el tema este clarificado. Lo que me confundió es que lo incluyeron en edificios, si es por fideicomiso es por la 7, esa es la confusión que tenía, me parece que de momento lo prudente, antes de que se corra el riesgo que estos recursos no se puedan ejecutar sería dejarlos ahí y valorar la posibilidad legal de realizarlo.

Prácticamente el grueso de ese presupuesto es el siguiente, están incluyendo ₡500.000.000 para edificios, ₡58.000.000 son recursos que están incluyendo para compras menores, de momento habría que dejar los ₡500.000.000 por fuera”.

Interviene la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Si bien indicaron edificios es por desconocimiento de partida, el fondo es incluirlo en el fideicomiso, habría que variar la propuesta de acuerdo e indicar que sería el primer escenario”.

Pregunta el presidente, magistrado Cruz: “¿Considerando el criterio? ¿Pero ya no sería la Dirección Jurídica, ni nada de eso?”.

Responde la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “El criterio de la Dirección Jurídica sí, porque indica que se pueden mandar, pero la solicitud de la máster Emilia Navas Aparicio ya no podría ser el escenario completo, como dijimos en el escenario 2, por lo que sería aprobar el primer escenario solicitado por la máster Ana Deisy Quirós”.

Interviene el presidente, magistrado Cruz: “Considerando el criterio de la Dirección Jurídica aprobar el primer escenario de la máster Ana Deisy Quirós e incorporar como parte del presupuesto la suma de ₡281.773.174 (doscientos ochenta y un millones setecientos setenta y tres mil ciento setenta y cuatro colones)”.

Señala el integrante Montero: “Sería bueno que quedaran las manifestaciones de la máster Romero Jenkins, respecto a que no estamos recortando por gusto; sino porque existe un riesgo de no poder ejecutar el presupuesto dadas las condiciones propias del fideicomiso, como para que a la máster Navas Aparicio le quede claro la explicación que brindó la máster Romero Jenkins”.

Prosigue la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Clarificar que fue que en virtud que la gestión se recibió esta semana no se ha podido, ya que el 11 de mayo de 2020 se envió”.

Añade el presidente, magistrado Cruz: “Si, sería ₡281.773.174 (doscientos ochenta y un millones setecientos setenta y tres mil ciento setenta y cuatro colones)”.

Considerando el criterio de la Dirección Jurídica y la imposibilidad en este momento de incluir recursos en el Fideicomiso de Construcción que solicita la Fiscala General, licenciada Emilia Navas Aparicio, **se acordó:1.)** Aprobar el primer escenario solicitado por la máster Ana Daisy Quirós, Fiscala Adjunta de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV), e incorporar en el presupuesto el monto de ¢281.773.174,00 (doscientos ochenta y un millones setecientos setenta y tres mil ciento setenta y cuatro colones y cero céntimos). **2.)** Comunicar a la Fiscalía General de la República que la aprobación del escenario 1 se dispone en razón de la fecha en que se recibió dicha solicitud en la Dirección Ejecutiva, siendo que se requiere de un previo estudio legal, asimismo, en consideración del riesgo latente de no poder ejecutar el presupuesto dadas las condiciones propias del fideicomiso y motivadas en la propuesta N° 2.

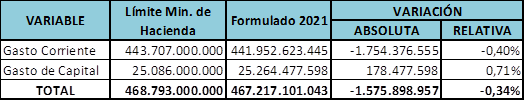
La Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación, tomarán nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO III**

**Documento N° 5653-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, informa con respecto a las estimaciones generales del presupuesto 2021 formulado hasta la fecha.

1. En primer lugar, cabe recordar que conforme el artículo IX de la agenda del viernes 8 de mayo, de acuerdo con las nuevas estimaciones de la DGH en remuneraciones, sin costo de vida, considerando el gasto variable institucional (corriente y de capital) y conforme el límite establecido por el Ministerio de Hacienda, nuestro presupuesto se encontraba en ese momento en aproximadamente **¢1.575 millones por debajo del límite establecido**.



1. En esta misma sesión, se dispuso a incorporar como parte del presupuesto ordinario 2021, un conjunto de requerimientos por ¢98,8 millones, conforme el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **GASTO CORRIENTE** |  |
| *PERITAJES FAMILIA* | *30 000 000* |
| *REMODELACIÓN JICARAL* | *22 023 418* |
| *TIPO CAMBIO* | *46 799 663* |
|  | **98 823 081** |

1. En esta sesión del jueves 14 de mayo de 2020, se plantea la solicitud de la Dirección Ejecutiva de incorporar como parte del presupuesto ordinario 2021, un total de ¢100.591.398 para la adquisición de un sistema de voceo a nivel institucional.
2. En esta sesión del jueves 14 de mayo de 2020, el Consejo Superior conoce la solicitud realizada por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la cual plantea dos escenarios de formulación 2021; recursos que conforme lo solicitado por el Ministerio de Hacienda se deben incluir como parte del presupuesto ordinario institucional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OFICINA DEFENSA CIVIL VÍCTIMA** | |
|  | **ESCENARIO 1** | **ESCENARIO 2** |
| PARTIDAS | - | - |
| 1 | 62 166 100 | 31 416 100 |
| 2 | 15 287 820 | 6 357 523 |
| 5 | 204 319 254 | 520 858 000 |
| **TOTAL** | **281 773 174** | **558 631 623** |

1. En el caso de aprobarse el escenario 1 de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el presupuesto formulado por el Poder Judicial para el 2021 estaría por debajo del límite establecido por el Ministerio de Hacienda en ¢**1.257 millones**, mientras que de aprobarse el escenario 2 de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el presupuesto formulado a la fecha estaría por debajo del límite en **¢980 millones**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DISPONIBLE CON ESCENARIO 1 DE ODCV:** | |  |  |
| **VARIABLE** | **Límite Min. de Hacienda** | **Formulado 2021** | **VARIACIÓN** |
| Gasto Corriente | 443 707 000 000 | 441 973 900 446 | -              1 733 099 554 |
| Gasto de Capital | 25 086 000 000 | 25 561 385 150 | 475 385 150 |
| **TOTAL** | **468 793 000 000** | **467 535 285 596** | **-              1 257 714 404** |
|  |  |  |  |
| **DISPONIBLE CON ESCENARIO 2 DE ODCV:** | |  |  |
| **VARIABLE** | **Límite Min. de Hacienda** | **Formulado 2021** | **VARIACIÓN** |
| Gasto Corriente | 443 707 000 000 | 441 934 220 149 | -              1 772 779 851 |
| Gasto de Capital | 25 086 000 000 | 25 877 923 896 | 791 923 896 |
| **TOTAL** | **468 793 000 000** | **467 812 144 045** | **-                 980 855 955** |

1. Según petición realizada por parte de la Dirección Ejecutiva, se solicita incluir¢50 millones en la Partida 7 (Transferencias de Capital) para el Fideicomiso de Construcciones. Adicionalmente, se solicita incluir **¢160 millones**, distribuidos en ¢100 millones para el reforzamiento de los contratos de seguridad según demanda y ¢60 millones para el reforzamiento de los servicios contratados de limpieza también según demanda, a distribuir entre los Programas 926 y 927 de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Seguridad** | |
| 926 | ₡    80.000.000,00 |
| 927 | ₡    20.000.000,00 |
| **Total** | **₡ 100.000.000,00** |
| **Limpieza** | |
| 926 | ₡    40.000.000,00 |
| 927 | ₡    20.000.000,00 |
| **Total** | **₡    60.000.000,00** |

1. Considerando esta solicitud de la Dirección Ejecutiva y los dos escenarios planteados por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el monto disponible para ajustar la Partida 0 Remuneraciones por parte de la Dirección de Gestión Humana es de ¢750.000.000 en el caso del primer escenario y de ¢550.000.000 en el caso del segundo.
2. Dado el comportamiento que está presentando la subpartida 00105 Suplencias, la cual para el 2021 está decreciendo en alrededor de ¢982 millones, la Dirección de Planificación recomienda que el saldo señalado en el punto 7, sea utilizado en su totalidad para ajustar esta subpartida conforme las necesidades institucionales.

- 0 -

Interviene la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Recordemos que en la sesiones pasadas se verificó con las compañeras de la Dirección de Gestión Humana, el monto correspondiente a los salarios que se habían calculado en relación a los recursos que se estaban disponiendo, se hizo una suma de cada uno de los rubros que también teníamos que incorporar y a raíz de eso, en el más-menos que se verifica quedan en este momento para asignar recursos la suma ₡1.575 millones , distribuido entre gasto corriente y gasto de capital, entonces compensado entre cada una de las dos, el monto que se podía disponer en gasto corriente es de ₡1.754 millones y en gasto de capital el presupuesto formulado a la fecha se excedía en ₡178 millones, eso da la suma neta de ₡1.575 millones.

Algunos gastos que se aprobaron incorporar al presupuesto fueron los ₡30.000.000 de los peritajes de la reforma de familia para iniciar con el proceso de la posibilidad de los peritajes de Trabajo Social, la remodelación de Jicaral que ronda en los ₡22.000.000 de colones que solicitó la máster Romero Jenkins para poder dar pie a la entrada en vigencia del Juzgado y el aumento en el tipo de cambio que se tuvo que realizar por la variación dado el aumento que comunicó el Ministerio de Hacienda en relación a lo que nosotros habíamos formulado inicialmente. Esos montos suman ₡98.823.081 colones, ustedes pueden ver que lo incorporamos estimando que se pudiera dar la aprobación, el tema del voceo a nivel institucional, por lo que incorporamos los ₡100.591.398, asimismo, hicimos los 2 escenarios en cuanto a la relación de lo que nos había solicitado la oficina de la Defensa Civil, entendiendo que este monto se incorpora dentro del presupuesto total ordinario del Poder Judicial, en caso de darse el escenario 1, el presupuesto formulado a la fecha estaría por debajo del límite de Hacienda en ₡1.257 millones, que es el caso que está acogiendo hoy el Consejo Superior.

Además, se indicó que la Dirección Ejecutiva valorara en ese momento la posibilidad de incluir recursos dado el tema de la pandemia, en algunas subpartidas que habían quedado complicadas, como por ejemplo los contratos de limpieza, entendiendo que los de vigilancia habían quedado ajustados, también la máster Romero Jenkins solicitó incorporar lo que quedara sobrante en la partida de fideicomiso. Realizando esos análisis se logra incluir ₡50.000.000 en la subpartida de fideicomiso y adicionalmente ₡160.000.000, distribuidos ₡100.000.000 para los contratos de seguridad según demanda y ₡60.000.000 para los servicios de limpieza según demanda, la distribución se asigna en su mayoría al Programa 926, que tiene mayor carga al manejar los contratos a nivel institucional.

En el punto 7 el tema nuevamente de los recursos, considerando esta solicitud de la Dirección Ejecutiva, los escenarios que teníamos en Defensa Civil, por parte de la Dirección de Gestión Humana nos queda poco monto, no es lo que creíamos que quedaba, pero al menos se está visibilizando, creo que son ₡750.000.000, que la propuesta sería que ese monto de ₡750.000.000 se incorporen a la partida de sustituciones”.

Manifiesta la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana: “El ejercicio que podemos hacer en función de la distribución, solo que esa distribución en la subpartida de suplencias solamente abarca salario base, si ingresamos todo en esa bolsa, por así decirlo; quedaría desajustado el tema de estructura de componentes asociados, y no se va ver el incremento neto de los 750 en suplencias, habría una distribución proporcional que se tiene que hacer a nivel del resto de las subpartidas”.

Pregunta la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva “¿En cuál programa se va a incluir?”.

Responde la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana: “El que nos ha dado mayores condiciones de ajustes es el programa 926, entonces si están de acuerdo los podemos incluir ahí. También va a visualizarse una diferencia de los puestos extraordinarios, ya que algunos se vuelven ordinarios y cambian evidentemente los números en función de la distribución que teníamos, porque son cosas que van a tener que ajustarse en el ordinario, trasladarse del extraordinario al ordinario”.

Interviene la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Si bien es cierto que el 926 ha sido un programa deficitario, valorábamos la posibilidad y se conversó la vez pasada que estos recursos se pueden ver reflejados por el producto del COVIT-19, que hay mucha carga de trabajo en la parte jurisdiccional que puede verse afectada, que si se fueran a plantear algunos planes de trabajo se pudieran realizar en el ámbito jurisdiccional que es la parte sustantiva de la institución, lo anterior para su valoración”.

Consulta el presidente, magistrado Cruz: “¿Están de acuerdo con la licenciada Nacira?”

Manifiesta el integrante Montero: “Preferiría que fuera el programa 926, es el que más sufre anualmente al dar soporte a las demás áreas del Poder Judicial, en los últimos años hemos observado que hemos tenido que recortar permisos, limitar fechas y demás, por ejemplo lo que analizamos hoy en este Consejo, se plantea el tema de las audiencias virtuales, que es una buena iniciativa, en materia laboral y civil, pero inmediatamente repercute en la Dirección de Tecnología de la Información, que es quien tiene que dar soporte y esas solicitudes las podemos hacer gracias al programa 926 y si manejamos alguna holgura, en cambio en el programa 927 históricamente nos ha ido un poco mejor, porque el plan penal se deriva de algunos sobrantes que hemos podido generar en el 927, me parece que el programa 926 es el que ha estado más limitado y que cada vez se demanda más de este, con la Dirección de Gestión Humana lo estamos viviendo, este tema de la Contraloría General de la República recae en las Direcciones de Gestión Humana y de Tecnología de la Información, muchas veces no tenemos capacidad para responder, preferiría que si tenemos que asignar recursos, podría ser al 926, para tener ese soporte para las demás áreas”.

Pregunta el presidente, magistrado Cruz: “¿Queda el proyecto de acuerdo.?”.

Contesta la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana: “En realidad no tiene mayor impacto si lo hacemos específico o genérico, es una redistribución que tenemos que hacer general del mismo traslado, en caso de los ordinarios a extraordinarios y ahí terminamos haciendo ajustes ”

Indica el presidente, magistrado Cruz: “Aprobamos la propuesta como viene”.

Sin objeción alguna, **se acordó**: **1)** Aprobar la solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva, por lo tanto, incluir ¢50 millones en la Partida 7 (Transferencias de Capital) para el Fideicomiso de Construcciones y ¢160 millones, distribuidos en ¢100 millones para el reforzamiento de los contratos de seguridad según demanda y ¢60 millones para el reforzamiento de los servicios contratados de limpieza también según demanda, a distribuir entre los Programas 926 y 927 de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Seguridad** | |
| 926 | ₡    80.000.000,00 |
| 927 | ₡    20.000.000,00 |
| **Total** | **₡ 100.000.000,00** |
| **Limpieza** | |
| 926 | ₡    40.000.000,00 |
| 927 | ₡    20.000.000,00 |
| **Total** | **₡    60.000.000,00** |

**2)** Aprobar que la Dirección de Gestión Humana ajuste la subpartida de suplencias conforme las necesidades institucionales, recursos que se requerirán para fortalecer las sustituciones y atender la carga de trabajo producto del rezago que se pueda generar a partir de los efectos de la pandemia COVIT-19.

La Dirección Ejecutiva, la Dirección de Planificación y la Dirección de Gestión Humana, tomarán nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO IV**

**Documento N° 5655-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, informa que mediante oficio 4431-2020 de este 12 de mayo, la Secretaría de la Corte comunicó a la Dirección de Planificación el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión 42-2020, artículo XXII, al conocer el informe N° PJ-DGH-0174-2020 suscrito por **la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, en el que informa sobre el resultado del análisis de los números de puestos de la clase de Técnico Jurídicos medio tiempo así como de las recomendaciones mencionadas en el informe de la Dirección de Planificación N° 1149-PLA-MI-2019**. El Consejo Superior dispuso lo siguiente:

***Se acordó:1.-)*** *Tener por recibido el informe N° PJ-DGH-0174-2020 del 15 de abril de 2020, suscrito por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, y trasladarlo a la Dirección de Planificación para que sea estudiado en las sesiones de presupuesto, lo anterior por haberse solicitado así en sesión N° 21-2020 celebrada el 13 de marzo 2020, artículo III.* ***2.)*** *Trasladar el presente acuerdo a la Departamento de Financiero Contable, para que realice el estudio correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles y emita la certificación de contenido presupuestario, para hacerle frente al cambio de las plazas que tienen horario de medio tiempo a tiempo completo, para que éstas inicien partir del 1 de junio de 2020.*

- 0 -

El oficio de la Secretaría de la Corte indica lo siguiente:

*“(…)*

*“Mediante acuerdo del Consejo Superior sesión extraordinaria N° 21-2020 celebrada el 13 de marzo 2020, artículo III, se solicita a la Dirección de Gestión Humana lo siguiente:*

*“****4)*** *La Dirección de Gestión Humana deberá de forma prioritaria realizar el proceso de recalificación de los Fiscales que fue informado en la sesión de trabajo de análisis de presupuesto extraordinario del 06 de marzo, para lo cual deberá informar en los próximos 10 días de comunicado este acuerdo las acciones realizadas.”*

*Por lo anterior, se realiza un análisis de los números de puestos de la clase de Técnico Jurídicos medio tiempo así como de las recomendaciones mencionadas en el informe de la Dirección de Planificación N° 1149-PLA-MI-2019 del 19 de julio de 2019, donde se determina lo siguiente:*

* *FISCALÍA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *350287* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 350287.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *19948* | *Propiedad* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 19948.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: La plaza 350287 que se pretende reasignar se encuentra vacante, sin embargo, esta actualmente ocupada por una persona interina; se deben valorar los requisitos y continuidad de la persona ya que la clase a reasignar corresponde a una clase profesional.*

* *FISCALÍA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLÁNTICA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *103244* | *Propiedad* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 103244.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *103245* | *Propiedad* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 103245.*  *\*Trasladar el puesto a la FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: Las plazas 103244 y 103245, presentan la misma persona nombrada en propiedad, por lo que para realizar el movimiento que menciona la Dirección de Planificación, la persona propietaria del puesto debe de renunciar a alguna de las plazas; por lo que se considera que para el año 2020 a ambos puestos se les otorgue permiso con goce de salario art 44 y uno de ellos sea trasladado para la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales manteniendo siempre la Condición de Técnico Jurídico; para el próximo año 2021, se deben cambiar las jornadas laborales a 8 horas, sin embargo, para efectuar dicho cambio la propietaria debe de renunciar a alguno de los puestos, preferiblemente al que se propone trasladar ya que no puede tener dos propiedades con jornada laboral de 8 horas cada uno.*

* *FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *103231* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 103231.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *378561* | *Vacante* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 378561.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: Las plazas 103231 y 378561, se encuentran vacantes, sin embargo, están actualmente ocupadas por una misma persona en condición interina. Se deben valorar los requisitos y continuidad de la persona ya que la clase a reasignar corresponde a una clase profesional. No obstante, para esta oficina se estaría trasladando el puesto 103245 de la Fiscalía Adjunta II Circ. Jud. Zona Atlántica, por lo que eventualmente la persona interina actual puede ser nombrada en esta plaza.*

* *OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *352778* | *Vacante* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 352778.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *352779* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 352779.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: La persona servidora que actualmente viene nombrado no se vería afectado ya que se encuentra en dos puestos vacantes y en la misma oficina, por lo que se le estaría nombrando el tiempo completo que actualmente cumple, dejando la otra plaza para ser reasignada.*

* *FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *367650* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 367650.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *19950* | *Propiedad* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 19950.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: La plaza 367650 que se pretende reasignar se encuentra vacante, sin embargo, esta actualmente ocupada por una persona interina, se deben valorar los requisitos y continuidad de la persona ya que la clase a reasignar corresponde a una clase profesional. Es importante indicar que la misma persona interina es nombrada sustituta en la plaza 19950 por lo que cumpliría la función en tiempo completo.*

* *FISCALÍA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *352773* | *Propiedad* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 352773.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |
| *352774* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal Auxiliar.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 352774.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: La plaza 352774 que se pretende reasignar se encuentra vacante, sin embargo, esta actualmente ocupada por una persona interina, se deben valorar los requisitos y continuidad de la persona ya que la clase a reasignar corresponde a una clase profesional. Es importante indicar que la misma persona interina es nombrada sustituta en la plaza 352773, por lo que cumpliría la función en tiempo completo.*

* *FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *19902* | *Propiedad* | *\*Ajustar Jornada laboral a 8 horas.*  *\*Trasladar la plaza a la Fiscalía General.*  *\*La persona deberá laborar ½ jornada en la Fiscalía Ambiental y ½ jornada Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 19902.*  *\*Trasladar la plaza a la Fiscalía General.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: Para la recomendación “La persona deberá laborar ½ jornada en la Fiscalía Ambiental y ½ jornada Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.”, este sería un tema interno entre las propias oficinas, y los permisos de movimientos en la PIN se les estaría otorgando a la oficina donde se traslade el puesto. Es menester indicar que la persona interina es nombrada sustituta en la plaza 378562 de la oficina Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por lo que cumpliría la función en tiempo completo, a su vez se le debe indicar a la persona propietaria del puesto el cambio de jornada laboral.*

* *FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición*** | ***Recomendación Planificación, sesión ACS N° 70-19, del 8/08/2019, art LXXV.*** | ***Escenario para 2020*** | ***Escenario para 2021*** |
| *378562* | *Vacante* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.* | *\*Reasignar el puesto a Fiscal.*  *\*Trasladar el puesto a la Fiscalía General.*  *\*Reforzar la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.*  *\* Otorgar pcgs art 44, por medio tiempo a la plaza 378562.* | *\* Ajustar la jornada laboral del puesto a 8 horas.* |

*Nota: La plaza 378562 que se pretende reasignar se encuentra vacante, sin embargo, esta actualmente ocupada por una persona interina, se deben valorar los requisitos y continuidad de la persona ya que la clase a reasignar corresponde a una clase profesional. Cabe indicar que la persona interina es la misma persona que ocupa el puesto 19902 de la oficina Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.*

*Es importante mencionar que los puestos que serían recalificados no se encuentran en ningún trámite de concurso.*

*Por las razones expuestas en la sesión de trabajo de Consejo Superior del 06 de marzo de 2020 sobre la imposibilidad modificar el horario de medio tiempo a tiempo completo, sólo vía Ley de Presupuesto y esto hasta el 2021, se solicita lo siguiente:*

1. *Autorizar los movimientos mencionados en las columnas* ***“Escenario para 2020”*** *y* ***“Escenario para 2021”.***
2. *Indicar la fecha de inicio de los permisos con goce de salario art 44, traslados de puestos así como de las reasignaciones, con el fin de trasladar al Macro Proceso Financiero Contable, los cálculos de estimaciones para la respectiva certificación de contenido, para los siguientes números de puesto:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Clase Puesto Actual*** | ***Clase Puesto Propuesto*** | ***Pcgs art 44, ½ Jornada Laboral a la clase de Puesto.*** |
| *350287* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL*** | ***FISCAL*** |
| *19948* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *103244* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *103245* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL AUXILIAR*** | ***FISCAL AUXILIAR*** |
| *103231* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL AUXILIAR*** | ***FISCAL AUXILIAR*** |
| *378561* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *352778* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *352779* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL AUXILIAR*** | ***FISCAL AUXILIAR*** |
| *367650* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL AUXILIAR*** | ***FISCAL AUXILIAR*** |
| *19950* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *352773* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *352774* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL AUXILIAR*** | ***FISCAL AUXILIAR*** |
| *19902* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* | *TÉCNICO JURÍDICO* |
| *378562* | *TÉCNICO JURÍDICO* | ***FISCAL*** | ***FISCAL*** |

1. *Informar las modificaciones a las siguientes personas:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N° Puesto*** | ***Condición Plaza*** | ***Nombre de la persona Propietaria*** | ***Nombre de la persona Interina o Sustituta.*** |
| *350287* | *Vacante* | *-* | *DIEGO ARMANDO DELGADO MONTERO* |
| *19948* | *Propiedad* | *RAQUEL JOHANNA BENAVIDES SANCHEZ* | *-* |
| *103244* | *Propiedad* | *FLOR DE MARIA PERAZA MARTINEZ* | *ALEXANDER OCAMPO OCAMPO* |
| *103245* | *Propiedad* | *FLOR DE MARIA PERAZA MARTINEZ* | *ALEXANDER OCAMPO OCAMPO* |
| *103231* | *Vacante* | *-* | *ALICIA VARGAS GUTIERREZ* |
| *378561* | *Vacante* | *-* | *ALICIA VARGAS GUTIERREZ* |
| *352778* | *Vacante* | *-* | *ROMAN JOSE CHEVEZ ESPINOZA* |
| *352779* | *Vacante* | *-* | *ROMAN JOSE CHEVEZ ESPINOZA* |
| *367650* | *Vacante* | *-* | *BIANKA PRISCELA SANDOVAL ERAS* |
| *19950* | *Propiedad* | *MARIA AUXILIADORA JIMENEZ CAMPOS* | *BIANKA PRISCELA SANDOVAL ERAS* |
| *352773* | *Propiedad* | *LINA MAGALLY SPINELLI MORA* | *CAMILO ROBERTO FLORES PACHECO* |
| *352774* | *Vacante* | *-* | *CAMILO ROBERTO FLORES PACHECO* |
| *19902* | *Propiedad* | *SILVIA MARIA SOLIS DAVILA* | *-* |
| *378562* | *Vacante* | *-* | *SILVIA MARIA SOLIS DAVILA* |

*- 0 –*

*Manifiesta la Directora Ejecutiva Romero Jenkins: “Es tema es para fortalecer el Área de Anticorrupción, que fue un compromiso de la Corte Plena y el Consejo Superior, que se ha preocupado por atenderlo, en su momento se valoró las restricciones de creación de plazas y que esta fuera una alternativa en convertir plazas que son de medio tiempo a tiempo completo.*

*Aquí viene la propuesta en concreto que nos hace la Dirección de Gestión Humana, pero me surge una duda, y es que ellos al final lo que solicitan es para que se les autorice los movimientos, pero en la nota señalan que se debe de indicar la fecha de inicio de los permisos, con el fin de trasladar al Departamento Financiero Contable los cálculos de las estimaciones.*

*Lo que sugiero al Consejo es que primero debería hacerse la estimación, saber ¿cuánto es? y una vez que se disponga el dato,  tener claro que la institución tiene el contenido presupuestario mediante una certificación y estudiar esta solicitud.*

*Lo conveniente sería decirle que se estima que esta solicitud comience a operar a partir del primero de junio y que la Dirección de Gestión Humana y el Departamento Financiero Contable, coordinen lo relativo al contenido presupuestario e informen a este Consejo.*

*¿Lo que me preocupo fue eso, será que se indica que se autoricen los movimientos? Pero después dice, indicar el inicio para ver si se pueden hacer la certificación, me confundió ese orden de las cosas, de que sea de presupuesto.*

*Otra sería, indicar que este Consejo estimaría que podría iniciar a partir de una fecha determinada, que se traslade a la sesión de presupuesto para que con los cálculos respectivos y la acreditación de que hay recursos, ya en sesión se tome una determinación.”*

*Añade el Presidente magistrado Cruz: “Hay voluntad para hacerlo, hay que ponerles cuidado a los detalles, no parece ser mucho.”*

*Indica la Directora Ejecutiva Romero Jenkins: “Para el tema presupuestario, habría que decir una fecha porque ellos requieren hacer la estimación, es lo que viene en el punto dos.”*

*Señala el Presidente magistrado Cruz: “Podría ser 1 de junio.”*

*Agrega la Directora Ejecutiva Romero Jenkins: “Me parece, porque de esa forma en mayo se organiza y la máster Emilia Navas se dispone de todo que se requiera de previo a que inicien.”*

***Se acordó:1.-)****Tener por recibido el informe N° PJ-DGH-0174-2020 del 15 de abril de 2020, suscrito por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, y trasladarlo a la Dirección de Planificación para que sea estudiado en las sesiones de presupuesto, lo anterior por haberse solicitado así en sesión N° 21-2020 celebrada el 13 de marzo 2020, artículo III.* ***2.)*** *Trasladar el presente acuerdo a la Departamento de Financiero Contable, para que realice el estudio correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles y emita la certificación de contenido presupuestario, para hacerle frente al cambio de las plazas que tienen horario de medio tiempo a tiempo completo, para que éstas inicien partir del 1 de junio de 2020.*

*La Fiscalía General de la República y la Dirección de Gestión Humana, tomarán nota para para lo que cada uno corresponda.* ***Se declara acuerdo firme.****”*

- 0 -

Refiere la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana: “De la parte técnica se ha venido valorando a nivel de presupuesto y Hacienda, es que podemos hacer las reasignaciones pero solo por medio tiempo, porque el aumento de horas no lo podemos registrar para el año 2020, para el año 2021 si, a nivel de la Ley de Presupuesto, ya las podemos ajustar, pero para lo que resta del año no le podemos aumentar las horas, solo podemos hacer las reasignaciones, por lo que sería hacer las reasignaciones para el 2020 y darles permiso con goce de salario para que puedan completar las 8 horas”.

Interviene la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Lo vimos en un principio en la agenda ordinaria y se pasó a agenda presupuesto, pero tuve la duda no para efectos de formulación 2021, sino para este si tenemos el contenido, porque debería incorporarse”.

Contesta la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana: “Eso si lo teníamos valorado”.

Dice la máster Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Entonces para que se adicione y quede constando en las diligencias”.

Pregunta el presidente, magistrado Cruz: “¿Algo más licenciada Nacira?”.

Responde la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “No, solamente”.

- 0 -

Por lo anterior, se adjuntan las certificaciones de contenido presupuestario N° 137-P-2020 y 139-P-2020 emitidas por el Departamento de Financiero Contable en donde se respaldan lo movimientos supracitados.



- 0 -

Sin objeción alguna, **se acordó:** **1.)** Aprobar el informe N° PJ-DGH-0174-2020 presentado por la Dirección de Gestión Humana que conllevan los ajustes respectivos en la relación de puestos del Poder Judicial. **2)** Comunicar a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia las acciones realizadas para cumplir con el acuerdo de la Corte Plena para reforzar la Fiscalía de Probidad. **3.)** Se deja constancia que existe contenido presupuestario para hacerle frente a los movimientos supracitados, así indicado en las certificaciones de contenido presupuestario N° 137-P-2020 y 139-P-2020 emitidas por el Departamento de Financiero Contable.

La Dirección de Planificación tomará nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO V**

**Documento N° 5657-20**

|  |
| --- |
| La Licda. Nacira Valverde informa que mediante correo electrónico de este jueves 7 de mayo de 2020, la servidora. Yacira Segura Guzmán Prosecretaria General de la Secretaría General de la Corte, solicitó a la Dirección de Planificación incluir en la agenda de Consejo Superior de Presupuesto, la solicitud realizada mediante Oficio 1062-DRA-2020, remitido por el Lic. Abelardo Solano Díaz y el MSc. Walter Espinoza Espinoza, Jefe de la Delegación Regional de Alajuela y Director General del Organismo de Investigación Judicial, respectivamente; en relación con el Informe **N° 434-PLA-RH-OI-2020 del Departamento de Planificación, referente al estudio de Requerimiento Humano del Modelo de Tramitación de Juzgados de Ejecución de la Pena.**  En este oficio se indica:  ***“(…)***  *Estimados señores:*  *Con ocasión de lo que se expone en el* ***Oficio N° 3874-20*** *de la Secretaría General de la Corte* ***(oficio adjunto)****, y en relación con la transcripción del acuerdo tomado por ese Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto* ***N° 38-2020****, celebrada el* ***17 de abril del 2020****, “****ARTÍCULO XVI****,* ***DOCUMENTO N°4571-2020****, en donde con base en el* ***Informe N° 434-PLA-RH-OI-2020*** *del Departamento de Planificación, referente al estudio de Requerimiento Humano del Modelo de Tramitación de Juzgados de Ejecución de la Pena, se recomienda que las dos plazas de juez 2 y otra de juez Supernumerario Especializado en Ejecución de la Pena asignadas anterior y oportunamente a los Tribunales de Justicia de Alajuela dentro del proyecto denominado “Rediseño de Procesos del modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información”, pasen a ser* ***ordinarias*** *por temas de cargas de trabajo, se considera por nuestra parte que si tal circunstancia se llegara a valorar y eventualmente a aprobar se haría estricta y obligatoriamente necesario que de la mano a ese plan se disponga entonces también la conversión ordinaria de las dos plazas de Custodios de Detenidos (Custodio Policial) para esta Delegación Regional del OIJ de Alajuela y que como se puede establecer fueron parte indispensable como fundamental en aquel momento para poder hacer valer tal proyecto con eficiencia y eficacia, esto toda vez que de no llegarse a tomar esto en cuenta resultaría totalmente incongruente para el fin que se procura con dicha propuesta.-*  *Es de señalar que lo anteriormente planteado no deviene de un mero capricho ni mucho menos de una solicitud antojadiza, pues es evidente que el estudio en mención no es integral y descuida un aspecto de suma trascendencia y del que en definitiva carece, resultando más bien sustentarse nuestra pretensión en un criterio de razonabilidad y que se logra demostrar con motivo de la justificación misma que se plantea y extrae del oficio en estudio que aquí nos ocupa y que evidentemente nos vendría a cubrir en consecuencia a todos, esto al indicarse de forma literal por la misma Dirección de Planificación en su página 2 lo siguiente:*  ***II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada***  ***Los recursos se solicitan con el propósito de atender el crecimiento registrado en la carga de trabajo debido a la celeridad alcanzada en los Tribunales de Juicio rediseñados y que han aumentado la cantidad de personas sentenciadas. En los últimos 24 años (1995 a 2019), el factor humano solo creció 63% en Ejecución de la Pena; en tanto la entrada de casos nuevos lo hizo en 89% y el circulante en 108%.***  ***Igualmente, previniendo la alta entrada de incidentes y el incremento de recurso humano que reorganizó la Defensa Pública en los Tribunales de Alajuela para abordar la demanda del servicio, atendiendo también la resolución de la Sala Constitucional para dar una respuesta oportuna a la población privada de libertad. Igualmente, se debe hacer frente al aumento de la carga de trabajo en estos Tribunales por el incremento de los brazaletes electrónicos que se han brindado como medidas alternas de las penas, lo que provoca mayor demanda de servicios es los Tribunales de la Ejecución de la Pena.****(sic)*    *Con base en lo anterior, y conforme a la insuficiente cantidad de personeros que componen en la actualidad la Sección de Cárceles del OIJ de Alajuela, en este caso conformada por 28 servidores sin contar a su Encargado (Coordinador de Oficina de Apoyo Jurisdiccional), así como también con la exposición de los números que muestran la alta actividad laboral que en dicha oficina se lleva a cabo y que manifiesta, mes a mes, una tendencia de incrementar cada vez más las cargas de trabajo ya de por sí excesivas* ***(ver cuadros estadísticos en el archivo digital adjunto)****; consideramos que en el caso de llegarse a ratificar la creación de las plazas de los Jueces en referencia se debería valorar también la parte operativa y logística que le corresponde atender ciertamente a este Organismo, pues de lo contrario representaría una evidente afectación en nuestro perjuicio por el aumento de las labores que ello nos representaría, esto sin estimarse de que tal descuido podría incluso pasarle una factura al área jurisdiccional que se vería igualmente afectada muy a pesar de crecer en recurso, eso al no considerarse ese otro elemento de gran valor y trascendencia que le viene a dar sin mayor cuestionamiento a la Judicatura uno de los principales soportes para el desarrollo de su labor jurisdiccional; resultando en consecuencia, como se reitera nuevamente y por último, la total necesidad de que se tome en cuenta entonces la creación ordinaria de las dos plazas de Custodios de Detenidos que habían sido dispuestas en aquella oportunidad con permiso con goce de salario y sustitución (en el caso en particular del OIJ de Alajuela las plazas de custodio números 367989 y 44440); y de las que también, valga la oportunidad apuntar, se mantuvo su continuidad apenas hasta el trimestre anterior, eso muy a pesar de que sí se conservaron en esa condición las de los Jueces antes señaladas, lo cual nos provoca demoras y entorpecimiento en nuestras actividades ordinarias y de agenda diaria; planteamiento que consideramos debe ser conocido por ese Honorable Consejo para su consideración y lo que a bien se tenga disponer.-*  (…)”.  - 0 - |
| En sesión N° 21-18 celebrada el 15 de marzo de 2018, artículo XVIII, se tuvo por recibido el informe de la licenciada Patricia Álvarez Mondragón, Coordinadora de Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica y se autorizó la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz, con las observaciones y recomendaciones dadas. Asimismo, se instó a la Defensa Pública para que haga uso de los sistemas de videoconferencia ya que dicha herramienta, agiliza los procesos judiciales, en el tanto, las audiencias, juicios y otros se realizan aunque las personas involucradas se encuentren en diferentes lugares o países  Seguidamente, en sesión N° 19-19 celebrada el 1 de marzo de 2019, artículo XLVI, se tuvo por rendido el oficio N.º 34-PLA-OI-2019 de la Dirección de Planificación, en el que se remite el informe relacionado con el Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información, Modelo de Tramitación del Juzgado de Ejecución de la Pena.  Mediante la circular número 57-2020, del 27 de marzo de 2020, la Secretaría General de la Corte hizo de conocimiento de todos los despachos judiciales de país que conocen materia penal que este Consejo Superior en sesión extraordinaria número 29-2020, celebrada el 27 de marzo de 2020, artículo único, con fundamento en las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, por el Decreto Ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020, en que se declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, así como en las atribuciones conferidas en el punto K) de la circular de la Secretaría General de la Corte número 52-20 del 20 de marzo de 2020 (acuerdo de Corte Plena tomado en sesión número 15-2020 del 20 de marzo de 2020); acordó comunicar las disposiciones para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal durante la atención de la emergencia nacional por los riesgos de contagio del virus que ocasiona la enfermedad del Covid-19, dentro de las cuales se encontraba la siguiente: “1.9.- Con el objetivo de poder coordinar con el Ministerio de Justicia y Paz la utilización de videoconferencias las oficinas penales deberán levantar un listado de todas las diligencias programadas con personas privadas de libertad a partir del 1° de abril hasta el 30 de junio (NUE, fecha de vencimiento de la prisión preventiva, nombre de la persona, centro penal donde se encuentra, fecha y hora de la diligencia). Este listado también servirá al Ministerio para el seguimiento respectivo de las condiciones de salud de esa persona y revisar su capacidad para poder hacer la videoconferencia. Las oficinas penales que no cuenten con la tecnología para realizar la videoconferencia deberán buscar solventar en la medida de lo posible con alguna otra oficina o despacho cercano. El Ministerio de Justicia y Paz dará los contactos oficiales para poder remitir esa lista.”  Seguidamente, en sesión N° 30-20 celebrada el 31 de marzo de 2020, artículo XL, se Aclaró el punto número 1.9. de la circular número 57-2020, del 27 de marzo de 2020, denominada “disposiciones para el funcionamiento del sistema de justicia penal durante la atención de la emergencia nacional por los riesgos de contagio del virus que ocasiona la enfermedad del Covid-19, conforme a lo dispuesto en la circular de la Secretaría General de la Corte número 52-20 del 20 de marzo de 2020”, en el sentido de que las audiencias en materia penal se realizarán preferiblemente y en la medida que los recursos lo permitan, por videoconferencia, sin que ello implique que sea el único medio para realizar las audiencias, las cuales, tratándose de personas privadas de libertad deben llevarse a cabo.    - 0 -  **Antecedentes relacionados con la Fiscalía de Ejecución de la Pena**  En sesión N° 19-19 celebrada el 1 de marzo de 2019, artículo XLVI, en lo que interesa, se tuvo por rendido el oficio N.º 34-PLA-OI-2019 de la Dirección de Planificación, en el que se remite el informe relacionado con el Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información, Modelo de Tramitación del Juzgado de Ejecución de la Pena, además se solicitó a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República, que deberán realizar un esfuerzo en la redistribución de su personal, para que se asignen a lo interno la cantidad de plazas recomendadas (4 fiscalas/es y 4 custodias/os de personas detenidas), que atenderán específicamente la materia de Ejecución de la Pena en Alajuela, por lo que deberán comunicar a la brevedad posible a este Consejo y a la Dirección de Planificación las medidas adoptadas y las fechas en que se podrá disponer de dicho recurso, en aras de no perjudicar los objetivos del modelo propuesto.    - 0 -  **Antecedentes relacionados con el ámbito jurisdiccional**  En sesión N° 73-19 celebrada el 20 de agosto de 2019, artículo XXXV, en lo que interesa se tuvo por rendido el informe N° 1070-PLA-MI-2019 de la Dirección de Planificación, relacionado con el rediseño de tramitación del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, además, en vista de que el modelo de tramitación aprobado para los juzgados de ejecución de la pena del país incluye importantes mejoras tecnológicas a nivel de los sistemas de información que facilitarían la gestión aún sin personal adicional, se reactivan los efectos del acuerdo tomado en sesión 19-19, artículo XLVI.    - 0 - |

Refiere la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Se hace la solicitud porque en un estudio de plazas, se aprueban recursos para el Juzgado de Ejecución de la Pena y hace un recuento de reforzamientos que se le han dado también a la Defensa Pública, por lo que me permití crear unas propuestas que no venían y no solamente indicar que se deniegan, sino que se propone que se incluya el antecedente a las acciones realizadas ante el Ministerio de Justicia para incorporar todo lo relacionado con espacios de video conferencia, porque todo lo que se está haciendo para ampliar esos servicios evidentemente va a ayudar en los Juzgado de Ejecución de la Pena, en el tema de traslados de las personas privadas de libertad, asimismo, incluir también el antecedente de la Defensa Pública, porque no fue ahí donde se incorporaron plazas extraordinarias ni mucho menos, sino que fue la misma Defensa Pública, la que con su distribución del recurso interno logro darle más recursos a la tarea que ya también la Sala Constitucional había indicado que tenía que darle mayor atención. Igualmente en la Fiscalía de la Ejecución de la Pena, la recomendación en un informe que se mandó al Consejo Superior, es precisamente una reubicación de personas que están trabajando en San José para que se trasladen a Alajuela, la recomendación no se puede dar del todo en este momento porque el espacio físico de Alajuela está limitado, sin embargo, también se requiere de reacomodo interno y esto sería con recursos internos de la Fiscalía. Finalmente, incluir el antecedente del año pasado, en donde se verifica que no son plazas nuevas, sino de los mismos recursos que se tuvieron de periodos anteriores es que se logró modificar la condición de la plaza de judicatura y se están manteniendo en este momento los jueces para este Juzgado. Motivando con estos antecedentes, le hacemos la propuesta a ustedes, si a bien lo consideran”.

- 0 -

Sin objeción alguna, **se acordó: 1)** Si bien se conoce la carga de trabajo de las personas custodias, denegar la solicitud realizada por el licenciado. Abelardo Solano Díaz y el máster Walter Espinoza Espinoza, por su orden Jefe de la Delegación Regional de Alajuela y Director General del Organismo de Investigación Judicial, en virtud de los lineamientos del Ministerio de Hacienda y directrices institucionales de formulación presupuestaria 2021, hay que resaltar que las plazas brindadas en la Defensa Publica y el Ministerio Público, corresponden a recursos propios que han reordenado y priorizado las direcciones de esos ámbitos, y en el caso del ámbito jurisdiccional corresponden a plazas ya existentes, que también se redirecciono su uso, lo cual no involucra crecimiento de plazas nuevas para el Poder Judicial **2)** Solicitar a la Dirección Ejecutiva informar detalladamente a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial de las acciones que se están realizando para reforzar el equipamiento y maximizar el uso de las video conferencias, en los Centros Penales, de todo el país, lo que puede impactar en el traslado de personas detenidas. **3)** Estar atentos a la propuesta que realizará la Comisión de Asuntos Penales a la Corte Plena, para implementar las audiencias virtuales en los Juzgados de Ejecución de la Pena por medio del sistema TEAMS, lo cual podrá impactar en la forma de trabajo de los diferentes ámbitos auxiliares del Poder Judicial.

La Dirección de Planificación tomará nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO VI**

**Documento N° 5659-20**

La licenciada Nacira Valverde indica que mediante oficio 4395-2020, la Secretaría de la Corte informó a la Dirección de Planificación el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria N° 40-2020 celebrada el 23 de abril de 2020, artículo XXIV, que literalmente dice:

***“Se acordó:*** *Acoger la gestión anterior, en consecuencia; solicitar a la Dirección de Planificación que valide la necesidad del recurso y la viabilidad de incluir el requerimiento en las plazas a considerar para el presupuesto 2021.* ***Se declara este acuerdo firme.”***

- 0 -

Lo anterior se refiere a la gestión realizada por el Lic. Mariano Rodríguez Flores, Jefe interino del Área de Gestión y Apoyo, mediante oficio 352-CACMFJ-AGA-2020 del 14 de abril del 2020,**quien informó que el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, no dispone de recurso Técnico Supernumerario para atender la necesidad planteada para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste**, de acuerdo con lo recomendado en el informe 1337-PLA-OI-2019.

El informe indica lo siguiente:

*“La Corte Plena en sesión No. 10-20 celebrada el 2 de marzo de 2020, artículo VIII, dispuso lo que literalmente dice:*

*En atención al oficio N°27-2020, comunicando el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión Nº105-19, celebrada el 3 de diciembre del 2019, artículo XVIII, que dispuso:*

***“1.)*** *Tomar nota de la comunicación que hace el ingeniero Dixon Li Morales, Jefe interino del Proceso Ejecución de las Operaciones de la Dirección de Planificación, mediante oficio N° 1941-PLA-SOI-2019 del 18 de noviembre de 2019 y dejar sin efecto el informe solicitado en sesión Nº114-17 celebrada el 21 de diciembre de 2017, artículo C, referente a la valoración del personal supernumerario que se encontraba cedido en diferentes despachos u oficinas judiciales.* ***2.)*** *Trasladar el citado informe al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, para su estudio e indique a este Consejo lo que corresponda.****”***

*Analizado el acuerdo y en atención al punto 2, se informa:*

1. *El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, administra las plazas de Técnicos Supernumerarios según lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión Nº101-2016, celebrada el 3 de noviembre de 2016, artículo L.*
2. *Según lo acordado en la sesión de cita, el Consejo Superior aprobó los traslados de plazas contenidos en la recomendación 5.4 el informe 1725-PLA-2016, sobre la distribución de las plazas y destacar de manera permanente en diferentes oficinas judiciales, los puestos de Técnico Supernumerarios así validados por la Dirección de Planificación.*
3. *Desde el año 2017, este Centro ha mantenido un estricto control y revisión periódica sobre los planes de trabajo que atiende el programa de Técnicos Supernumerarios.*
4. *El Consejo Superior de la sesión Nº26-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019, artículo XXXVI, aprobó el traslado de las plazas de Técnico Supernumerario 15722 y 15853 a la Sala Constitucional y 15747 a la Secretaria General de la Corte.*
5. *El recurso de puestos en categoría de Técnicos Supernumerarios adscritos en la actualidad a este Centro, se encuentran ocupados por personas en condición de propietarios.*
6. *Estos recursos, se encuentran asignados a diferentes planes de trabajo destacados en el Primer Circuito de San José.*
7. *Los planes de trabajo obedecen a diferentes gestiones y solicitudes que proviene de los despachos y que se canalizan a través de la Administración del I Circuito Judicial de San José, para dar cumplimiento con el Modelo de sostenibilidad del Poder Judicial.*
8. *Algunas plazas atienden colaboraciones que ha dispuesto el Consejo Superior, al conocer solicitud de alguna oficina judicial o estudio de la Dirección de Planificación.*
9. *Otras están destacadas para sustituir personas y recursos que, por medidas cautelares has sido trasladados a este Centro por acuerdo de Consejo Superior.*

*Del análisis realizado se determina, que no se dispone de recurso Técnico Supernumerario para atender la necesidad planteada para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste.*

*Para las consideraciones del Consejo Superior, es importante acotar que, si estiman destacar alguna de las plazas adscritas a este Centro para prestar colaboración al Primer Circuito Judicial de Guanacaste, se estarían variando condiciones esenciales del trabajador en condición de propietario; así como, las implicaciones presupuestarias para gastos por traslados, alimentación y hospedaje.*

*Por lo anterior, se recomienda* *al Consejo Superior que, a través de la Dirección de Planificación, valide la necesidad del recurso y la viabilidad de incluir el requerimiento en las plazas a considerar para el presupuesto 2021.”*

*-0-*

*En sesión del Consejo Superior 114-17, artículo C, del 21 de diciembre de 2017, se tuvo por rendido el informe 1629-PLA-2017 de la Dirección de Planificación relacionado con el Programa de Técnicas y Técnicos Supernumerarios a nivel nacional; en el cual, entre otros puntos, se acordó solicitar a la Dirección de Planificación valorar en conjunto con el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional si las plazas de técnicos y técnicas supernumerarias que actualmente están cedidas a despachos u oficinas judiciales se mantienen o las recuperan para asignarlas a las Administraciones Regionales del país o a otros despachos que presentan una mayor necesidad, con el fin de darles el mejor uso posible dadas las circunstancias presupuestarias institucionales.*

*Asimismo, en sesión N° 68-18 celebrada el 31 de julio de 2018, artículo VIII, debido a que en diferentes gestiones el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional ha informado a este Consejo Superior que no puede colaborar con diferentes despachos judiciales por no contar con recurso supernumerario disponible, se acordó, solicitar a la licenciada Maricruz Chacón Cubillo, jefa del citado centro, que remita un informe indicando los siguientes puntos: 1.) Cantidad de jueces y técnicos supernumerarios que actualmente hay nombrados en la institución y a cargo de ese Centro. 2.) Despachos donde están nombrados y cuál fue la motivación de designarlos en ese lugar. 3.) Desde que fecha se encuentran designados en el despacho y hasta que fecha se tiene previsto que brinde colaboración, así como las actividades específicas que se encuentran desarrollando y el plan de trabajo establecido.*

*Posteriormente, en sesión N° 68-19 celebrada el 1 de agosto del 2019, artículo LVIII, se tomó nota del informe número 753-CACMFJ-AGA-2019, del 19 de julio de 2019, suscrito por la licenciada Maricruz Chacón Cubillo, Directora interina del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y el licenciado Mariano Rodríguez Flores, Jefe interino del Área de Gestión y Apoyo, mediante el cual remitieron el estado de las plazas adscritas a ese Centro de personas juzgadoras supernumerarias y técnicas supernumerarias actualizado a junio de 2019.*

*Luego, en sesión N° 79-2019 celebrada el 10 de setiembre del 2019, artículo LXXVII, se tuvo por rendido el informe N° 1337-PLA-OI-2019 de la Dirección de Planificación, relacionado con “la necesidad de recurso técnico supernumerario en el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y entre otras cosas se estuvo a la espera del informe solicitado en sesión 114-17, celebrada el 21 de diciembre de 2017, artículo C, el cual deberá rendirse a la brevedad posible.*

*Finalmente, en sesión N° 105-19 celebrada el 3 de diciembre del 2019, artículo XVIII, se tomó nota de la comunicación que hizo el ingeniero Dixon Li Morales, Jefe interino del Proceso Ejecución de las Operaciones de la Dirección de Planificación, mediante oficio N° 1941-PLA-SOI-2019 del 18 de noviembre de 2019 y se dejó sin efecto el informe solicitado en sesión Nº114-17 celebrada el 21 de diciembre de 2017, artículo C, referente a la valoración del personal supernumerario que se encontraba cedido en diferentes despachos u oficinas judiciales. Asimismo, se trasladó el citado informe al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, para su estudio e indicara a este Consejo lo que correspondiera.*

***Se acordó:*** *Acoger la gestión anterior, en consecuencia; solicitar a la Dirección de Planificación que valide la necesidad del recurso y la viabilidad de incluir el requerimiento en las plazas a considerar para el presupuesto 2021.* ***Se declara este acuerdo firme.”***

- 0 -

Dice la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación: “Sobre este informe la Dirección de Planificación ya lo había hecho, desde tiempos anteriores. El Consejo Superior había acordado que ya que los compañeros del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional habían indicado que no tenían la posibilidad de brindar el recurso, remitirlo para que se valorara en las sesiones de presupuesto de 2021. La Dirección de Planificación muestra igualmente la imposibilidad de crear plazas; lo que queda es la posibilidad latente y manifiesta de que se requiere recurso en el Circuito Judicial de Guanacaste, por eso en la propuesta se indica que se mantenga o se visibilice al menos la necesidad de que existe de crear el recurso y que no se está haciendo por las razones presupuestarias que hay a la fecha. Asimismo que el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional deberá en el momento que exista una plaza vacante o la posibilidad atender la necesidad detectada, esto para que se mantenga visible y no se deje del todo cerrada la posibilidad de que en algún momento se pueda dar ”.

Señala el presidente, magistrado Cruz: “¿Alguna observación?”

- 0 -

Sin objeción alguna**, se acordó: 1)** Mantener latente la necesidad de recursos visualizada en el informe 1337-PLA-OI-2019, dado que no existe la posibilidad de crear nuevo recurso humano, en virtud de los lineamientos del Ministerio de Hacienda y directrices institucionales de formulación presupuestaria 2021. **2.)** Deberá el Centro de Mejoramiento y Apoyo a la Función Jurisdiccional en el momento que exista una plaza vacante o posibilidad de traslado de recursos, atender la necesidad detectada con recursos internos.

La Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento a la Función Jurisdiccional, tomarán nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO VII**

**Documento N° 5660-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio **661-PLA-RH-MI-2020, con el resultado del análisis de una serie de reconsideraciones planteadas** mediante los oficios 779-DTI-2020 del 29 de abril de 2020 y 782-DTI-2020 del 30 de abril de 2020, suscritos por la M.Sc. Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020. Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, Agraria y pensión alimentaria).

En esta oportunidad se dispuso:

***“1.)*** *Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, las cuales son;  A la Jefatura de la Defensa Pública, Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo. En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria. Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población. Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo. A la Dirección de Gestión Humana. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en las que se indicó realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública. Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”. Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas. Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como: Disposición para realizar las diligencias in situ, Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.), Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género. Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia Agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública. A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación, se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, tales como: Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física. Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios. A la Dirección de la Planificación. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019; Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio.* ***2)*** *En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial.* ***3.)*** *Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020.* ***4.)*** *Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe.* ***Se declara acuerdo firme.****”*

- 0 -

Se debe leer en la parte dispositiva del acuerdo 507-PLA-RH-MI-2020 ya que se muestra error en la numeración del informe.

Este acuerdo fue comunicado mediante oficio 3897-20 del 27 de abril del 2020, a la Dirección de Planificación, Defensa Publica I Circuito Judicial, Gestión Humana y Dirección de Tecnología de Información.

En esta reconsideración la señora M.Sc. Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información en el oficio 182-DTI-2020 reitera el contenido del oficio 779-DTI-2020, y se plantea:

***(Primera Reconsideración. Dirección de Tecnología de Información)***

*“Se indica que, para el primer punto, en los diferentes sistemas es posible identificar cuando un intervienes es una persona servidora judicial e indígena, permitiendo este indicador generar reportes de la cantidad de asuntos en esta condición.”*

***(Respuesta a primera Reconsideración. Dirección de Planificación)***

Dichos oficios responden a la recomendación de la Dirección de Planificación señalada en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”*, que literalmente dice:

*“Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.”*

- 0 -

La recomendación anterior se realiza debido a que durante el estudio técnico realizado por la Dirección de Planificación para detectar las necesidades institucionales a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, se detectaron limitaciones en la información estadística para poder identificar personas usuarias indígenas o servidoras judiciales, en las bases de datos de los Juzgados, tanto para causas activas como para el histórico de estas, ya sean causas entradas o terminadas.

Al afirmar la Dirección de Tecnología de Información que la mejora se encuentra implementada, **la recomendación de la Dirección de Planificación se direcciona a la adecuada utilización de los sistemas de información por parte del personal judicial de los diferentes despachos a nivel nacional, igualmente, que se genere el reporte de los diferentes sistemas, entiéndase Gestión, Escritorio Virtual, Seguimiento de Casos con la información de los intervinientes a nivel nacional y por despacho judicial, de tal forma que pueda ser utilizado de consulta e insumo para la labor que realiza la Comisión de Acceso a la Justicia en este tema.**  Es importante recordar que, esta información estadística actualizada y fiable permite obtener con certeza de las necesidades institucionales reales. Además, son datos estadísticos que serán insumo para futuros estudios técnicos, así como la labor diaria de la Comisión de Acceso a la Justicia.

Finalmente, recordar que, en caso de que el personal judicial de los diferentes despachos del país requiera de capacitación, esta debe ser solicitada a la Dirección de Tecnología de Información.

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexos** | |
| Anexo 1 – 779-DTI-2020 |  |
| Anexo 1 – 782-DTI-2020 |  |

- 0 -

Señala la Inga. Gabriela Picado  González, Jefe, a.í. Subproceso de Modernización Institucional: “El acuerdo básicamente lo que establece es la aprobación del informe de impacto organizacional sobre la ley de pueblos indígenas y se rechazan algunas observaciones que ya habían sido planteadas en su momento tanto por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, así como por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y se mantiene lo recomendado en el informe, sin embargo, después del acuerdo presentan reconsideraciones y me voy a permitir indicar cada una de estas. En el caso de Tecnología la primera reconsideración señala que ya es posible hoy en los sistemas informáticos identificar cual persona ya sea servidora judicial o población indígena, no obstante, reiteramos que durante el estudio técnico fue imposible detectar esta necesidad, lo que hacemos es mantener la recomendación pero redireccionarla además a las oficinas para el uso adecuado de los sistemas, tomando en consideración que la Dirección de Tecnología de la Información manifiesta que la variable existe, entonces que se mantengan actualizados los sistemas y adicionalmente que se genere el reporte en relación a la incorporación de estas variables para la toma de decisiones”.

- 0 -

Sin objeción alguna, **se acordó:** Aprobar el informe 661-PLA-RH-MI-2020, con el resultado del análisis de una serie de reconsideraciones planteadas al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020, relativo al Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, Agraria y pensión alimentaria).

La Defensa Pública y la Dirección de Tecnología tomarán nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO VIII**

**Documento N° 5663-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio 690-PLA-RH-OI-2020, **Continuidad de las plazas otorgadas como resultado de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plazas por Analizar**   **ÁMBITO ADMINISTRATIVO**   | Despacho | Can-  tidad | Tipo de  plaza | Condición  actual | Recomen-  dación | Período | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dirección de Tecnología de Información | 1 | Profesional en Informática 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 |   **ÁMBITO JURISDICCIONAL**   | Despacho | Can-  tidad | Tipo de  plaza | Condición  actual | Recomen-  dación | Período | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 1 | Jueza o Jueza 5 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | Sala Primera | 2 | Profesional en Derecho 3B | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 |  | Despacho | Can-  tidad | Tipo de  plaza | Condición  actual | Recomen-  dación | Período | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 2 | Jueza o Juez 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | 4 | Técnica o Técnico Judicial 1 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 |   **ÁMBITO JURISDICCIONAL**  **(Planes de descongestionamiento)** |
| **II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**  *Se procede a analizar los recursos otorgados de manera extraordinaria para el 2020, como resultado de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil y para la ejecución de planes de descongestionamiento en oficinas y despachos que conocen materia civil y cobratoria. A poco más de un año de la reforma, se procederá a determinar los elementos necesarios que hagan visualizar la permanencia en el tiempo de las plazas concedidas.* |
| **III. Información Relevante**  **3.1 Antecedentes**   * *El nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342 fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta en el Alcance 54 del viernes 8 de abril de 2016, entrando en vigor 30 meses después de su publicación, es decir, el 8 de octubre de 2018.* * *La Dirección de Planificación mediante informe 24-PLA-MI-2017, aprobado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de Presupuesto 39-17 celebrada el 26 de abril 2017, artículo I, y por Corte Plena en sesión 15-17 del 31 de mayo de 2017, artículo IV relacionado con el Impacto Organizacional y Presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Civil para el 2018.* * *Informe de la Dirección de Planificación 32-PLA-MI-2018, aprobado por el Consejo Superior en sesión 34-18 del 25 de abril de 2018, artículo III y sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo VI, VIII, IX y X.* * *Acuerdo del Consejo Superior en sesión 38-19 del 2 de mayo de 2019, artículo I, donde se conoció el informe 555-PLA-RH-MI-2019 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil para el 2020”* * *Acuerdo del Consejo Superior 47-19 (presupuesto 2020) del 23 de mayo de 2019, artículo III donde se conoce la reconsideración 036-CJC-2019 del 9 de mayo de 2019, suscrito por el Magistrado William Molinari Vilches, Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil, por lo acordado por el Consejo Superior en sesión 38-19 del 2 de mayo de 2019, artículo I.*   **3.2. Análisis de las plazas**  *Las plazas bajo análisis se concedieron con el objetivo de apoyar la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil (Ley 9342) en octubre de 2018, lo que generó un impacto en el procedimiento, la competencia y la estructura organizacional de los despachos judiciales que se encargan de la tramitación de la materia civil.*  **3.2.1 Plaza otorgada a la Dirección de Tecnología de Información**  *El recurso concedido se ha venido otorgando desde el 2016 con la finalidad de apoyar el desarrollo de las mejoras informáticas requeridas en los sistemas que utilizan los despachos judiciales que conocen materia civil, como el Sistema de Gestión, Escritorio Virtual, el SREM y el CERODOC, entre otros.*  *Entre el 2016 y 2018 fueron desarrolladas más de 100 mejoras en los diferentes sistemas necesarios para la implementación del Nuevo Código Procesal Civil.*  *Para el año pasado se condicionó su permanencia para que finalizara en diciembre a finales de 2020, fecha en que debían estar desarrolladas e implementadas todas las mejoras de los diferentes sistemas.*  **3.2.1.1. Labores realizadas en el 2019**  *En el 2019 se tenía planificado desarrollar 17 mejoras más de diferentes sistemas, además de las labores de mantenimiento y sostenibilidad que requieren los sistemas informáticos.*  *En oficio 398-DTI-2020 del 20 de febrero de 2020, de la Dirección de Tecnología de Información, se indicó que el recurso extraordinario desarrolló 15 mejoras, dos menos de las que se tenían planeadas desarrollar, para un resultado del 88% de rendimiento respecto al objetivo establecido para el 2019. A continuación, se describen las mejoras desarrolladas en los sistemas a cargo del recurso adicional:*   1. *Sistemas Gestión en Línea, servicio envío de demandas, reparto por procedimiento,* 2. *Sistemas Recepción de Documentos (CEREDOC), envío de demandas, reparto por procedimiento,* 3. *Servicio de Tramitación, envío de demandas, reparto por procedimiento,* 4. *Sistema Escritorio Virtual, reparto por procedimiento,* 5. *Sistema Gestión, reparto por procedimiento,* 6. *Solicitudes de embargo en el Sistema Escritorio Virtual,* 7. *Sistema SREM, crear servicios para solicitudes de embargo de bienes muebles e inmuebles,* 8. *Registro de Resolución automatizada, relacionar fases y estados con datos de resolución,* 9. *Sistema Escritorio Virtual y Escritos por conocimiento,* 10. *Sistema Recepción de Documentos y Escritos por conocimientos,* 11. *Sistema Gestión en Línea y Escritos por conocimiento,* 12. *Servicios de Tramitación,* 13. *Ajustes en el Cálculo de Intereses,* 14. *Sistema Escritorio Virtual, sobre estado cancelado de escritos,* 15. *Ajustes al reparto asunto por familia para nueva estructura del Tribunal Colegiado Civil.*   *Adicionalmente el recurso se dedicó a la atención de usuarios, apoyo y seguimiento al uso de dichas mejoras en todas las oficinas civiles y atención de 106 reportes recibidos de las personas usuarias.*  ***3.2.1.2. Labores por realizar en el 2020***  *Para el 2020, el recurso adicional junto con tres recursos ordinarios se dedicará al desarrollo de más de 100 mejoras realizadas en los sistemas actuales para migrarlas al nuevo Sistema de Gestión que está en proceso de desarrollo y que según la Msc. Vivian Rímola Soto, Jefa a.í del Subproceso de Sistemas Jurisdiccionales de la Dirección de Tecnología de Información se culminará a finales de julio del 2022, con el equipo de trabajo indicado.*  *La Msc. Rímola Soto señaló que, de no contar con ese recurso, el plan de trabajo se vería afectado y no se finalizaría en el tiempo establecido, experimentando un atraso de aproximadamente diez meses, lo que tendría una incidencia negativa en los despachos civiles y su migración al nuevo Sistema de Gestión.*  ***3.2.1.3. Criterio sobre la continuidad de la plaza***  *La Msc. Rímola Soto indicó que actualmente se cuenta con 108 despachos civiles, entre juzgados y tribunales, a los cuales se les debe dar mantenimiento y sostenibilidad a los sistemas actuales, el nuevo Sistema de Gestión que está en proceso de desarrollo y atención de nuevos requerimientos que surjan como parte normal de la actualización de la plataforma, cambio de los procesos o posibles variaciones en la legislación, por lo que considera necesaria la permanencia del recurso extraordinario y en condición ordinaria.*  ***De lo analizado la Dirección de Planificación evidenció el buen uso del recurso extraordinario que ha sido concedido en estos años, siendo parte fundamental del equipo de desarrollo de las mejoras que requerían los sistemas informáticos utilizados por los despachos que conocen materia civil como resultado de la implementación del Nuevo Código Procesal Civil, no obstante, la plaza desde su origen se ha considerado que tenía una temporalidad claramente definida por el desarrollo e implementación de las mejoras requeridas para los sistemas que actualmente utilizan los despachos civiles que permitieran iniciar con los cambios requeridos por la Reforma Civil, los cuales en oficio 555-PLA-RH-MI-2019 aprobado por el Consejo Superior en sesión 38-19 del 2 de mayo de 2019, artículo I y sesión 47-19 del 23 de mayo de 2019, artículo III, se establecieron como fecha límite al 2020.***  ***Por lo anterior, la Dirección de Planificación considera que si bien el recurso cumplió con su objetivo, las mejoras que se deben implementar en el nuevo Sistema de Gestión hacen necesaria la permanencia del recurso por el 2021, máxime que es la herramienta de registro de información de la materia civil. Además, de las labores que deberá desempeñar dando mantenimiento y sostenibilidad al nuevo sistema informático.***  ***3.2.2 Plazas adscritas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ).***  *Plaza de Jueza o Juez 5*  *Al igual que las otras plazas que se analizan en el presente informe, la plaza de Jueza o Juez 5 se otorgó con la finalidad de apoyar la Reforma Civil, específicamente para el seguimiento y emisión de recomendaciones a los despachos conforme a su experiencia y como contraparte jurisdiccional en los procesos administrativos y de revisión de las recomendaciones emitidas por las plazas de seguimiento (Profesional 2) del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) en los diagnósticos que realicen en los despachos que conocen la materia civil.*  ***3.2.2.1. Labores realizadas en el 2019***  *Mediante oficio 30-CACMFJ-JEF-2020 del 12 de febrero de 2020 se indicaron las labores que la plaza extraordinaria ha venido realizando, las cuales se destacan en el siguiente detalle:*   1. *Ejecutar acciones y análisis jurídicos complejos para asesorar en materia jurídica a las instancias administrativas.* 2. *Brindar asesoría legal a los profesionales del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) y las demás dependencias administrativas que requieran un criterio experto para la correcta aplicación de la normativa relacionada con la materia Civil y de Cobro.* 3. *Revisión de las recomendaciones emitidas por las plazas de seguimiento (Profesionales 2) del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional en los diagnósticos realizados en los despachos civiles.* 4. *Emisión de recomendaciones a los despachos judiciales conforme a su experiencia y como contraparte Jurisdiccional en los procesos administrativos.* 5. *Revisión y aprobación de los expedientes recibidos en los distintos Planes de Descongestionamiento.* 6. *Fungir como punto de enlace entre las personas juzgadoras que integran los Planes de Descongestionamiento y los despachos judiciales que reciben la colaboración (expedientes pendientes para fallo y trámite).* 7. *Elaborar informes legales que deban analizar situaciones específicas para incorporar en los estudios realizados por los distintos entes administrativos.* 8. *Asistir a reuniones y conformar equipos de trabajo cuando se requieran.* 9. *Revisar y actualizar normas prácticas, circulares y protocolos, entre otros de tipo legal.* 10. *Elaborar proyectos de ley, reformas legales o consultas formuladas sobre consultas de ley, entre otros.* 11. *Analizar e investigar normativa, jurisprudencia, doctrina, expedientes y cualquier otra fuente bibliográfica para la elaboración de criterios legales, obtener y suministrar información.* 12. *Realizar visitas a los despachos judiciales para profundizar en el conocimiento de los procesos y aspectos propios de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y del rediseño realizado por el órgano técnico.* 13. *Impulsar la ejecución de las acciones pendientes según lo detectado en las visitas realizadas a los despachos que conforman la Jurisdicción Civil.* 14. *Consultar y analizar los datos estadísticos reflejados en los distintos sistemas informáticos (Escritorio Virtual, SIGMA, Agenda Cronos, Sistema de Gestión, entre otros).* 15. *Atender las consultas propias de las funciones de asesoría legal que realizan, que le formulen los superiores, compañeros y público en general, ya sea en forma personal, telefónica y vía correo electrónico.* 16. *Asistir a reuniones convocadas por distintos entes.* 17. *Confeccionar oficios sobre diversos temas.* 18. *Brindar criterio técnico para el desarrollo y aplicación de mejoras informáticas.* 19. *Rendir informes sobre temas que se le asignen en el ámbito de su competencia.* 20. *Verificar la validación de los datos estadísticos solicitados por medios de Prensa y Comunicación, así como Prensa y Comunicación del Poder Judicial.* 21. *Elaboración y publicación de cápsulas informativas sobre los avances realizados en los despachos que conforman la Jurisdicción Civil.* 22. *Elaboración de talleres de interés para la materia Civil que pueden estar en asocio con otros entes administrativos.* 23. *Realizar otras labores propias del cargo.*   *Como se demuestra existen diversas actividades asignadas a la plaza extraordinaria que han contribuido con la atención de los temas relacionados con la materia civil.*  *Ahora bien, revisando los informes de labores del 2019, aportados por el Centro de Apoyo, no se obtuvo evidencia de la realización de todas las labores asignadas a estas plazas (un recurso ordinario y el otro extraordinario), anteriormente numeradas, por el contrario, se determinó que se centraron en el 2019 a atender las siguientes actividades:*   1. *Asistencia a reuniones: tanto con despachos, como con personal del CACMFJ, Comisión de la Jurisdicción Civil y otras dependencias involucradas con el funcionamiento de los despachos civiles.* 2. *Atención de consultas: de los despachos judiciales y otros entes involucrados en la Reforma Civil* 3. *Labores de coordinación: coordinaciones con entes jurisdiccionales y administrativos para apoyar el proceso de la Reforma Civil.* 4. *Visitas: realización de visitas a los despachos que conocen de materia civil y cobratorio* 5. *Revisión de planes de descongestionamiento: en conjunto con las plazas del Centro de Apoyo.*   *Para ampliar sobre este apartado, se realizó un análisis de los informes de labores aportados, obteniendo como resultado lo siguiente:*  **Gráfico 1**  **Labores realizadas por el equipo de gestores en materia civil**  **(período 2019)**    ***Nota:*** *El informe de labores de junio no fue aportado en el informe 30-CACMFJ-JEF-2020.*  ***Fuente:*** *elaboración propia con información obtenido de los informes de labores enviados por el Centro de Apoyo,*  *Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.*  *Como se desprende, la concentración de labores del equipo de gestoría civil se centró en dos actividades, asistencia a reuniones de diferente índole que representó un 72% de la totalidad de actividades realizadas y la visita a 69 despachos judiciales que atienden materia civil y cobratoria del país, equivalente a un 25% del total de labores.*  *Adicionalmente, como es el caso de cualquier otro recurso que se conceda en la institución, tuvieron que atender una serie de labores consideradas misceláneas propias del puesto, las cuales se detallan en el anexo 1 que aportó el Centro de Apoyo.*  ***3.2.2.2. Labores por realizar en el 2020***  *Para el 2020, el Centro de Apoyo indicó que además de ejecutar las labores que realizó durante el 2019 y que fueron descritas en el apartado anterior, se dedicarán a atender los pendientes, como resultado de las visitas que se efectuaron el año pasado, que según el cronograma para el presente año se atenderán en el transcurso del primer semestre* ***(ver anexo 6.2.)****. De parte del Centro de Apoyo no se detallaron de manera puntual los pendientes que atenderán estas plazas, pero sí indican lo que realizarán de la siguiente manera:*   * *Elaboración del informe solicitado por la Dirección de Planificación para el abordaje de los pendientes relacionados con esa Dirección según las visitas* * *Impulsar la equiparación de la entrada de demandas nuevas en los Juzgados Cobratorios del Primer Circuito y Segundo Circuito Judicial de San José.* * *Visitar a los 69 despachos Civiles del país* * *Reuniones mensuales con los grupos creados para la implementación de la Reforma Procesal Civil (Dirección Tecnología de la Información, Gestión Humana, Infraestructura, Comunicación, Digesto, Cobro Judicial e Implementación Jurídica).* * *Coordinación de un consolidado SIGMA para el desarrollo de un modelo de consulta y comparativo de despachos judiciales.* * *Labores ordinarias*   ***En este sentido se echa de menos la existencia de un plan de trabajo que refleje de manera pormenorizada las actividades, tiempos de ejecución y cronograma de visitas. Además no fue posible contar con evidencia detallada de los resultados de todas las tareas que se ejecutaron.***  ***3.2.2.3. Labores para realizar en el 2021***  *Mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2020 el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional aportó el cronograma de actividades a realizar por el equipo de gestores de Materia Civil en el 2021****(ver anexo 6.2.)****.,que igual al del 2020 se centró en la asistencia a reuniones, labores de coordinación y visitas a los 69 despachos que conocen materia civil y cobratoria del país, labores que se repiten desde el 2019, con miras a reafirmar los alcances de la reforma civil implementada. Se hace necesario que este recurso lleve los controles pormenorizados de las minutas con sus acuerdos, recomendaciones, acciones y seguimientos que se dan a los diferentes juzgados a nivel nacional, para poder visualizar su impacto.*  ***3.2.2.4.Criterio sobre la continuidad de la plaza***  *En reunión realizada con la licenciada Maricruz Chacón Cubillo, Directora del Centro de Apoyo, indicó la necesidad de continuar con las plazas de Gestores en materia civil y cobratoria, ya que esas plazas deben atender todos los despachos a nivel nacional que conocen dichas materias, lo que genera los insumos suficientes para visualizar la permanencia del recurso extraordinario en el tiempo.*  ***Si bien la plaza de Jueza o Juez 5 (Gestor de materia civil), realizó una función medular en la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, y actualmente en las labores de seguimiento de los despachos que conocen materia civil y cobratoria, esta Dirección estima que la plaza ya cumplió con su objetivo y que al finalizar el presente año, poco más de dos años después de la Reforma Civil, ya las oficinas se encuentran adaptadas a los cambios que se originaron de la reforma. No obstante, se debe redireccionar los esfuerzos que atenderá ese recurso y realizar modificaciones en la forma de abordar las necesidades que presentan los despachos con la atención de la materia, así como presentar mejoras en la forma de abordar los casos y que contribuyan a estabilizar aún más la cantidad de asuntos que ingresan y circulan en esos despachos.***  ***Plazas de Jueza o Juez 2 y Técnica o Técnico Judicial 1***  *Las plazas se han concedido para la atención de planes de descongestionamiento en diferentes despachos que conocen de materia cobratoria del país, la cual se ha evidenciado en diferentes informes que es la que genera la mayor carga de trabajo a la institución, representando un 56% del circulante total.*  ***3.2.2.4. Labores realizadas en el 2019***  *Las plazas se encuentran adscritas al Centro de Apoyo y de acuerdo con esa dependencia, durante el 2019 las plazas se dedicaron a ejecutar varios planes de trabajo, que se basaron en la producción esperada para cada plaza de persona juzgadora y técnica judicial en condición extraordinaria.*  *El plan de trabajo se conformó con dos equipos de trabajo de un juez con apoyo de dos técnicas o técnicos judiciales, estableciendo una cuota de trabajo de 27 asuntos diarios en el caso de los técnicas y técnicos judiciales y 54 procesos firmados por persona juzgadora, para un promedio de 1134 asuntos por mes por grupo de trabajo, lo que se esperaba generaría en el año un total de 25.515 asuntos tramitados por ambos equipos de trabajo. En el siguiente gráfico se observan los resultados obtenidos en el 2019:*  ***Gráfico 1***  ***Rendimiento personal Técnico Judicial extraordinario***  ***del Plan de Descongestionamiento Cobro 2019***    *Fuente: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional*  ***Gráfico 2***  ***Rendimiento personal Juzgador extraordinario***  ***del Plan de Descongestionamiento Cobro 2019***    *Fuente: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional*  Como se visualiza de los gráficos anteriores, el recurso extraordinario cumplió los planes de acuerdo con la producción esperada (ajustada[[1]](#footnote-1)), obteniendo rendimientos por arriba del 100%, lo que generó réditos en los 13 despachos que se incluyeron en el plan de descongestionamiento, más que todo en lo que a plazos de respuesta se refiere. El siguiente cuadro muestra los despachos donde se impactó más con los planes de trabajo:    *Fuente: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional*  Es importante destacar el caso del Juzgado de Cobro de Primer Circuito Judicial de Alajuela, que antes del abordaje tenía aproximadamente un total de 22 mil demandas nuevas y manejaba un plazo de respuesta de 7 meses para la persona usuaria, situación que al finalizar el plan varió positivamente, ya que quedaron sin demandas nuevas pendientes de tramitar, llevando al despacho a tiempos de respuesta casi inmediatos en lo que respecta al ingreso de nuevas demandas.  **3.2.2.5. Labores por realizar en el 2020**  Para el 2020, se mantiene el mismo plan de trabajo del 2019, estableciendo una producción anual de 25.515 asuntos atendidos por los recursos extraordinarios concedidos, brindando colaboración a los siguientes despachos cobratorios:   * Juzgado de Cobro de Puntarenas * Juzgado del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Golfito * Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de San José. * Juzgado Primero de Primer Circuito Judicial de San José. * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Pococí. * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste. * Juzgado del Primer Circuito Judicial de Guanacaste. * Juzgado del Primer Circuito Judicial de Alajuela.   De mantenerse ese recurso apoyando los despachos señalados, se esperaría una cantidad semejante de producción para el 2020.  ***3.2.2.6. Criterio sobre la continuidad de las plazas***  *De acuerdo con el criterio brindado por la Licda. Chacón Murillo, Directora del Centro de Apoyo, la materia cobratoria, sigue incrementando su carga de trabajo, por lo que todo esfuerzo para lograr contener el alto circulante es necesario, y se estima necesario que las plazas se mantengan más allá del 2020, inclusive de forma ordinaria.*  ***Esta Dirección de Planificación considera que, si bien los recursos adicionales se habían concedido de manera extraordinaria para el 2020 con el fin de determinar el efecto que generaban los cambios en competencias territoriales y mejoras informáticas realizadas en esta materia, para la automatización de algunos de los procesos que se ejecutan en estas oficinas, el tiempo ha evidenciado que el circulante de materia cobratoria sigue en aumento, como se visualiza en el siguiente gráfico:***  **Gráfico 1**  **Circulante final de la materia de Cobro**  **Del 2016 al 2019**    *Fuente: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional*  ***Por lo anterior, esta Dirección determina que los recursos son necesarios para continuar coadyuvando con la atención de los planes de descongestionamiento de los despachos de materia cobratoria, pero de forma extraordinaria, ya que se pueden realizar modificaciones en la forma de abordar la materia cobratoria, así como se den mejoras informáticas que generen impacto y varíen las necesidades en las categorías de las plazas bajo análisis.***  ***3.2.3 Plazas de Profesional en Derecho 3B adscritas a la Sala Primera***  *Las plazas originalmente fueron otorgadas con la finalidad de atender el incremento que se podría generar como resultado de los planes de descongestionamiento del fallo Civil y los cambios en competencia como resultado de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil en octubre de 2018.*  *Para el 2019, las dos plazas otorgadas correspondían a puestos de Técnica o Técnico Judicial 3, no obstante, producto de propuestas en atención al Rediseño de la Sala Primera, realizado por la Dirección de Planificación se acordó con las Magistradas y Magistrados que conforman la Sala solicitar el cambio para conceder para 2020 esos dos recursos como Profesional en Derecho 3B con el fin de atender el circulante de vieja data de la Sala Primera según el plan de trabajo propuesto mediante el informe de la Dirección de Planificación 1010-PLA-MI-2019, aprobado por el Consejo Superior en sesión 68-19 del 1 de agosto de 2019, artículo XLIII.*  *Adicionalmente, mediante informe 23-PLA-MI-2020 elaborado por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior en sesión 06-2020 del 23 de enero de 2020, artículo LIV se aprobó la recomendación de la nueva estructura para la atención de la carga ordinaria de la Sala Primera y que toma en cuenta los 2 recursos de Profesional 3B bajo análisis así como 2 permisos con goce de salario y sustitución de plazas de Profesional 3B necesarias para completar la estructura óptima para que la Sala pueda atender la entrada (admisión).*  *Dentro del informe indicado se propusieron 4 escenarios, de los cuales, de manera consensuada entre la Sala Primera y la Dirección de Planificación[[2]](#footnote-2), se aprobó el número cuatro, que permite contar en el Área de Admisión con 6 profesionales, 4 con una cuota regular mensual de 28 proyectos cada uno y dos letrados “facilitadores” con cuotas diferenciadas (entre 21 y 22 proyectos para cada uno), por las labores distintas que deben ejecutar. De igual manera, el total de ese personal se dividirá en dos equipos conformados por 3 Profesionales en Derecho 3B (2 letrados y un letrado “facilitador”) para la atención de la materia Contenciosa Administrativa y los restantes para labores de admisión de materia civil y otras.*  *Asimismo, en el Área de Fondo se destacarán 4 letrados por oficina de Magistratura (5 en total), de los cuales 3 se dedicarán a la atención de la carga ordinaria con una cuota mínima de 4 proyectos mensuales y uno en la atención de circulante de vieja data en forma permanente, con una cuota mensual mínima de 3 proyectos, lo que daría como resultado, al considerar las 5 oficinas de magistratura la atención anual de 675 casos de la carga ordinaria y 169 casos considerados de vieja.*  *Con esa conformación se espera obtener los siguientes beneficios:*   * *Atención de la admisión en todas las materias en forma completa.* * *Homologación de criterios de los profesionales destacados en la admisión bajo una guía clara.* * *Figura de Facilitador que coadyuve y asegure el cumplimiento de criterios de estandarización.* * *Mayor especialización en el trámite de los recursos en los proyectos de sentencia, pues los letrados de las oficinas de Magistratura se dedicarán exclusivamente a la redacción de proyectos de fondo.* * *Disminución del circulante de proyectos de fondo de vieja data en las oficinas de Magistratura.* * *Mejor servicio al usuario externo, con la reducción de plazos de resolución en los recursos de casación.*   Es importante recalcar el impacto que tiene la Ley 9342 en la entrada en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en donde a partir del 8 de octubre 2018 con la reforma introducida a los artículos 95, 95 Bis y 105 a la Ley Orgánica del Poder Judicial la Sala de Casación se vio impactada directamente en virtud de lo siguiente:   * Sala Primera conoce como *“segunda instancia”* las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil a nivel nacional que solo tienen recurso de casación ante la Sala. Lo que justifica el incremento en la entrada en recursos de casación de esa materia, que paso de 245 asuntos[[3]](#footnote-3) en 2018 a 669 casos en 2019, es decir un incremento del 173%. * Hasta el 8 de octubre de 2018, la Sala Primera conocía de manera exclusiva los asuntos de Auxilio Internacional independientemente de la materia. Sin embargo, con la entrada en vigencia Ley 9342 y de la reforma introducida al artículo 54 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Primera solo es competente para conocer los asuntos nuevos de Auxilio Internacional en materias Civil y Comercial por lo que no se reporta entrada en otras materias pero aún mantienen circulante en materia de familia principalmente que se encuentran suspendidos por un recurso planteado donde se consulta cuál Sala (Primera o Segunda) es competente para conocer esos asuntos. * Incompetencia de oficio: a partir de la entrada en vigencia de la Ley y de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 (Competencia por territorio) en materia Civil y Cobratoria aplica la declaración de incompetencia de oficio, es decir, el Juzgado sin necesidad de que la parte gestione la excepción de incompetencia, puede trasladar el conocimiento del asunto al juzgado que corresponda.   En virtud de la interpretación de esa norma realizada por el Juzgado de Cobro de Alajuela, este Juzgado remitió 6 757 expedientes por incompetencia a otros Juzgados del país (asuntos con fecha de ingreso anterior a la entrada en vigencia de la Ley 9342), lo cual resulto en conflictos de competencia planteados ante la Sala Primera, que elevo la entrada en 2019 de este tipo de asuntos en la Sala (un total de 5315 conflictos de competencia en Cobro Judicial en 2019) y que corresponde a un caso particular. Esos asuntos están siendo resueltos de forma masiva como parte de un plan de trabajo.  Tal y como se observa en el siguiente gráfico de 2016 a 2019 se presentó un incremento en la entrada de la Sala de 5921 casos (413%), asimismo se logró incrementar la cantidad de asuntos terminados en 3200 casos del 2016 con respecto al 2019 (242%).  *Gráfico 1*  ***Balance General Sala Primera 2016-2019***    *Fuente: Subproceso de Evaluación a partir de estadísticas judiciales 2016-2019.*  En virtud de la estructura actual en Primera Instancia Civil, es de esperar que en adelante la entrada de recursos de casación en materia Civil en Sala Primera se mantenga, principalmente por los recursos contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Primera Instancia que representan el 38% (524 recursos) de la entrada de este tipo de recurso a la Sala (entrada total 2019 fue de 669 casaciones entre todas las materias).  *Gráfico 2*  *Procedencia de los recursos de casación recibidos por la Sala Primera, 2019*    *Fuente: Subproceso de Evaluación a partir de estadísticas judiciales 2019.*  ***3.2.3.1. Labores por realizar en el 2020***  *Tal y como se propuso en el informe 23-PLA-MI-2020, esas plazas se incorporan a las letradas y letrados en la Sala Primera, con el fin de dar soporte en la nueva estructura aprobada para la atención de la carga ordinaria y circulante de vieja data existente.*  *Las plazas analizadas junto con el resto de las profesionales en derecho 3B se destacarán en el Área de Admisión o bien en las oficinas de Magistratura, bajo la estructura descrita en el apartado 3.2.3. del presente informe, por lo tanto, es necesario mantener la recomendación de la continuidad de las plazas analizadas pues las mismas, de acuerdo con la entrada mensual de asuntos (la cual se calcula en aproximadamente 152 asuntos mensuales)[[4]](#footnote-4) y el circulante de vieja data existente son requeridas.*  ***3.2.3.2. Criterio sobre la continuidad de las plazas***  En entrevista realizada[[5]](#footnote-5) al Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera, así como al licenciado Mario Esteban Sequeira Paco, Secretario interino de esa Sala fueron claros en indicar la necesidad de contar con esas plazas, máxime que el circulante de la Sala Primera ha incrementado considerablemente como resultado de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil.  En línea con lo anterior, las plazas son parte de la estructura en la atención de la carga ordinaria y circulante de vieja data, ya aprobada, la cual soporta el área de Admisión y permiten que se tramite circulante de vieja data.  Asimismo, los criterios anteriores fueron ratificados por la Jefa a.í del Subproceso de Modernización Institucional, Inga. Elena Gabriela Picado González, que fue enfática en indicar que para la ejecución del plan de trabajo son requeridas esas plazas, inclusive valorar su permanencia, ya que como se evidenció en el informe 1010-PLA-MI-2019 y el 23-PLA-MI-2020 de la Dirección de Planificación, del diagnóstico del Rediseño de Procesos que se llevó a cabo en la Sala Primera y en el Tribunal de Casación, se determinó que no se cuenta con la capacidad instalada para afrontar la carga ordinaria actual y atender el circulante en trámite de forma simultánea en ninguna de las dos dependencias.  Se adjunta un extracto del informe 1010-PLA-MI-2019 que hace referencia a la capacidad instalada de la Sala Primera y el Tribunal de Casación:  *En la misma línea, en el caso de las Letradas o Letrados de Fondo deberían atender por mes 6,5 asuntos (3,1 casos nuevos + 3,4 casos de circulante) y para las Letradas o Letrados de Admisión debería ser de 73,6 expedientes mensuales (35 casos nuevos + 38,6 casos de circulante) esto con el fin de cubrir el circulante más los casos nuevos que ingresen, datos que sobrepasan la capacidad instalada de la Sala Primera y el Tribunal de Casación.*  ***Es por lo anterior, que se evidencia la necesidad de la continuación de las plazas, para afrontar el aumento de la carga de trabajo que ha experimentado la Sala Primera como resultado de la Reforma de Ley en materia civil y darle continuidad a la*** *estructura planteada en el área de Admisión y oficinas de Magistratura.*  ***La nueva estructura permite atender la entrada ordinaria de asuntos con un área de Admisión fortalecida y, por otro lado, las letradas y letrados destacados en las oficinas de Magistratura atienden en forma simultánea la carga ordinaria y circulante de vieja data, pues como se anotó en líneas anteriores, tres de los cuatro profesionales tramitan los asuntos ordinarios de la entrada y uno se dedica a la atención de circulante de vieja data, que según consulta realizada al 13 de Diciembre del 2019, se mantenía 32 proyectos pendientes de sentencia del año 2016 y 144 del periodo 2017, además, la continuación de las plazas de profesional aumentan la capacidad instalada en la Sala Primera, la cual es necesaria de acuerdo al análisis mostrado en el informe 1010-PLA-MI-2019.***  ***3.6 Criterio de la Dirección de Planificación***  *Los datos suministrados por las oficinas a las que se les otorgó el recurso extraordinario el año pasado y que fueron analizados en el presente informe, han permitido realizar una valoración de las labores llevadas a cabo por las plazas en el 2019, exceptuando las otorgadas a la Sala Primera, debido a que iniciaron su labor en enero del presente año.*  *Asimismo, se tomó en cuenta factores como la temporalidad con que se concedió el recurso y el objetivo de su otorgamiento, que estaba asociado a la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil, por lo que los análisis permitieron determinar que algunas plazas cumplirán con su labor al cierre del presente año y no se visualiza su permanencia en el tiempo, así como otras que se considera necesaria su permanencia más allá del 2020, por el tipo de labor que desempeñan o porque se redireccionó su objetivo para la atención de otros requerimientos institucionales.*  ***3.7. Creación de plazas***  *Se debe tener presente que en todo análisis de recurso humano o creación de una nueva oficina esta Dirección toma en consideración las disposiciones establecidas por Corte Plena en sesiones N°27-2017 de 21 de agosto de 2017, artículo XVI, N°28-2017 de 28 de agosto de 2017, artículo XV y N°29-2017 de 4 setiembre de 2017, artículo XVI, donde aprobó una serie de medidas de contención del gasto en el Poder Judicial, producto de la grave situación fiscal que enfrenta el país, entre las cuales aprobó que no se crearán plazas nuevas, salvo las correspondientes a la implementación de nuevas leyes, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa, o bien cuenten con un estudio técnico de la Dirección de Planificación, sujeto a la disponibilidad de contenido presupuestario, por consiguiente los informes estarán orientados a no generar un aumento adicional en el presupuesto institucional por concepto de recurso humano y en buscar y reforzar la utilización de metodologías o prácticas que permitan la maximización de los recursos.* |
| **IV. Elementos Resolutivos**   1. *Las plazas bajo análisis se concedieron con el objetivo de apoyar la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil (Ley 9342) en octubre de 2018, lo que generó un impacto en el procedimiento, la competencia y la estructura organizacional de los despachos judiciales que se encargan de la tramitación de la materia civil.*   *Plaza otorgada a la Dirección de Tecnología de Información (Profesional en Informática 2)*   1. *El recurso concedido se ha venido otorgando desde el 2016 con la finalidad de apoyar el desarrollo de las mejoras informáticas requeridas en los sistemas que utilizan los despachos judiciales que conocen materia civil, como el Sistema de Gestión, Escritorio Virtual, el SREM y el CERODOC, entre otros.* 2. *Para el 2019, el recurso extraordinario desarrollo 15 mejoras, dos menos de las que se tenían planeadas desarrollar, para un resultado del 88% de rendimiento respecto al objetivo establecido para el 2019.* 3. *El recurso también se dedicó a la atención de usuarios, apoyo y seguimiento al uso de dichas mejoras en todas las oficinas civiles y atención de 106 reportes recibidos de las personas usuarias.* 4. *Para el 2020, el recurso adicional junto con tres recursos ordinarios adicionales se dedicará al desarrollo de más de 100 mejoras realizadas en los sistemas actuales para migrarlas al nuevo Sistema de Gestión que está en proceso de desarrollo, el cual culminará a finales de julio de 2022.* 5. *La Msc. Vivian Rímola Soto, Jefa a.í del Subproceso Sistemas Jurisdiccionales de la Dirección de Tecnología de Información considera necesaria la permanencia del recurso extraordinario y en condición ordinaria, para atender las migraciones al nuevo Sistema de Gestión y dar manteniendo y sostenibilidad a los sistemas actuales.* 6. *Se logró evidenciar el buen uso del recurso extraordinario a lo largo de los años que ha sido concedido, no obstante, la plaza desde su origen se ha considerado que tenía una temporalidad claramente definida por el desarrollo e implementación de las mejoras requeridas para los sistemas que actualmente utilizan los despachos civiles; sin embargo, las nuevas labores de migrar las mejoras que se desarrollaron para los sistemas con que actualmente trabajan las oficinas al Nuevo Sistema de Gestión hacen ver la necesidad de contar con el recurso concedido para el 2021.*   *Plaza de Jueza o Juez 5 otorgada al Centro de Apoyo*   1. *La plaza se otorgó con la finalidad de apoyar la Reforma Civil, en específico para el seguimiento y emisión de recomendaciones a los despachos conforme a su experiencia y como contraparte jurisdiccional en los procesos administrativos y de revisión de las recomendaciones emitidas por las plazas de seguimiento (Profesional 2) del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) de los diagnósticos que realicen en los despachos que conocen materia civil.* 2. *Para el 2019, la labor del recurso extraordinario se centró en las siguientes actividades, según la información con que cuenta esta Dirección:*  * *Asistencia a reuniones: tanto con despachos, como con personal del CACMFJ, Comisión de la Jurisdicción Civil y otras dependencias involucradas con el funcionamiento de los despachos civiles.* * *Atención de consultas: de los despachos judiciales y otros entes involucrados en la Reforma Civil* * *Labores de coordinación: coordinaciones con entes jurisdiccionales y administrativos para apoyar el proceso de la Reforma Civil.* * *Visitas: realización de visitas a los despachos que conocen de materia civil y cobratorio* * *Revisión de planes de descongestionamiento: en conjunto con las plazas del Centro de Apoyo.*  1. *Para el 2020 se indicó por parte del Centro de Apoyo que procederán con la atención de las mismas labores que desempeñaron en el 2019, además de otras labores, sin embargo, no se visualizan cronogramas de tares de trabajo con fechas establecidas y productos finales en detalle. A continuación, se muestran las labores genéricas que fueron remitidas:*  * *Elaboración del informe solicitado por la Dirección de Planificación para el abordaje de los pendientes relacionados con esa Dirección según las visitas* * *Impulsar la equiparación de la entrada de demandas nuevas en los Juzgados Cobratorios del Primer Circuito y Segundo Circuito Judicial de San José.* * *Visitas a los 69 despachos Civiles del país* * *Reuniones mensuales con los grupos creados para la implementación de la Reforma Procesal Civil (Dirección Tecnología de la Información, Gestión Humana, Infraestructura, Comunicación, Digesto, Cobro Judicial e Implementación Jurídica).* * *Coordinación de un consolidado SIGMA para el desarrollo de un modelo de consulta y comparativo de despachos judiciales.*  1. *Se aportó el cronograma de actividades del 2021, el cual incluye labores símiles a las realizadas en el 2019 y en el 2020, situación que hace ver que la atención de esas labores las puede asumir la plaza ordinaria de Jueza o Juez 5 concedida ordinaria en el presente año en conjunto con las plazas de profesional 2 asignadas de manera exclusiva a la atención de los despachos judiciales que conocen materia civil.* 2. *La licenciada Maricruz Chacón Cubillo, Directora del Centro de Apoyo, indicó la necesidad de continuar con las plazas de Gestores en materia civil y cobratoria, ya que esas plazas deben atender todos los despachos a nivel nacional que conocen dichas materias, lo que genera los insumos suficientes para visualizar la permanencia del recurso extraordinario en el tiempo.* 3. *Con el aporte de los datos recibidos la Dirección de Planificación estima que la plaza ya cumplió con su objetivo y que, al finalizar el presente año, poco más de dos años después de la Reforma Civil, ya las oficinas se encuentran acopladas a los cambios que se originaron de la reforma, sin embargo, entendiendo que la mejora continua y seguimiento de los despachos judiciales es una labor diaria, esta labor podría ser asumida con la plaza ordinaria que ya tiene el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional.*   *Plazas de Jueza o Juez 2 y Técnica o Técnico Judicial 1 otorgadas al Centro de Apoyo*   1. *Las plazas fueron concedidas para atender los planes de descongestionamiento de los Juzgados Cobratorios del país.* 2. *Durante el 2019, el recurso extraordinario brindó colaboración en 13 despachos de diferentes circuitos en el país, obteniendo rendimientos por arriba del 100% tanto de las personas juzgadores como el personal técnico judicial.* 3. *Para el 2020 se espera brindarles colaboración a los siguientes despachos:*  * Juzgado de Cobro de Puntarenas * Juzgado del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Golfito * Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de San José. * Juzgado Primero de Primer Circuito Judicial de San José. * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Pococí. * Juzgado del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste. * Juzgado del Primer Circuito Judicial de Guanacaste. * Juzgado del Primer Circuito Judicial de Alajuela.  1. *Para licenciada Maricruz Chacón Cubillo, Directora del Centro de Apoyo, la materia cobratoria, sigue incrementando su carga de trabajo, por lo que todo esfuerzo para lograr contener el alto circulante es necesario, por lo que estima necesario que las plazas se mantengan más allá del 2020, inclusive de forma ordinaria.* 2. *La Dirección de Planificación considera que el aumento en la entrada y circulante de los juzgados que conocen la materia cobratoria hace ver la necesidad de conceder los recursos, adscritos al Centro de Apoyo, para darle continuidad a la atención de los planes de descongestionamiento de esa materia.*   *Plazas de Profesional en Derecho 3B otorgadas a la Sala Primera*   1. *Las plazas fueron otorgadas con la finalidad de atender el incremento que se podría generar como resultado de los planes de descongestionamiento del fallo Civil y los cambios en competencia como resultado de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil en octubre de 2018.* 2. *No se cuentan con datos de las labores realizadas en el 2019 por estas plazas, ya que fueron otorgadas a partir de enero 2020.* 3. *Para el 2020, las plazas serán parte de la estructura organizacional propuesta por la Dirección de Planificación mediante informe 23-PLA-MI-2020 aprobada por el Consejo Superior en sesión 6-2020 del 23 de enero de 2020, artículo LIV , las cuales aumentaran la capacidad instalada en la Sala Primera la cual es necesaria para la atención de asuntos ordinarios y el circulante de vieja data existente en las oficinas de Magistratura en forma simultánea, donde se denota la necesidad de garantizar a estructura optima según modelo propuesto de manera que se pueda atender la admisión y la redacción de proyectos en asuntos en circulante. Estructura que aún requiere para funcionar de mínimo 2 plazas adicionales de Profesional en Derecho 3B y que por 2020, conforme a la existencia de contenido presupuestario están siendo incluidas con la figura de permiso con goce de Salario y sustitución con un plan de trabajo establecido para 2020, pero que de mantenerse la entrada, tal y como se espera, será necesario el recurso en 2021 de forma ordinaria.* 4. *Para el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera, así como al licenciado Mario Esteban Sequeira Paco, Secretario interina de esa Sala las plazas son necesarias para la atención de expedientes considerados de vieja data, máxime que el circulante de la Sala Primera como resultado de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil ha incrementado el ingreso de casos que son de conocimiento de esa Sala, así como mantener la estructura organizacional planteada por la Dirección de Planificación y consensuada por la Sala Primera, para atender la carga ordinaria de trabajo.* 5. *Se evidencia la necesidad de la continuación de las plazas y afrontar el aumento de la carga de trabajo que ha experimentado la Sala Primera como resultado de la Reforma de Ley en materia civil, esto con el fin de completar la estructura ordinaria y el proceso de admisibilidad, donde solo en recursos de casación la Sala experimento con solo un año de entrada en vigencia de la Ley 9342 un incremento de 173%, pasando de recibir 145 recursos de casación en 2019 a 669 en 2019. Tendencia que se mantendrá en virtud del conocimiento de la alza de los recursos contra sentencia de Primera Instancia dictadas por Tribunales Colegiados Civiles.*   ***Criterio de la Dirección de Planificación***   1. *Los datos suministrados por las oficinas a las que se les otorgó el recurso extraordinario el año pasado y que fueron analizados en el presente informe, han permitido realizar una valoración de las labores llevadas a cabo por las plazas en el 2019. Es a partir de la información recibida que se toman los elementos técnicos para las valoraciones respectivas.* 2. *Para el análisis se tomaron en consideración elementos como la temporalidad por la que se otorgó el recurso y el objetivo establecido.* 3. *Los estudios que realiza la Dirección de Planificación toman en consideración los lineamientos establecidos por Corte Plena respecto a la no creación de plazas nuevas, en vista de la grave situación fiscal que afronta actualmente el país.* |
| **V. Recomendaciones**  ***5.1 Cantidad de Recurso Humano recomendado para el 2021***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Despacho** | **Canti-**  **dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** | | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 2 | Jueza o Juez 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢108.938.000,00 | | 4 | Técnica o Técnico Judicial | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢57.556.000,00 | | Sala Primera | 2 | Profesional en Derecho 3B | Extraordinaria | Ordinaria | 2021 | ¢112.838.000,00 | | Dirección de Tecnología de Información | 1 | Profesional en Informática 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢ 36.909.000,00 |   **FUENTE:** Elaboración propia con datos suministrados por el Subproceso de Formulación del Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, para el 2021.  ***5.2****Las plazas recomendadas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional se conceden con la finalidad de seguir atendiendo los planes de descongestionamiento en los despachos que conocen materia cobratoria y de forma extraordinaria, ya que se están invirtiendo recursos humanos y tecnológicos en desarrollar herramientas de inteligencia artificial que puedan impactar la forma de trabajo y nuevas necesidades en las categorías de las plazas expuestas.*  ***5.3.*** *Las plazas de Profesional en Derecho 3B para la Sala Primera se recomienda otorgarlas en condición ordinaria, con el fin de completar la estructura ordinaria recomendada mediante informe 23-PLA-MI-2020 elaborado por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior en sesión 06-2020 del 23 de enero de 2020, artículo LIV, para afrontar el aumento en la carga de trabajo como resultado de la Reforma de Ley en materia civil, así como atender el proceso de las áreas de admisión y fondo de esa Sala.*  ***5.4.*** *Se recomienda la continuidad de la plaza de Profesional en Informática para el 2021, ya que se requiere implementar las mejoras realizadas en el nuevo Sistema de Gestión, ya que será la nueva herramienta para el registro de la información en esta materia, además, de las labores que deberá desempeñar dando mantenimiento y sostenibilidad al nuevo sistema informático****.***  *Plaza de Jueza o Juez 5 otorgada al Centro de Apoyo*  *5.5. Con fundamento en los elementos recopilados y analizados por esta Dirección en el presente estudio, se procede a brindar dos escenarios para la utilización de este recurso:*  *Escenario 1*  *Considerando los siguientes aspectos:*   1. *El Centro de Apoyo tiene dos plazas de gestor en materia civil (una en condición ordinaria y la otra extraordinaria), las cuales desempeñan labores símiles y cuentan con el apoyo de dos recursos de Profesional 2 dedicados de manera exclusiva al seguimiento de los despachos que conocen la materia civil y cobratoria.* 2. *Por el tiempo transcurrido desde la implementación de la Reforma Procesal Civil (más de año y medio), se podría concluir que las oficinas se encuentren acopladas a los cambios que originó la reforma, lo que eventualmente propicia una disminución natural en las consultas de los despachos judiciales*   *Se podría estimar que las labores de gestoría en materia civil se podrían ejecutar solo por la plaza de Jueza o Juez 5 otorgada de manera ordinaria en el presenta año*  *Por lo anterior, se recomienda que la plaza Jueza o Juez 5 (Gestora o Gestor de materia civil) otorgada al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, de forma extraordinaria, se recalifique a Profesional en Derecho 3B, para que forme parte de la estructura ordinaria de la Sala Primera a partir del 2021, la cual deberá atender la admisibilidad de los casos que entran a esa Sala, de conformidad con el plan de trabajo propuesto por la Dirección de Planificación mediante informe 23-PLA-MI-2020,aprobado por el Consejo Superior en sesión 06-2020 del 23 de enero de 2020, artículo LIV.*  *En caso de aprobarse el presente escenario, se debe tomar en cuenta el costo de la plaza de Profesional en Derecho 3B*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Despacho** | **Canti-**  **Dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** | | Sala Primera | 1 | Profesional en Derecho 3B | Extraordinaria (actualmente plaza de Juez 5 concedida al Centro de Apoyo) | Ordinario | 2021 | ¢ 56.419.000,00 |   *Cabe indicar que debido a que la plaza extraordinaria de Jueza o Juez 5 concedida al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional viene operando desde períodos anteriores, deberá esa oficina trasladar el equipo y mobiliario otorgados a esa plaza a la Sala Primera, para que el Profesional en Derecho 3B que se recomienda en el presente estudio pueda realizar las labores correspondientes.*  *Escenario 2*  *Prorrogar la continuidad de la plaza de Jueza o Juez 5 (Gestora o Gestor de materia civil), adscrita actualmente al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, en condición extraordinaria para el 2021, para que continúe con la ejecución de las labores que ha venido desempeñando, posterior a la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, que coadyuvan en la mejora de la gestión de los despachos de materia civil y cobratoria (actualmente 69 oficinas judiciales),*  *Para lo anterior, deberá el Centro de Apoyo formular un plan de trabajo detallado, que permita maximizar la utilización del recurso y contar con los insumos suficientes que evidencien la labor realizada de manera cualitativa y cuantitativa, con el objeto de determinar la continuidad de la plaza, posterior al 2021, sea en condición extraordinaria u ordinaria.*  *En caso de aprobarse el presente escenario, se debe tomar en consideración el costo asociado a la plaza de Jueza o Juez 5:*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Despacho** | **Canti-**  **Dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** | | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 1 | Jueza o Juez 5 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢ 68.153.000,00 |   *Para este caso no sería requerido equipo y mobiliario para la plaza, el cual fue otorgado en períodos presupuestarios anteriores.*  **5.6 Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)**  Estas plazas vienen funcionando desde periodos anteriores, por lo que cuentan con los requerimientos necesarios para su funcionamiento. |
| **VI Anexos**  **6.1**    **6.2. Cronograma de trabajo gestores de materia civil 2020 y 2021** |

Interviene la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación indicando: “Este es un estudio de plazas, que viene trabajándose con lo que corresponde a los planes de trabajo en materia cobratoria, de hecho, ustedes ven jueces 2 y técnicos judiciales, este año esto fue lo que quedó, había posibilidades el año tras anterior, sin embargo por limitaciones esto fue lo único que se pudo incorporar, para atender lo que es la materia cobratoria. Igualmente, en este informe también se están analizando 2 plazas de profesionales en derecho 3B, que son 2 letrados, esas plazas se habían el año pasado transformado venían de personal técnico a letrados, este año entonces se mantiene la condición, el profesional en informática también venía trabajando en todas las mejoras que requería la materia de forma civil, igualmente una persona juzgadora, de juez 5 que es la que viene hoy trabajando como gestor en materia civil. Bueno, nosotros realizamos el análisis y las plazas de la materia cobratoria se están manteniendo, dado que efectivamente es una de las materias en donde mayor demanda de trabajo tienen, en donde también ahí decimos la mejora que se esperan tener informáticas en relación a la forma de trabajar de ellos, si se esperaría de alguna manera mejore también esa posibilidad informática de realizar en ellos, las diferentes mejoras en sus formas de trabajar, pero entonces por la necesidad que tienen las seguimos recomendando, se visibiliza el trabajo que venían realizando de forma secuencial y atinada en cada uno de los planes que se han desarrollado, he igualmente también lo decimos en las plazas de letrados, de hecho había una recomendación que indicaba, la estructura de la Sala requiere más personal, dado que con la entrada en vigencia de la nueva ley, pues ellos han tenido que asumir mayor carga de trabajo, en la entrada de asuntos en la Sala, entonces mantener estas 2 plazas en derecho 3B, he igualmente también hacemos el análisis en relación a la plaza de gestor de juez 5, la plaza de gestor de juez 5, hacemos 2 escenarios. Un escenario es que se mantenga como plaza de juez 5, como gestor o gestora, manteniendo las labores que se ha venido desarrollando, sin embargo, con la condición de que elabore un cronograma todavía más detallado de las labores que realiza en función de que se pueda visibilizar el impacto que ha venido desarrollando hasta la fecha y el escenario número 2, es también en relación a esa misma plaza, es que se transforme en un letrado para que se asigne a la Sala I en relación al informe que ya previamente se había indicado. Se visibilizaba la necesidad de la Sala I de reforzar con recursos de personas letradas, siendo así, entonces en cuanto a la valoración del recurso de alquiler, equipos o espacios, pues no se proponen porque las plazas vienen laborando. La plaza de informático también se recomienda porque la persona informática ya no solo está haciendo trabajos en el sentido de colaborar con las mejoras, sino no más bien, en colaborar en mejoras en el nuevo sistema que se espera implementar en el corto plazo en materia de civil. Entonces ahí también se visibiliza mantener la necesidad”.

Interviene el presidente magistrado Cruz Castro: “entonces se acuerda de esa manera.”

Continua la licenciada Valverde Bermúdez: “Perdón magistrado Cruz, aquí la decisión es en relación al escenario que se escoja en el tema del gestor, hay 2 escenarios entonces se tiene que analizar y acordar este Consejo antes de ver el por tanto”.

Interviene la máster Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Las opciones son que, si se mantienen los 2 gestores, o si se mantiene un gestor y se dota a la sala de un profesional en derecho 3B más, o sea un letrado más conforme el estudio se requiere”.

Añade la licenciada Valverde Bermúdez: “Si, hay una plaza ordinaria esa la tiene el Centro, tiene un gestor, hoy ya la tiene funcionando, aquí lo que estamos valorando es que si se mantiene la segunda plaza o se redirecciona como letrado”

Indica el integrante Montero Zúñiga: “Tengo entendido verdad que todos tienen un gestor las diferentes materias, podríamos reforzar la Sala y dejar un gestor civil como en todas las demás materias y reforzar la sala con un letrado adicional, son cosas parecidas el gestor es juez 3, el gestor es 4 verdad”.

Señala la integrante Castillo Vargas lo siguiente: “Si bueno a mí me ha correspondido este año, trabajar, con alguna cercanía con esas gestorías y me parece que han jugado un papel muy importante me preocuparía en este momento dejar incompleto ese equipo por lo menos para el 2021, sin tener nosotros una justificación técnica para hacerlo, porque como bien nos dice la licenciada Valverde, no se descarta que todavía haya bastante trabajo que hacer; que es lo que nos falta es un informe detallado, de cómo pueden y deben hacerlo, yo opinaría que podríamos mantenerlo para el 2021, en el entendido de que si tengamos ese resorte, digamos de control y de trabajo muy estricto para esa gestoría que me parece que es clave en la consolidación de la reforma procesal civil.”

Interviene el integrante Amador Badilla: “Si yo estoy de acuerdo en mantener los 2 gestores en este momento para el 2021”.

Interviene magistrado Cruz Castro: “A mí también, me parece, pero no sé cuál es ese escenario.”

Interviene nuevamente el integrante Montero Zúñiga: “Si tal vez fuera bueno saber qué le parece a la Sala Primera, porque los 2 dependen de esa Sala, entonces esperemos a ver qué le parece a la Sala Primera que le favorece más”

Interviene la Directora de Planificación aclarando: “aquí no hay un criterio de la Sala en el sentido de que se le haya propuesto uno u otro, aquí lo que nosotros estamos haciendo es visibilizar la necesidad de la Sala, en un informe que realizamos y la necesitad también de la gestoría con esta condición que explico detalladamente doña Sarita, entonces no hay expresamente un criterio de la Sala I, que indique, requerir más este u otro verdad, eso no está planteado de esa manera.”

Señala nuevamente la integrante Castillo Vargas: “…el que cambiemos el gestor no desmerita esos dos que ya están recomendados”.

Es correcto indica la Directora de Planificación, asimismo añade: “Perdón el escenario de prórroga un juez 5, es el escenario número 2.”

**Se acordó: 1.)** Aprobar técnicamente el informe 690-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación, relacionado con la continuidad de las plazas otorgadas como resultado de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil conforme la recomendación, sea:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Canti-**  **dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** |
| Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 2 | Jueza o Juez 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢108.938.000,00 |
| 4 | Técnica o Técnico Judicial | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢57.556.000,00 |
| Sala Primera | 2 | Profesional en Derecho 3B | Extraordinaria | Ordinaria | 2021 | ¢112.838.000,00 |
| Dirección de Tecnología de Información | 1 | Profesional en Informática 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢ 36.909.000,00 |

**2)** En cuanto a la plaza de gestor, aprobar el escenario N°2, en consecuencia: **a)** Prorrogar la continuidad de la plaza de Jueza o Juez 5 (Gestora o Gestor de materia civil), adscrita actualmente al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, en condición extraordinaria para el 2021, para que continúe con la ejecución de las labores que ha venido desempeñando, posterior a la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, que coadyuvan en la mejora de la gestión de los despachos de materia civil y cobratoria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Canti-**  **Dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** |
| Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | 1 | Jueza o Juez 5 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢ 68.153.000,00 |

**b)** Deberá el Centro de Apoyo formular un plan de trabajo detallado, a fin de maximizar la utilización del recurso y contar con los insumos suficientes que evidencien la labor realizada de manera cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de determinar la continuidad de la plaza, posterior al 2021, sea en condición extraordinaria u ordinaria.

La Sala Primera, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Dirección de Tecnología de la Información tomaran nota para lo de su cargo. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO IX**

**Documento N° 5666-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio 691-PLA-RH-OI-2020, relativo a la **Atención de la Materia Penal Juvenil y Justicia Juvenil Restaurativa**.

|  |
| --- |
| 1. **Plazas por Analizar**   **Programa 927 Servicio Jurisdiccional:**   * 2 Jueza o Juez 3   **Programa 929 Ministerio Público:**   * 1 Fiscala o Fiscal Auxiliar * 2 Técnicas o Técnicos Judiciales 2   **Programa 930 Defensa Pública:**   * 1 Defensora Pública o Defensor Público |
| 1. **Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**   **2.1.**El Transitorio 1 de la Ley 9582 de Justicia Restaurativa, dispuso de la creación de nuevas oficinas a nivel nacional, para que de forma gradual dentro de un plazo de tres años a partir de su vigencia (20 de enero de 2022), se mantenga una cobertura Nacional.  *“TRANSITORIO 1- La Corte Suprema de Justicia creará las nuevas oficinas de justicia restaurativa de forma gradual hasta tener una cobertura nacional, en el plazo de tres años a partir de la vigencia de la ley. Cada dependencia judicial deberá tomar las previsiones para direccionar recursos o presupuestar los requerimientos para la implementación de esta ley.”*  En lo especifico a la materia Penal de adultos, conforme al referido artículo 6 de la Ley de Justicia Restaurativa, se estableció de la apertura de oficinas según las necesidades del servicio, en los diferentes circuitos judiciales a nivel nacional. En materia Penal Juvenil, se dispuso que se conformarían en las diferentes jurisdicciones el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y que, para ese efecto, se dotará de equipos psicosociales, que en conjunto con las personas funcionarias de la Defensa Pública y el Ministerio Público de cada despacho, aplicarán el procedimiento juvenil restaurativo como parte de sus competencias legales y las normas establecidas en esta ley.  2.2. Los recursos que se analizan en el presente estudio se asignaron con el propósito de colaborar con la reducción del circulante de las oficinas que conocen materia Penal Juvenil en los Circuitos Judiciales de Cartago (Juzgado, Fiscalía y Defensa), (Actualmente Juzgado Mixto de Turrialba) Heredia (Juzgado) (Actualmente Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica) y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Fiscalía), así como coadyuvar en las diferentes labores que demanda el Programa de Justicia Restaurativa del cual son parte, como la programación de reuniones restaurativas y el señalamiento de audiencias tempranas y debates. |
| **III. Información Relevante**  ***3.1. Antecedentes***  3.1.1. El 20 de enero de 2019 entró en vigencia la Ley de Justicia Restaurativa 9582, que conforme al artículo 1 establece su objetivo bajo el siguiente enunciado:  *“… definir un marco conceptual y procedimental para instaurar la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico costarricense, como un instrumento que contribuya a resolver los conflictos jurídicos generados por los hechos delictivos, con la participación activa de las partes intervinientes, a fin de restaurar los daños a la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora, con soluciones integrales y promover la paz social.”*  3.1.2. El artículo 2 de la Ley de Justicia Restaurativa 9582, determina su ámbito de aplicación extensivo a la materia Penal, Penal Juvenil y Contravencional, en todas sus etapas, por medio de un equipo interdisciplinario integrado por funcionarias y funcionarios del Ministerio Público, Defensa Pública y el Equipo Psicosocial, este último conformado al menos por una plaza en trabajo social y otra en psicología. Las personas juzgadoras se integrarán en cada Circuito Judicial según su competencia (incisos i) y j) del artículo 3 de la Ley de Justicia Restaurativa.  3.1.3. El Consejo Superior en sesión 25-18 del 4 de abril del 2018, artículo XXVIII, aprobó el informe 14-PLA-OI-2018 de requerimiento humano para el 2019, el cual da continuidad a las seis plazas sometidas a análisis dentro del presente informe, por todo el período 2019, en condición extraordinaria.  3.1.4. El Consejo Superior en sesión del 18 de febrero del 2019, acta 18-19, artículo VI, aprobó el informe 253-PLA-RH-EV-2019 de requerimiento humano, el cual da continuidad a las seis plazas sometidas a análisis dentro del presente informe, por todo el período 2020, en condición extraordinaria.  3.1.5. Informes de presupuesto 726-PLA-RH-MI-2019 y 596-PLA-RH-MI-2019, sobre el Impacto de Ley de Justicia Restaurativa Ley 9582, en que la Dirección de Planificación elaboró los análisis relacionados y se establecieron una serie de disposiciones con la intención de conformar diferentes jurisdicciones el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y que para ese efecto, se dotaría de equipos psicosociales, que en conjunto con las personas funcionarias de la Defensa Pública y el Ministerio Público de cada despacho, aplicarían el procedimiento juvenil restaurativo como parte de sus competencias legales y las normas establecidas en esta ley, así como algunas otras recomendaciones en relación con la distribución de los equipos y lugares donde brindar la cobertura del servicio.  3.1.6. Mediante informe 586-PLA-MI-2020 del 23 de abril de 2020 y 657-PLA-RH-MI-2020 del 5 de mayo de 2020, la Dirección de Planificación vuelve a realizar el estudio sobre el “Informe de presupuesto Impacto de Ley 9582 Justicia Restaurativa”, para el próximo ejercicio presupuestario 2021, el cual se pone en conocimiento de las partes involucradas y se presenta el informe definitivo (657-PLA-RH-MI-2020) para conocimiento de los órganos superiores con diversos escenarios que permiten atender la necesidad de ampliar el servicio que brinda el Programa de Justicia Restaurativa, en acatamiento de lo establecido en la referida Ley.  ***3.2. Situación actual de las 6 plazas extraordinarias:***  Se cuenta con seis plazas extraordinarias asignadas a Justicia Restaurativa en materia Penal Juvenil, y en este momento se encuentran asignadas según el siguiente detalle:  **Programa 927 Servicio Jurisdiccional:**   * 1 Jueza o Juez 3 (Actualmente Juzgado Mixto de Turrialba) * 1 Jueza o Juez 3 (Actualmente Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica)   **Programa 929 Ministerio Público:**   * 1 Fiscala o Fiscal Auxiliar (Fiscalía Penal Juvenil Cartago) * 2 Técnicas o Técnicos Judiciales 2 (una plaza en la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago y otra en la Fiscalía Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica).   **Programa 930 Defensa Pública:**   * 1 Defensora Pública o Defensor Público (Defensa Pública de Cartago Penal Juvenil).   En materia Penal Juvenil, a nivel nacional el Ministerio Público y Defensa Pública, ya tienen destacados, profesionales especializados para la atención de la materia y en ese sentido, en conjunto con las juezas y jueces de la materia, ya conforman equipos para la atención respectiva. Para dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 9582, se requiere de equipos Psicosociales que trabajen en conjunto, con los equipos legales, para aplicar la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa.  En el anexo 2 de este informe se presenta un detalle del abordaje de Justicia Restaurativa por circuito y materia en el 2020 que permiten ilustrar las acciones abordadas por el Programa de Justicia Restaurativa.  ***3.3. Propuesta para la prórroga de las plazas extraordinarias destacadas en la atención de Justicia Penal Juvenil Restaurativa.***  Después de un análisis profundo que se realiza en el informe 586-PLA-MI-2020, elaborado por la Dirección de Planificación, el pasado mes de abril, se exponen con el impacto de la Ley, A continuación se presenta la propuesta que se sugiere en los informes señalados anteriormente[[6]](#footnote-6), el cual cuenta con el aval de la Dirección de Justicia Restaurativa, y que tiene como propósito maximizar los recursos existentes, tomando en cuenta las cargas de trabajo, las distancias entre Circuitos Judiciales y otras variables que contribuirían con la ampliación de la cobertura del programa de Justicia Restaurativa hacia otros Circuitos que no cuenten con el servicio para dar un mayor aprovechamiento del recurso existente.  Se debe tomar en cuenta que la Ley 9582 Justicia Restaurativa, determina ampliar la cobertura de Justicia Restaurativa; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para brindar el servicio, aún se cuenta con Circuitos Judiciales descubiertos, razón por la cual la presente propuesta, detalla el personal estimado como necesario para dar cobertura a nivel nacional y en las diferentes materias, así como el recurso físico y de equipos de cómputo que serán necesarios para el respectivo funcionamiento, utilizando las plazas que se encuentran en condición extraordinaria en este año.   * **Conformación de los Equipos Legales ((Fiscalas y/o Fiscalas y Defensoras y/o Defensores).-**   El detalle de la conformación de los llamados equipos legales, que es la fusión de personal del Ministerio Público (Fiscalas y/o Fiscalas) y Defensa Pública (Defensoras y/o Defensores), cubrirían los siguientes circuitos que se detallan en el cuadro 1:  **Cuadro 1.**  **Distribución de atención de Justicia Penal Restaurativa por parte del equipo legal (Persona Defensora y Persona del Ministerio Público)**  **en cada Circuito Judicial.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Equipo de atención** | **Circuito Judicial a atender** | **Penal** | **Ejecución** | **Contravenciones** | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) atenderá en fase intermedia, en ejecución y contravenciones | I y III (Pavas) Circuito Judicial de San José | X | X | X | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) en fase intermedia. | I (Flagrancia), II y III (Desamparados) Circuito Judicial de San José, | X |  |  | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) | I y II Circuito Judicial de la Zona Atlántica | X |  |  | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) | Heredia y I Circuito Judicial de Alajuela | X |  |  | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) | Puntarenas y  III Circuito de Alajuela (San Ramón) | X |  | X | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) | I Circuito de la Zona Sur | X |  |  | | Un equipo legal (Ministerio Público y Defensa Pública) | Circuito Judicial de Cartago | X |  |  |   **Fuente:** Información suministrada por la Dirección de Justicia Restaurativa y sustraída del oficio 076-DNJR-20 del 04 de mayo de 2020, suscrito por el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en su condición de Magistrado Rector de Justicia Restaurativa.  La propuesta conlleva dar una cobertura a diferentes Circuitos Judiciales en el país con 7 equipos legales, integrados por una plaza de Fiscala y/o Fiscal y una de Defensora y/o Defensor.   * **Conformación de los Equipos Psicosociales ((Trabajadora y Defensoras y/o Defensores).-**   Maximizando el recurso de las personas profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en lo que respecta a los equipos de atención psicosocial (profesionales Trabajadores Sociales y Psicólogos), la distribución de los asuntos en Justicia Penal Restaurativa, Justicia Juvenil Restaurativa, Ejecución y Contravenciones se propone de la siguiente manera:  **Cuadro 2.**  **Distribución de atención de Justicia Penal Restaurativa, Justicia Juvenil Restaurativa, Ejecución y Contravenciones por parte de los profesionales del equipo psicosocial en cada Circuito Judicial.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Circuito Judicial** | **Cantidad de personas profesionales** | **Penal** | **Ejecución de la Pena Personas Adultas** | **Penal Juvenil** | **Ejecución Sanciones Penales Juvenil** | **Contravenciones** | | San José en materia penal juvenil. | 1 |  |  | X | X |  | | I y III (Pavas) Circuito Judicial de San José | 2 | X | X |  |  | X | | I (Flagrancia) II y III (Desamparados) Circuito Judicial de San José | 2 | X |  |  |  |  | | I Circuito Judicial Zona Atlántica | 1 | X | X |  |  |  | | II Circuito Judicial Zona Atlántica | 2 | X | X |  |  |  | | I Circuito Judicial de Alajuela | 1 | X | X |  |  |  | | Heredia | 2 | X | X |  |  |  | | Puntarenas | 1 | X | X |  |  | X | | San Ramón | 1 | X | X |  |  |  | | Pérez Zeledón | 2 | X | X |  |  |  | | Cartago | 1 | X | X |  |  |  |   **Fuente:** Información suministrada por la Dirección de Justicia Restaurativa y sustraída del oficio 076-DNJR-20 del 04 de mayo de 2020, suscrito por el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en su condición de Magistrado Rector de Justicia Restaurativa.  La distribución propuesta anteriormente, conlleva brindar el apoyo para modificar algunas de las clases de puesto que están de manera extraordinaria en este año y convertirlas en Profesionales 2 en Trabajo Social y/o Psicología para que puedan cubrir el I y II Circuito Judicial de Guanacaste y el II Circuito Judicial de la Zona Sur, de esta manera se ampliaría la cobertura de atención y se da el servicio a los circuitos con los recursos existentes, tanto ordinarios como extraordinarios.  Para concretar la propuesta se pretende realizar unos ajustes en algunas de las plazas extraordinarias que están en este año que consiste en el cambio del perfil profesional de las dos plazas de Jueza o Juez 3 a profesionales 2 una Trabajadora Social y a una persona profesional en Psicología, además de la conversión del perfil competencial de una de las plazas de Técnica o Técnico a Trabajadora o Trabajador Social, con el propósito de maximizar las plazas existentes para conformar un equipo de trabajo adicional y completar uno de los equipos existentes, conforme la propuesta establecida por el Subproceso de Modernización Institucional y la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, que se indica seguidamente:    A partir de lo expuesto, y siendo que la propuesta contribuirá a aprovechar el recurso existente para dar una mayor cobertura en la atención del Programa de Justicia Restaurativa, con el recurso que se cuenta actualmente, tanto de manera ordinaria como extraordinaria, se recomienda la modificación de la condición de las plazas extraordinarias que se mantienen en Penal Juvenil Restaurativa, a fin de atender el I y II Circuito de Guanacaste y el II Circuito de la Zona Sur.  El impacto económico sería de **288.326.000,00** millones de colones. |
| **IV. Elementos Resolutivos**  **4.1.-** La ley de Justicia Restaurativa 9582 entró en vigencia el 20 de enero de 2019 con un ámbito de aplicación que se extiende a la materia Penal, Penal Juvenil y Contravencional en todas sus etapas; con participación de un equipo interdisciplinario conformado por un equipo legal, un equipo psicosocial y personas juzgadoras.  **4.2.-** En materia Penal de adultos, se encuentran conformados siete equipos Interdisciplinarios a nivel nacional, con una plaza de Fiscala o Fiscal, una de Defensora o Defensor, 2 en el área Psicosocial y una plaza técnica o técnico Judicial. Para el caso de Penal Juvenil se cuenta con atención en nueve circuitos judiciales, y con la colaboración de las plazas de Fiscala o Fiscal y Defensora o Defensor Público en algunos de los cuales se comparte la atención del equipo psicosocial entre penal juvenil y penal adulto, o inclusive con contravenciones.  **4.3.-** En San José, Alajuela, Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica y Guanacaste, se cuenta con equipos Psicosociales que se dedican de manera exclusiva a la materia Penal Juvenil; en Heredia, Cartago, Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y Primer Circuito de la Zona Sur, atienden materia Penal de Adultos y Juvenil a través de la asistencia de un mismo equipo psicosocial.  **4.4.-** En oficio No.076–DNJR-20(ver Anexo 3), dirigido a la Directora de Planificación, por parte del Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rector de Justicia Restaurativa, que establece los requerimientos de recurso humano para la cobertura a nivel nacional de Justicia Restaurativa para el período 2020 a 2022. En concreto, se propone crear una propuesta de equipos interdisciplinarios para ampliar el abordaje de manera conjunta en Justicia Restaurativa para las materias de Penal Adulto, Penal Juvenil y Contravenciones.  **4.5.-** Las seis plazas bajo análisis tienen más de tres años de creadas y su propósito es colaborar con la reducción de circulante y atender labores de Justicia Penal Juvenil Restaurativa en los juzgados que conocen materia Penal Juvenil en Cartago (Juzgado, Fiscalía y Defensa), Heredia (Juzgado) y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Fiscalía).  **4.6.-**El Programa de Justicia Restaurativa, es asumido por el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, a partir del 13 de enero de 2020.  **4.7.-** La Ley de Justicia Restaurativa se implementa a partir de enero del 2019 y referente a la materia Penal Juvenil, en su artículo 6 se indica que se conformará en las diferentes jurisdicciones el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y en el Transitorio I da un plazo al 2021 para tener cobertura nacional.  El modelo de Justicia Restaurativa constituye un mecanismo de resolución alterna de conflicto, que puede aplicarse en una sola oportunidad en cualquier etapa del proceso.  **4.8.-** El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa debe seguir consolidándose y extendiéndose en los diferentes Circuitos Judiciales del país, sobre todo en concordancia con la Ley de Justicia Restaurativa, razón por la cual se considera pertinente mantener las plazas apoyando estas labores y en atención al circulante de las oficinas donde sean asignadas.  **4.9.-**Limitaciones Presupuestarias    La Corte Plena ha brindado directrices en cuanto a la limitación de crecimiento de plazas nuevas, sin embargo, se deja plasmada la necesidad del recurso humano. |
| **V. Recomendaciones**  **Al Consejo Superior**  **5.1.** Dado que el Consejo Superior en sesión 45-20 del 08 de mayo de 2020, artículo XX, acogió la propuesta de abordaje a nivel nacional que contempla el cambio de la clase de puesto y por ende, del perfil profesional de las dos plazas de Jueza o Juez 3 a una plaza de Fiscala o Fiscal y una de Defensora o Defensor Pública, además de la conversión del perfil competencial de las plazas de Técnica o Técnico Judicial a Trabajadora o Trabajador Social y Psicóloga o Psicólogo, con el propósito de maximizar las plazas existentes para conformar un equipo de trabajo adicional y completar uno de los equipos existentes, con ello dar cumplimiento del Transitorio I de la Ley de Justicia Restaurativa, que otorga un plazo al año 2021 para tener cobertura nacional. Para ello se deberá implementar la propuesta de incorporar ₡288,326,000,00, en las plazas que se detallan, en condición extraordinaria. En este caso no se considera costo de mobiliario puesto que las plazas ya se encuentran laborando para la institución de forma extraordinaria.  **Presupuesto por programa al cambiar la condición de las plazas extraordinarias**  **de Justicia Penal Juvenil Restaurativa.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tipo de plaza actual** | **Ubicación** | **Costo anual como plaza actual** | **Propuesta de cambio de perfil profesional** | **Costo anual de cambio de perfil** | | Juez 3 | Juzgado Mixto de Turrialba | ₡56 640 000,00 | Fiscal Auxiliar | ₡54 387 000,00 | | Juez 3 | Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica | ₡56 640 000,00 | Defensor Público | ₡52 867 000,00 | | Fiscal Auxiliar | Fiscalía Penal Juvenil Cartago | ₡54 387 000,00 | Fiscal Auxiliar | ₡54 387 000,00 | | Defensor Público | Defensa Pública de Cartago Penal Juvenil | ₡52 867 000,00 | Defensor Público | ₡52 867 000,00 | | Técnico Judicial 2 | Fiscalía Penal Juvenil de Cartago | ₡14 901 000,00 | Profesional 2 | ₡36 909 000,00 | | Técnico Judicial 2 | Fiscalía Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica | ₡14 901 000,00 | Profesional 2 | ₡36 909 000,00 | | **Costo Total** | | **₡250 336 000,00** | **Costo Total** | **₡288 326 000,00** |   Con lo anterior, se tendría dos equipos:  Uno para I y II Circuito Judicial de Guanacaste y el otro para el II Circuito Judicial de la zona Sur que se conformarían cada uno de un Defensor (Adscrito a la Defensa Publica), un Fiscal (Adscrito al MP) y profesional 2 (Adscrito al Departamento de Trabajo Social y Psicología).  Importante indicar que el Consejo Superior acoge la propuesta del escenario planteado por la Dirección de Justicia Restaurativa, tomando en consideración adicionalmente, según la recomendación técnica de Planificación, que el Equipo Psicosocial del ICJ Alajuela tenga cobertura debidamente programada para el II CJ de Alajuela San Carlos y que el resto de Equipos a nivel nacional extiendan su cobertura al resto de materias y etapas, entres estas Penal, Penal Juvenil y Penal en etapa intermedia, Contravenciones y Ejecución de la Pena, según se plateo por la Dirección de Planificación en relación a las capacidades instaladas, según se detalla a continuación.   * *a) Ingreso promedio mensual mínimo de 40 causas de todas las materias.* * *b) Programar al menos 36 Reuniones Restaurativas al mes de todas las materias.* * *c) Programar al menos 40 Entrevistas y 64 Seguimientos mensuales, por cada profesional del Equipo Psicosocial de todas las materias.* * *d) Programar al menos 7 Audiencias de Verificación, por parte del Equipo Legal, de todas las materias.*   **A la Dirección de Justicia Restaurativa**  **5.2.-**Realizar las coordinaciones respectivas con el Ministerio Público y Defensa Pública, a efecto de que se establezcan los profesionales a cargo de atender las causas de Justicia Restaurativa, para un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales, en virtud de la ampliación de cobertura de los servicios.  **5.3.-**Coordinar el traslado del equipo Psicosocial del Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste y del Segundo de la Zona Sur, a efecto de destacarlos de forma permanente en dicha zona, para la atención de materia respectiva.  **5.4.-** Implementar los equipos de trabajo establecidos en los cuadros 1 y 2 del presente informe, en los diversos Circuitos Judiciales del país y según la recomendación 5.1 de este informe.  **Otras Recomendaciones:**  **A la Dirección de Justicia Restaurativa:**  **5.4.** Establecer los indicadores de gestión a partir de las matrices que se están adaptando en coordinación con la Dirección de Planificación.  **5.5. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado)**  Colaborar con el cumplimiento del Transitorio I de la Ley de Justicia Restaurativa, que otorga un plazo al año 2021 para tener cobertura nacional.  **5.6. Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial**  El recurso recomendado está en concordancia con el Plan Estratégico 2019-2024, en el: Tema Estratégico 1: *“Resolución oportuna de conflictos* “específicamente en la aplicación de las acciones estratégicas *“Medidas alternas: 3. Fortalecer la aplicación de las medidas alternas en la solución de conflictos, que contribuyan a agilizar los procesos judiciales y fomentar la paz social.*  4.Justicia Restaurativa: Fortalecer a nivel nacional la Justicia Restaurativa para agilizar la resolución de los procesos judiciales y fomentar a la paz social”.  Así como en el tema Estratégico 5: Planificación institucional, cuyo objetivo es “Dirigir la gestión judicial en función de las prioridades institucionales con el fin de maximizar el uso de los recursos” |
| *Realizado por: Lic. Alexander Tenorio Campos, Profesional 2* |
| *Aprobado por: Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefe Subproceso de Organización Institucional* |
| *Visto bueno: Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexo 1.**  Estimación costos Recurso Humano y Mobiliario Equipo, propuesta Dirección Justicia Restaurativa y propuesta de la Dirección de Planificación. |  |
| **Anexo 2.**  **Detalle del abordaje de Justicia Restaurativa por circuito y materia en el 2020.** |  |

Interviene la Directora de Planificación, licenciada Valverde Bermúdez: “Si bien es cierto la semana pasada se conoció el informe global de Justicia Restaurativa, nosotros como estudio de plazas traemos para que quede, documentado, la categoría de plazas que quedó yade forma definitiva en la propuesta, siendo así lo que se está planteando, que la plaza de juez 3, del Juzgado Mixto de Turrialba que venía trabajando se convierte en Fiscal Auxiliar, la plaza de juez 3 que venía trabajando en la Zona Atlántica se convierte en Defensor Público, el Fiscal Auxiliar se mantiene de la misma forma, el Defensor Público se mantiene de la misma forma, Técnico Judicial 2 se transforma en un Profesional 2 y el Técnico Judicial 2 en un Profesional 2, estos profesionales atendiendo lo que es Trabajo Social y Psicología para conformar los equipos de trabajo que se plantearon en el informe.”.

Indica don Fernando: “Alguna observación o sugerencia, estamos deacuerdo”.

**Se acordó**: Aprobar el informe 691-PLA-RH-OI-2020, relativo a la Atención de la Materia Penal Juvenil y Justicia Penal Juvenil Restaurativa en todos sus extremos. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO X**

**Documento N° 5667-20**

La Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio 692-PLA-RH-MI-2020, en el que se exponen los resultados del análisis de la **reconsideración planteada mediante oficio JEFDP-450-2020 del 04 de mayo de 2020, suscrito por la máster Diana Montero Montero**, Jefa interina de la Dirección de la Defensa Pública, respecto al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020. Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, Agraria y pensión alimentaria).

En esta oportunidad se dispuso lo siguiente:

***Se acordó: 1.)*** *Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, las cuales son; A la Jefatura de la Defensa Pública, Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo. En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria. Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población. Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo. A la Dirección de Gestión Humana. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en las que se indicó realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública. Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”. Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas. Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como: Disposición para realizar las diligencias in situ, Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.), Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género. Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia Agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública. A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación, se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, tales como: Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física. Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios. A la Dirección de la Planificación. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019; Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio.* ***2)*** *En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial.* ***3.)*** *Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020.* ***4.)*** *Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe.* ***Se declara acuerdo firme.****”*

Se debe leer en acuerdo informe **507-PLA-RH-MI-2020** ya que se muestra error en el número de informe en el acuerdo

Este acuerdo fue comunicado mediante **oficio 3897-20 del 27 de abril del 2020**, a la Dirección de Planificación, Defensa Publica I Circuito Judicial, Gestión Humana y Dirección de Tecnología de Información.

En esta reconsideración la señora M.Sc. M.Sc. Diana Montero Montero, Jefa a.i de la Defensa Pública plantea lo siguiente:

***(Primera Reconsideración. Jefatura de la Defensa Pública)***

*“PRIMERO. La Dirección de Planificación elaboró el Informe 507-PLA-RH-OI-2020, el cual fue puesto en conocimiento de la Defensa Pública, de forma tal que en tiempo se les remitió el Oficio JEFDP- 365-2020, en el que se le realizaron una serie de observaciones, por considerar que ese documento no valoraba aspectos que de forma oral y escrita habían sido facilitados por los especialistas en las materias de contencioso administrativo, Agrario, pensiones, y la supervisión de pueblos indígenas de la Defensa Pública, señalándose en el párrafo final, después de 36 páginas:*

*“Por lo anteriormente expuesto se solicita respetuosamente se realice un nuevo y completo análisis de parte de la Dirección de Planificación, que contemple y analice todos los argumentos y datos expuestos por los especialistas y que se echan de menos en el presente análisis, (los cuales ya habían sido expuestos de manera oral a las personas que realizaron las entrevistas por parte de Planificación, pero que se reiteran en este oficio en las transcripciones realizadas), a fin de que se pueda concluir cuál es la cantidad de plazas que se requieren para la atención de las personas indígenas, -aparte de las que ya han sido reconocidas de Bribri y Buenos Aires en el año 2019-, conforme a lo indicado en el numeral 7 de la Ley de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.”*

*De tal manera que el informe de Planificación referido no es consistente en cuanto a la información, y no valora aspectos cualitativos y cuantitativos básicos en la atención de las personas usuarias indígenas.”*

*(Respuesta a primera Reconsideración. Dirección de Planificación)*

En atención a lo expuesto, la Dirección de Planificación considera que:

Tal y como se manifiesta en el oficio 553-PLA-RH-MI-2020 (Ref. SICE 1692-18) del 17 de abril de 2020, el cual brinda respuesta al oficio JEFDF-365-2020 de la Defensa Pública; se transcribe literalmente lo expuesto en dicho oficio en el penúltimo punto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Observaciones recibidas*** | ***Criterio de la Dirección de Planificación*** |
| *20* | *"se solicita respetuosamente se realice un nuevo y completo análisis de parte de la Dirección de Planificación, que contemple y analice todos los argumentos y datos expuestos por los especialistas y que se echan de menos en el presente análisis"* | *En vista de que todos los argumentos y datos expuestos fueron analizados uno a uno en el presente documento; el criterio de la Dirección de Planificación se mantiene, debido a que la regla Fiscal se mantiene y el presente informe responde a la actualización del requerimiento de recursos para a tramitación de asuntos con persona indígena en calidad de interviniente a partir de la promulgación de la Ley 9593, donde se obtiene como resultado que las cargas de trabajo no han tenido una variación significativa respecto al estudio realizado el año anterior, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2020) artículo XV, celebrada el 23 de mayo de 2019 y, aprobado por Corte Plena en la sesión 22-19 celebrada el 06 de junio de 2019, artículo IV.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe.* |

**Nota: Tomado del texto original del oficio 553-PLA-RH-MI-2020.**

Así como se contestó en el oficio en mención, se reitera que el informe 507-PLA-RH-MI-2020 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”* responde una actualización del informe del año anterior, el cual tiene como principal objetivo determinar las variaciones en las cargas de trabajo, entrada de asuntos, recursos disponibles y aspectos cualitativos, que permitan determinar las necesidades actuales. Como se evidencia en el estudio técnico, las necesidades del año anterior se mantienen con respecto a este y, es por esto por lo que, las recomendaciones de la Dirección de Planificación se mantienen.

De igual manera, como se evidencia en el oficio 553-PLA-RH-MI-2020 (Ref. SICE 1692-18) del 17 de abril de 2020, el cual brinda respuesta al oficio JEFDF-365-2020 de la Defensa Pública; se le plantea al Consejo Superior del Poder Judicial es escenario que propone la Jefatura de la Defensa Pública, el cual comprende la creación de 47 nuevas plazas de Defensora o Defensor Público distribuidas a nivel nacional; escenario que se reitera a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Observaciones recibidas*** | **Criterio de la Dirección de Planificación** |
|  | *En vista de las solitudes planteadas en el Oficio específicamente en el “Cuadro diagnóstico de servicio” remitido por la Defensa Pública, se procede a enlistar todas las plazas requeridas desde el punto de vista de la Defensa Pública, segregado por despacho y materia:*  *Puriscal: 1 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Buenos Aires: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Corredores: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Golfito: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Coto Brus: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Guatuso: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Turrialba: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Tarrazú, Dota y León Cortés: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Limón: 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Bribri: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Atención de personas indígenas que se encuentran privadas de libertad: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.*  *Subtotal: 14 Pensiones Alimentarias, 22 Familia y 11 Violencia Doméstica.*  *Total: 47* | Con el fin de dar atención a lo establecido a lo solicitado por la Defensa Pública y tomando como insumo la estimación de costos por persona defensora para el 2021, se procedió a realizar un cálculo del costo que implicaría el otorgamiento de las 47 plazas mencionadas.  El costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000 y el Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273, para un total de ₡54.545.273 por lo tanto para las 47 plazas correspondería a ₡2.563.627.831. |

**Nota: Tomado del texto original del oficio 553-PLA-RH-MI-2020.**

Sin embargo, el Consejo Superior del Poder Judicial acordó mantener los escenarios plateados en el informe 507-PLA-RH-MI-2020, según propuesta de la Dirección de Planificación.

Lo anterior, no modifica el contenido del informe.

***(Segunda Reconsideración. Jefatura de la Defensa Pública)***

*“SEGUNDO: Aún y cuando se trata de un acuerdo que fue tomado en firme por este Consejo, por la responsabilidad que este tema implica en la atención a una población con una altísima condición de vulnerabilidad, se presenta Recurso de Reconsideración tomando en cuenta la trascendencia del tema y las implicaciones del acuerdo, tanto para la Institución, como para las personas usuarias de nuestro servicio público.*

*Es de importancia establecer que desde el Oficio JEFDP-365-2020, en el apartado de Pensiones Alimentarias, se indicaron una serie de datos que corresponden a los lugares en los que hay Juzgado de Pensiones y Familia, pero no hay persona defensora pública para brindar atención a personas usuarias en esta materia, de tal forma que no se brinda el servicio, o se brinda de forma parcial por falta de recurso humano.*

***(Respuesta a segunda Reconsideración. Dirección de Planificación)***

*Si bien es cierto, la reconsideración menciona específicamente que en el apartado de Pensiones Alimentarias se mencionan lugares en los que hay Juzgado de Pensiones y Familia, pero no hay persona defensora; al inicio del Oficio JEFDP-365-2020 se menciona:*

*“Incluso, se echa de menos en el informe que hay lugares en los que no se pueden brindar los servicios por falta del recurso humano y esto afecta a las personas usuarias, entre ellas a las personas indígenas, por ejemplo, Coto Brus no tiene atención para actoras en pensiones y familia, a pesar de que el Juzgado de Pensiones tiene una carga de procesos muy amplia.”*

*A lo anterior, la Dirección de Planificación contestó, mediante el Oficio 553-PLA-RH-MI-2020:*

“En el informe se evidencia la cantidad de recursos con los que se cuenta en las oficinas de la Defensa Pública. Para el caso específico de la Coto Brus, se expresa literalmente:

“ (…) la Defensa Pública de Coto Brus mantiene colaboración de Corredores (un día por semana). En este último despacho, aunque no se cuente en la estructura organizacional ordinaria con una persona defensora especializada en Pensiones Alimentarias, una Defensora o Defensor Público de materia penal mantiene un recargo de Pensiones Alimentarias. (…)

*Además, en la tabla 3 del informe se evidencia que la Defensa Pública de Coto Bus cuenta con un circulante penal de 76 asuntos (para el que si tiene recursos), 9 de Pensiones Alimentarias (donde mantiene colaboración de otra oficina) y no cuenta con circulante Agrario. Por último, importante mencionar que los asuntos de Pensiones Alimentarias son llevados por recargo por un recurso penal.”*

*Adicionalmente, se reiteran los puntos 15 y 17 del Oficio 553-PLA-RH-MI-2020, respecto al apartado de Pensiones Alimentarias y a la observación que compete:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Observaciones recibidas*** | ***Criterio de la Dirección de Planificación*** |
| *15* | |  |  | | --- | --- | | *"• La Defensa Pública para poder cumplir con las competencias asignadas en la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, publicada el 28 de setiembre de 2018, representación legal tanto a la parte actora como a la parte demandada en materia de familia, pensiones alimentarias y parte actora en procesos de violencia doméstica. Valga indicar que anterior a esta Ley, no se representaba a la parte demanda en procesos alimentarios, tampoco en procesos de familia parte actora y parte demandada y tampoco se atendía a la parte solicitante en procesos de violencia doméstica, debiéndose alterar el curso normal del servicio en diferentes oficinas de la Defensa Pública, después de la entrada en vigor de la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.  • Los datos analizados en el informe bajo estudio de la materia de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica, para la población indígena, incluye únicamente los datos de asuntos activos que lleva la Defensa Pública (a pesar de que el servicio se trata de brindar de la mejor manera, es claro que existe recurso limitado para ofrecer el servicio de forma integral), no se evidencia los datos de asuntos activos en las diversas materias (pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica) que llevan los Juzgados de las localidades con mayor concentración de personas indígenas, tales como: Limón, Puntarenas*   |  | | --- | | *"• La Defensa Pública para poder cumplir con las competencias asignadas en la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, publicada el 28 de setiembre de 2018, representación legal tanto a la parte actora como a la parte demandada en materia de familia, pensiones alimentarias y parte actora en procesos de violencia doméstica. Valga indicar que anterior a esta Ley, no se representaba a la parte demanda en procesos alimentarios, tampoco en procesos de familia parte actora y parte demandada y tampoco se atendía a la parte solicitante en procesos de violencia doméstica, debiéndose alterar el curso normal del servicio en diferentes oficinas de la Defensa Pública, después de la entrada en vigor de la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.  • Los datos analizados en el informe bajo estudio de la materia de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica, para la población indígena, incluye únicamente los datos de asuntos activos que lleva la Defensa Pública (a pesar de que el servicio se trata de brindar de la mejor manera, es claro que existe recurso limitado para ofrecer el servicio de forma integral), no se evidencia los datos de asuntos activos en las diversas materias (pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica) que llevan los Juzgados de las localidades con mayor concentración de personas indígenas, tales como: Limón, Puntarenas, San José (zona sur), Cartago, Guanacaste, Alajuela y Heredia. Llama la atención que en el estudio no se incluye, por ejemplo, datos del Juzgado Contravencional de Tarrazú, donde ni siquiera se cuenta con persona defensora pública en la materia alimentaria, tampoco se evidencian datos del Juzgado Contravencional de San Vito de Coto Brus, ni del Juzgado de Familia de Corredores, de Turrialba, solo para citar algunos casos. "* | | | |  | | --- | | *Seguidamente se extrae parte de lo expuesto en el punto cinco del informe, referente a la carga laboral en materia de Pensiones Alimentarias:*  *"Al tercer trimestre del 2019 existían 306 asuntos en trámite en la Defensa Pública, en los que figuraba una o varias personas pertenecientes a poblaciones indígenas, del total de asuntos un 68% esta centralizado en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, con un 34% en cada una; seguidos de Pérez Zeledón con un 7% y Limón con un 6%.*  *De tal modo, es posible determinar que los asuntos en trámite en Bribri y Buenos Aires de forma separada, superan en un 80% a los casos en trámite en la Defensa Pública con el tercer lugar, en materia de Pensiones Alimentarias."*  *La Dirección de Planificación es consciente que con la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se deberá atender tanto a la parte actora como a la parte demandada; sin embargo, a nivel de cargas de trabajo y tomando en cuenta la maximización de los recursos institucionales; además, en apego a la contención del gasto público; se puede observar que las circulantes actuales con las que cuentan la mayoría de estos despachos no justifican el otorgamiento de recurso humando adicional.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe.* | |
| *17* | |  | | --- | | *"Para mayor claridad expondré mediante un cuadro aquellos juzgados ubicados en las zonas donde existe una mayor concentración de personas usuarias indígenas, con la indicación del servicio que se está brindado, si la Defensa Pública cuenta o no con persona defensora pública en la materia de pensiones alimentarias para la parte acreedora alimentaria. Se aclara que en materia de familia y violencia doméstica no se cuenta del todo con recurso humano para brindar ese servicio."* | | |  | | --- | | *En este particular, como se menciona en el apartado cinco de Pensiones alimentarias del informe 507-PLA-RH-MI-2020, la dinámica es la misma que realiza actualmente la Defensa Pública, donde "(...) los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Pensiones Alimentarias, y en materia de Violencia Doméstica pasan hacer parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Penal. (...)"*  *Tal y como se abordó en la observación 13 de presente documento la Dirección de Planificación es consciente que con la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se deberá atender tanto a la parte actora como a la parte demandada; sin embargo, a nivel de cargas de trabajo y tomando en cuenta la maximización de los recursos institucionales; además, en apego a la contención del gasto público; se puede observar que los circulantes actuales de esas oficinas no justifican el otorgamiento de recurso humando adicional a nivel nacional.*    *Lo anterior, no modifica el contenido del informe.* | |

**Nota: Tomado del texto original del oficio 553-PLA-RH-MI-2020.**

*Como se evidencia, el argumento técnico fue brindado a la Jefatura de la Defensa Pública mediante el Oficio 553-PLA-RH-MI-2020, que efectivamente responde a las observaciones realizadas por la Jefatura de la Defensa Pública mediante el Oficio JEFDF-365-2020.*

*Lo anterior, no modifica el contenido del informe.*

***(Tercera Reconsideración. Jefatura de la Defensa Pública)***

*El día 29 de abril ante el acuerdo del Consejo Superior que se recibe, mi persona se comunica por teléfono con la Sra. Nacira Valverde, directora a.i del Departamento de Planificación, a quien respetuosamente se le consulta sobre los resultados del estudio y el por qué no se habían tomado en cuenta las múltiples observaciones realizadas por los especialistas en materia, que evidencian la necesidad de las personas usuarias de contar con más profesionales de la Defensa Pública que les brinden la defensa técnica. Indicando la Sra. Valverde que la Defensa Pública no aportó prueba de las necesidades de atención en algunas Defensas Públicas como Coto Brus, Turrialba entre otras pues según señaló, la Defensa Pública debía haber indicado de la cantidad de personas usuarias en cada uno de esos despachos, cuántas eran personas indígenas. Al respecto, se le hizo ver a la señora Directora de Planificación que la información con la que cuenta la Defensa Pública, desde un inicio se le facilitó a las personas encargadas de la realización del estudio, quienes no indicaron en ningún momento a los especialistas de la Defensa que tenían que brindar los datos de los procesos y usuarios en los Juzgados de Pensiones Alimentarias, Familia, Violencia Doméstica o cualquier otra materia; ya que si lo hubieran solicitado de esta forma, desde un primer momento la Defensa Pública hubiera requerido dicha información a los Juzgados.*

*Sin embargo, debo señalar que los datos estadísticos necesarios para hacer un estudio de las necesidades institucionales, sea de los Juzgados de Pensiones Alimentarias, Violencia Doméstica y Familia o cualquier otra materia, no son datos asequibles para la Defensa Pública, pues usualmente le corresponde al órgano técnico pedir la información y analizarlos con la perspectiva que corresponde a los expertos institucionales, a fin de elaborar un estudio y resultados adecuados acordes con la realidad judicial y la necesidad de las personas usuarias, por lo tanto, la ubicación y análisis de dichos datos le corresponde a la Dirección de Planificación. Además, desde la Defensa Pública no contamos con los permisos necesarios para acceder a los sistemas de los Juzgados y obtener dicha información. Sin embargo, reitero, si desde el primer momento nos hubieran solicitado esos datos, aun cuando no es tarea de la Defensa Pública recabar esa información, lo hubiéramos hecho con mucho gusto con el afán de colaborar.*

*Se hace notar que el informe de Planificación aprobado por su estimable Autoridad no contiene un estudio integral que incluya los datos de expedientes activos en los diferentes juzgados del país donde una de las partes o ambas sean personas indígenas, en las diferentes materias como lo dispone la ley número 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, en su artículo 7.*

*Estos datos son un punto de partida fundamental, para realizar las proyecciones reales de las plazas que requiere la Defensa Pública, y no basar el estudio únicamente en los casos activos de personas indígenas con los que cuenta la Defensa Pública, en las oficinas donde se cuenta con mayor concentración de población indígena. Lo anterior, no puede reflejar la necesidad de recurso humano ya que estas nuevas competencias, se han tenido que enfrentar sin nuevos recursos, el servicio no se ha podido brindar como debería de ser, así por ejemplo puedo citar: la imposibilidad de que las personas defensoras públicas acompañen a las personas juzgadoras, facilitadores judiciales a las giras a zona indígena, o si lo hacen el servicio ordinario no puede ser brindado.*

**(Respuesta a tercera Reconsideración. Dirección de Planificación)**

*Tal y como se menciona en el nombre del informe 507-PLA-RH-MI-2020 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”, el alcance del informe responde a las detección de las necesidades de recursos en la Defensa Pública, por ello se consideran los datos estadísticos oficiales que se reflejan en los Anuarios Estadísticos; mismos datos que son facilitados por la Defensa Pública y, los datos facilitados directamente por la Sección de Estadística de la Defensa Pública.*

*Además, como es de conocimiento de la Defensa Pública, no todos los asuntos que se tramitan en los Juzgados mantienen representación pública y tampoco, se puede afirmar que todas las personas usuarias son indígenas. Así como se menciona en el oficio la Defensa Pública, se concuerda con que no siempre es posible segregar la cantidad de asuntos que mantienen personas usuarias indígenas en calidad de interviniente. Inclusive, dentro de las recomendaciones del informe se incluye el identificar a las personas usuarias indígenas o en los procesos judiciales de forma automatizada. Es por ello por lo que la información confiable para realizar las estimaciones y proyecciones de la demanda del servicio se realiza con los datos facilitados por la Defensa Pública, en donde, gracias a la muy buena labor, se logra identificar la cantidad de partes intervinientes donde figura población indígena por expediente, lo cual permitió realizar el presente estudio técnico.*

*Por último, no se puede dejar de lado que, en la llamada telefónica que se menciona, la Señora Directora de Planificación indica que, se reconoció el buen trabajo a nivel estadístico realizado por Defensa Publica en materias como Pensiones Alimentarias, sin embargo, se deben contemplar para fines del impacto de esta Ley, los casos donde existe persona indígena como interviniente; esto para poder justificar las 47 plazas que propone la Jefatura de la Defensa Pública.*

Lo anterior, no modifica el contenido del informe.

**(Cuarta Reconsideración. Dirección de la Defensa Pública)**

*Pese a lo anterior, me he dado a la tarea de ubicar algunos números de interés, con relación al tema de atención de personas indígenas, pues el estudio de Planificación aprobado se basa únicamente en los números que le proporcionó la Defensa Pública y se dejaron de lado temas vitales que hemos venido apuntando desde un inicio y que fueron remarcados en el último informe que rindió la Defensa Pública.*

*Por ejemplo, no se realizó un estudio a nivel nacional con los datos de los juzgados, independientemente de la materia, para determinar el número de expedientes activos en la que una o ambas partes fuesen personas indígenas. Este tema no puede ser analizado solo en los lugares en donde haya mayor concentración de personas indígenas, ya que arroja resultados sesgados ya que hay materias que no se tramitan en esos lugares y las personas indígenas no están centradas en esas zonas, ya que las personas indígenas están por todo el país y muchas cambian de domicilio constantemente.*

(Respuesta a cuarta Reconsideración. Dirección de Planificación)

Se concuerda con que las personas indígenas se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, es por ello por lo que no se sesga ninguna oficina de la Defensa Pública que reporte asuntos activos con persona usuaria en calidad de interviniente. Sin embargo, la misma data evidencia que la cantidad de asuntos activos e inclusive entrados se concentra en las zonas donde se recomienda sea reforzado el servicio público con la incorporación de dos recursos de Defensora o Defensor Público, en este caso Buenos Aires y Bribri.

Y reiterando, como se menciona en el punto anterior, el alcance del presente estudio técnico responde a la actualización de las necesidades de la Defensa Pública expresas en el informe anterior e incluso, se evidencia que las cargas de trabajo se mantienen y que la capacidad operativa de las personas servidoras judiciales que trabajan fuera de la zona de Bribri y Buenos Aires permite que éstas asuman la tramitación de los asuntos actuales y la proyección de la entrada. Es por esto, que además tomando en cuenta variables cualitativas, se recomienda la incorporación de dos recursos en las zonas de mayor afluencia de personas usuarias indígenas, donde se requiere reforzar el servicio público brindado.

Lo anterior, no modifica el contenido del informe.

**(Quinta Reconsideración. Jefatura de la Defensa Pública)**

*No se analizó el tema de las giras que realizan las personas facilitadoras judiciales, quienes en muchas ocasiones solicitan a la Defensa Pública que los acompañen y por falta de recursos no hemos podido atender a este llamado.*

*Tampoco, se evidencia que se tomara en cuenta las giras a zona indígena, el tiempo de traslado, para la realización de audiencias en el lugar y acercar la justicia a estas personas que tanto lo requieren por su extrema condición de vulnerabilidad.*

*Además, se omite medir el impacto que ha tenido esta ley en el servicio que brinda la Defensa Pública, por ejemplo en el caso de aquellas personas usuarias que han tenido que acudir directamente al Despacho a plantear el proceso sin asistencia letrada o acompañamiento de la Defensa Pública, como es el caso de la materia de pensiones alimentarias en las localidades de Cartago, Turrialba, Limón, Corredores, Upala, ya que, al momento de buscar a la persona defensora pública, se encuentra de gira en las diversas zona indígenas.*

*Finalmente, no se evidencia estudio en cuanto al tiempo de traslado de las personas defensoras públicas para atender casos de otras jurisdicciones por intereses contrapuestos, ejemplo: de Golfito a Corredores o de Golfito a Puerto Jiménez, o de Corredores a San Vito, o Cartago que visita Turrialba o a la zona indígena, o de Turrialba a la zona indígena, entre otros. Incluso en ocasiones la Defensora de Golfito, dada la existencia de intereses contrapuestos en casos de San Vito, ha tenido que trasladarse a San Vito, pues ambas partes eran personas indígenas. Estos son solo algunos ejemplos que no son analizados en el estudio de Planificación.*

*No podemos dejar de señalar que el análisis de Planificación tampoco toma en cuenta que la atención de la persona indígena es mucho más compleja y consume más tiempo, precisamente por las particularidades de su cultura, lo cual amerita un estudio técnico por parte de un profesional de ingeniería industrial que realice un acompañamiento a las personas defensoras que atienden estos casos para que contabilicen la diferencia de tiempo que se invierte en estos casos.*

***(Respuesta a la quinta reconsideración. Dirección de Planificación)***

*En lo referente a este punto, se transcribe lo mencionado por la Dirección de Planificación en el oficio 553-PLA-RH-MI-2020, específicamente en el punto 1 y 3:*

“Se concuerda con la Jefatura de la Defensa Pública en cuanto a la existencia de minutas que evidencian los requerimientos expresados por el personal defensor, la Supervisión de Pueblos Indígenas e inclusive, la Jefatura de la Defensa Pública. No obstante, se aclara que en el análisis del informe si fue considerado, precisamente variables cualitativas de la zona de Bribri y Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de asuntos con persona usuaria indígena en calidad de interviniente.”

(…)

“La Dirección de Planificación comparte el criterio de que estos datos deben ser analizados; sin embargo, debido a las condiciones particulares geográficas, sociales y económicas de cada población indígena y la zona en la que habita, de momento no se estima oportuno realizar una recomendación generalizada para la atención de la población indígena, pues las condiciones pueden variar según la zona.

Es por ello, que las cargas de trabajo calculadas no son ajustadas para que la Persona Defensora tenga un 100% de ocupación; pues, es necesario dejar espacios para atender imprevistos o situaciones que ameriten dedicar más tiempo, como lo es la atención de personas indígenas.

Por otro lado, dentro de los alcances del Proyecto de Mejoramiento al Proceso Penal se están analizando de manera distintiva la condición y particularidad de la población y la zona en la que se encuentran, tomando en cuenta tiempos de movilización y limitaciones económicas de las personas en cada oficina que se aborda, para emitir recomendaciones de manera integral, que beneficien tanto a la oficina como a la población.”

En lo referente al impacto que ha tenido la ley 9593 en materia de Pensiones Alimentarias, en las localidades de Cartago, Turrialba, Limón, Corredores y Upala; la Administración de la Defensa Pública mediante correo electrónico del 17 de febrero suministró un cuadro estadístico denominado “Personas Indígenas que mantienen procesos en trámite en la Defensa Pública en razón del cumplimiento de la Ley 9593, al 31 de diciembre 2019.” mismo que se encuentra dentro del informe 507-PLA-RH-MI-2020 en el apartado “b. Análisis de datos estadísticos de la Defensa Pública” dentro de este cuadro resaltan los siguientes aspectos en lo referente a Pensiones Alimentarias:

Para materia de Pensiones Alimentarias en total se contabilizaron 65 asuntos, de los cuales en Turrialba se registra un asunto y en Corredores dos asuntos.

El cuadro suministrado no muestra datos para las oficinas de Cartago, Limón y Upala, lo cual denota que no hay un impacto en los asuntos en trámite de esas oficinas al 31 de diciembre de 2019.

El 80% de los asuntos ingresados, correspondieron a Buenos Aires con 23 y Bribri con 29, de ahí que se dé una atención prioritaria a esas oficinas.

Lo anterior, no modifica el contenido del informe.

***(Sexta Reconsideración. Jefatura de la Defensa Pública)***

*Debo indicar, que resulta preocupante que se pretenda partir del análisis de los casos de personas indígenas planteados ante órganos jurisdiccionales sin acompañamiento de la Defensa Pública, cuando no existe certeza si en los juzgados se les consulta a todas las personas usuarias si es persona indígena o no, de ahí, que algunos no proporcionaron la información requerida. Incluso, podría ocurrir que se omita hacer este tipo de consulta por considerar que puede ser vista como discriminatoria, aun cuando este no sea el fin de la consulta.*

*Entre los juzgados que no pudieron facilitarnos los datos sobre personas indígenas se encuentran:*

*Juzgado Contravencional de San Vito*

|  |  |
| --- | --- |
| *Materia* | *Cantidad de expedientes activos sin que puedan determinar en cuales interviene una persona indígena por no llevar ese control el Juzgado de la localidad* |
| *Pensiones alimentarias* | *1150 (de los cuales la Defensa Pública solo representa a personas indígenas en 16 asuntos)* |
| *Violencia Doméstica* | *332 (no se lleva ningún caso)* |

*Juzgado de Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil de Turrialba y el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Turrialba*

|  |  |
| --- | --- |
| *Materia* | *Cantidad de asuntos de personas indígenas* |
| *Violencia doméstica* | *562, de los cuales 57 intervienen personas usuarias indígenas cabécar y la Defensa Pública solo lleva 2 asuntos* |
| *Familia* | *73 asuntos, 4 asuntos activos, la Defensa Pública llevan 2 asuntos únicamente.* |
| *Pensiones alimentarias* | *140 asuntos de personas indígenas, de los cuales solo 19 son representados por la Defensa Pública.* |

*Juzgado Contravencional de Puerto Jiménez*

|  |  |
| --- | --- |
| *Materia* | *Cantidad de expedientes activos sin que puedan determinar en cuales interviene una persona indígena por no llevar ese control el Juzgado de la localidad* |
| *Violencia Doméstica* | *172 expedientes* |
| *Pensiones Alimentarias* | *171 expedientes* |

*En cuanto a la oficina de Puerto Jiménez, se debe hacer notar que ni siquiera se cuenta con persona defensora pública en materia de pensiones alimentarias, por lo que estas personas no tienen la opción de representación legal gratuita. Se hace notar que, para poder llegar al lugar desde Golfito se debe pagar una lancha que tiene un precio por viaje de 3.000 mil colones, la misma cantidad de regreso. Además, el bus hace la ruta solo una vez en la mañana y otra en la tarde, desde Golfito.*

*En la zona de Puerto Jiménez, la población indígena esta sin atención, no hay plaza de pensiones alimentarias, familia o violencia doméstica. El Juzgado debe atender a la población indígena de Alto Laguna de Osa, que es un territorio indígena de gran extensión, y para recibir la representación legal gratuita deberían ir hasta Golfito, pero esto nunca ocurre por la falta de recursos económicos para pagar el pasaje del transporte marítimos o transporte público por carretera.*

***(Respuesta a la sexta reconsideración. Dirección de Planificación)***

La Dirección de Planificación concuerda con que existe una omisión por parte de algunos despachos judiciales en el registro de las variables; y resulta una limitante para los estudio técnicos, sin embargo, se es consciente que el Consejo Superior ha remitido circulares como la 15-2019 del 4 de febrero de 2019 donde recalca la importancia del registro de variables sociodemográficas, coligadas a las partes intervinientes en los procesos judiciales ingresados y la importancia de mantener actualizado los sistemas informáticos y de esta manera contribuir al cambio positivo cultural de las funcionarias y los funcionarios judiciales de las oficinas y despachos judiciales.

Haciendo un análisis de los cuadros suministrados en lo referente a la representación de la Defensa Pública en los casos activos con interviniente indígena, se puede observar que, en el caso del Juzgado Contravencional de San Vito, en materia de Pensiones Alimentarias la representación de la Defensa Pública es de solo un 1% y en Violencia Doméstica de un 0%.

En el Juzgado de Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil de Turrialba y el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Turrialba, la representación de la Defensa Pública en Violencia Doméstica es de 0,3%, en Familia de 2,7% y en Pensiones Alimentarias es de 14%.

Por último, en el Juzgado Contravencional de Puerto Jiménez hay un 0% de presentación de la Defensa Pública en Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias.

En vista del análisis anterior, se debe aclarar que la Jefatura de la Defensa Pública oportunamente realizó ajustes para brindar siempre la atención de asuntos Pensiones Alimentarias en esas zonas; la Defensa Pública de Cartago da colaboración a Turrialba dos veces por semana y en la Defensa Pública de Coto Brus el Defensor Penal posee ese recargo. En el caso particular de Puerto Jiménez se tiene conocimiento que no poseen una plaza destinada para Pensiones Alimentarias; sin embargo, los datos estadísticos suministrados por la Defensa Pública no muestran ningún asunto entrado, en trámite o terminado, debido a que los asuntos son atendidos por la Defensa Pública de Golfito.

Ahora, en lo que respecta a los asuntos en trámite con intervinientes indígenas en materia de Pensiones Alimentarias la oficina de Golfito al 30 de setiembre tenía solamente 9 asuntos, lo que porcentualmente es un 3% de todos los asuntos con intervinientes indígenas, dato que sería aún menor si se discriminan los asuntos correspondientes a Puerto Jiménez; colocándola muy por debajo de oficinas como Buenos Aires y Bribri con un 34% cada una.

Es por lo anterior, que la Dirección de Planificación considera que la carga laboral de la oficina técnicamente no justifica el otorgamiento de puestos adicionales.

*Además, como se mencionó en la respuesta a la tercera reconsideración del presente oficio, como es de conocimiento de la Defensa Pública, no todos los asuntos que se tramitan en los Juzgados mantienen representación pública y tampoco, se puede afirmar que todas las personas usuarias son indígenas. Así como lo menciona en el oficio la Defensa Pública, se concuerda con que no siempre es posible segregar la cantidad de asuntos que mantienen personas usuarias indígenas en calidad de interviniente. Inclusive, dentro de las recomendaciones del informe se incluye el identificar a las personas usuarias indígenas o en los procesos judiciales de forma automatizada. Es por ello por lo que la información confiable para realizar las estimaciones y proyecciones de la demanda del servicio se realiza con los datos facilitados por la Defensa Pública, en donde, gracias a la muy buena labor, se logra identificar la cantidad de partes intervinientes donde figura población indígena por expediente, lo cual permitió realizar el presente estudio técnico.*

***(Séptima Reconsideración. Dirección de la Defensa Pública)***

*En virtud del acuerdo transcrito, con el mayor de los respetos, se presenta el Recurso de Reconsideración el cual solicito se acoja, ya que no se comparte el informe aprobado por el Consejo Superior, emitido por la Dirección de Planificación 507-PLA-RH-OI-2020, ni sus conclusiones y recomendaciones. Se considera que dicho informe tiene una base probatoria que no es acorde a la realidad de la Defensa Pública, ni la atención que esta brinda a las personas indígenas y por ello no contempla en sus recomendaciones la totalidad de las plazas que las personas usuarias indígenas requieren para su atención, a pesar de su condición de extrema vulnerabilidad.*

*De tal manera que, si se considerara y valorara lo señalado en el Oficio JEFDP- 365-2020, se podría determinar la necesidad no de dos plazas como lo indica la Dirección de Planificación, sino de una cantidad mayor de plazas que las personas usuarias indígenas requieren. Es así como se solicita reconsiderar el acuerdo y no tener por aprobado el informe de Planificación, sino valorar el Oficio de la Defensa Pública ya indicado y ordenar un nuevo estudio integral a la Dirección de Planificación, que en su condición de órgano técnico especializado debe recolectar e incluir datos de los diferentes Juzgados de Pensiones Alimentarias, Familia y Violencia Doméstica a nivel nacional, tanto de forma general como segmentada en relación con la población indígena. “*

***(Respuesta a la sétima reconsideración. Dirección de Planificación)***

En este punto se considera correspondiente citar lo manifestado por la Dirección de Planificación en el oficio 553-PLA-RH-MI-2020 en sus puntos 18 y 19:

*“La Dirección de Planificación tomando en consideración las limitaciones presupuestarias actuales que imposibilitan la creación de nuevas plazas y en busca de la maximización de los recursos con los que cuenta la institución, en el apartado denominado "Aspectos demográficos a considerar" realizó una revisión de todas las zonas indígenas del país, con el fin de detectar aquellas de mayor densidad, para así, poder favorecer primeramente a la mayor cantidad de personas; como resultado se obtuvieron las zonas de Bribri y Buenos Aires.*

*Por otro lado, es importante destacar que mediante el Proyecto de Mejoramiento al Proceso Penal que realiza la Dirección de Planificación, ya fue abarcada la oficina de la Defensa Pública de Bribri donde se realizaron una serie de propuestas para mejorar el acceso a la justicia y el servicio que se brinda a la población indígena, como la realización de indagatorias en territorios indígenas en busca de un acercamiento con las personas, la atención de indagatorias de respuesta inmediata, con el fin de evitar que la población indígena deba presentarse varias veces; se promovió la posibilidad de ampliar las instalaciones físicas actuales o trasladarse a un lugar cercano para dar un mejor servicio a los usuarios, se planteó la capacitación al personal en lenguas indígenas, entre otros.*

*Si bien es cierto, estas recomendaciones fueron planteadas para la zona Bribri, el proyecto irá abarcando paulatinamente todas las oficinas de la Defensa Pública del país, lo que traerá una serie de recomendaciones específicas para cada oficina según sus particularidades y claramente tomando en cuenta los aspectos sociales asociados.”*

*(…)*

|  |
| --- |
| *“La Dirección de Planificación coincide con lo manifestado por la Jefatura de la Defensa Pública, es por ello que, tomando en consideración las limitaciones presupuestarias que atañen a la institución, que se está haciendo un esfuerzo mediante los alcances del Proyecto del Mejoramiento al Proceso Penal en la Defensa Pública, para que en la medida de lo posible sean movilizadas plazas hacia las oficinas con mayor necesidades para solventar paulatinamente los requerimientos asociados a la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Poblaciones Indígenas.*  *Por otro lado, como se observa en el análisis y en los elementos conclusivos del informe en atención, y en lo concerniente a Pensiones Alimentarias, se puede observar que un 85% del total de asuntos se concentra en Buenos Aires y Bribri, y es por ello, que esta Dirección decidió priorizar la situación de estas oficinas.*  *Además, se tiene conocimiento de la situación de las oficinas de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón y Coto Brus, las cuales serían después de Bribri y Buenos Aires, las oficinas de mayor carga laboral en Pensiones Alimentarias y desde la perspectiva de mejorar al servicio público, eventualmente se podría valorar dotar de recurso; pues, según lo establecido en la Ley Acceso a la Justica de Pueblos Indígenas debe darse representación tanto a la parte actora como a la demanda, y partiendo de que no puede ser la misma Persona Defensora quien represente a ambas parte; sin embargo, las cargas de trabajo actuales, se logran atender con la cantidad actual de defensoras y defensores, y ante la necesidad de priorizar la utilización de recursos no resulta procedente otorgar recursos adicionales en este momento, pero serán tomadas en cuenta dentro de los alcances del Proyecto de Mejoramiento Penal de la Defensa Pública, como parte de la maximización de los recursos institucionales.”* |

Asimismo, es importante recalcar lo mencionado en la primera respuesta del presente informe, donde se indica lo siguiente:

*“De igual manera, como se evidencia en el oficio 553-PLA-RH-MI-2020 (Ref. SICE 1692-18) del 17 de abril de 2020, el cual brinda respuesta al oficio JEFDF-365-2020 de la Defensa Pública; se le plantea al Consejo Superior del Poder Judicial es escenario que propone la Jefatura de la Defensa Pública, el cual comprende la creación de 47 nuevas plazas de Defensora o Defensor Público distribuidas a nivel nacional”*

Sin embargo, el Consejo Superior acordó mantener los escenarios planteados dentro del informe 507-PLA-RH-MI-2020.

Adicionalmente, cabe manifestar, que en consideración de la carga de trabajo de los recursos defensores a nivel nacional, se estima conveniente en este informe, mantener la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, aprobado por Corte Plena en sesión 22-19 de Corte Plena (Presupuesto 2020) del 6 de Junio de 2019, Artículo IV donde se establece que las 16 plazas de Agrario recomendadas ordinarias para este 2020, asuman como carga ordinaria aquellos asuntos en donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Tal y como lo recomendó la Dirección de la Defensa Pública.

Importante indicar que, con respecto a la propuesta de la Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, relacionado con priorizar el reforzamiento de Defensa Pública Especializada en materia indígena, indicado en el documento compartido con la población judicial el martes 5 de mayo del 2020; en este informe 507-PLA-RH-MI-2020 se recomiendan dos (2) plazas de Defensora o Defensor Público, para la atención de población de pueblos Indígenas.

Por otro lado, dentro del informe 507-PLA-RH-MI-2020, se incluyeron antecedentes referentes a regla fiscal que impiden el crecimiento del presupuesto y en plazas:

*“En oficio 101-P-2019, de fecha 17 de mayo de 2019 y dirigido a la Ministra de Hacienda, el Presidente de la Corte y en alusión al oficio DM-0466-2019, mediante el cual se informó de la aplicación de la Regla Fiscal en el presupuesto 2020, entre otras ideas al referirse al monto máximo autorizado al Poder Judicial, se indicó:*

*“(…) Es importante señalar que estos datos no incorporan los requerimientos asociados a las nuevas obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa por aprobación de leyes, los cuales será necesario solicitar ante el Ministerio de Hacienda de forma complementaria al presupuesto ordinario.”*

*Posteriormente mediante oficio DM-0945-2019, de fecha 11 de junio del 2019, la señora Ministra de Hacienda y en alusión a lo indicado en el oficio 101-P-2019, comunica al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:*

*“(…) Finalmente, en relación con las solicitudes complementarias al Anteproyecto de presupuesto de la institución a que se hace alusión en su oficio, le informo que el cumplimiento de la regla fiscal no da espacio para el financiamiento de nuevos gastos”.*

*En el oficio 118-P-2019 del 14 de junio de 2019, el presidente de la Corte solicitó a la Ministra de Hacienda se valorara la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender esta y cinco nuevas obligaciones más encomendadas por la Asamblea Legislativa.*

*Mediante oficio 1538-PLA-PP-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la Dirección de Planificación al revisar el Proyecto de Presupuesto 2020 trasladado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y en relación directa con los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial para la atención de nuevas obligaciones, en el apartado A.1. se indicó lo siguiente:*

*“(…) No fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa”.*

*Este oficio mencionado anteriormente fue conocido por Corte Plena en sesión 41-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, artículo XV.*

*Finalmente, de acuerdo con la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, aprobada por la Asamblea Legislativa, se comprobó que los recursos para la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas no fueron incorporados durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019 relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económica del 2020” en la Comisión de Asuntos Hacendarios.”*

Por último, es de interés institucional mencionar que mediante los oficios DGPN-0145-2020 del 24 de abril, DM-0321-2020 del 27 de marzo, DM-0436-2020 del 15 de abril del 2020 el Ministerio de Hacienda comunica al Poder Judicial sobre nuevos lineamientos técnicos referentes al gasto presupuestario y que la crisis económica causada por el COVID-19 podrá implicar aún más cambios que limitan aún más el accionar institucional para dar frente a nuevas obligaciones; lo anterior, exige a la institución un mayor esfuerzo en la maximización de los recursos disponibles.

Con base en lo anterior, se recomienda rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI.

**Anexo**

****

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, da la palabra a la licenciada Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Modernización Institucional, quien explica el informe y manifiesta: “Otra vez las consideraciones sobre el mismo informe 507, el acuerdo fue aprobar este informe y todas sus recomendaciones y además rechazar las observaciones que ya habían sido presentadas anteriormente por doña Diana y por doña Kattia, sin embargo, presentan reconsideraciones en otro de los oficios el 3897-20 del 27 de abril y me permito definir cada una de las reconsideraciones.

Lo primero que indican es que no se tomó consideración en el anterior oficio es el JEFDP365-2020, el cual si fue atendido y fue conocido por el Consejo en el mismo acuerdo, en el que se conoce el informe que se fue en consulta, ellos solicitan que se realice un nuevo estudio que sea completo por la Dirección de Planificación y que contemple y analicé los argumentos y los datos de los especialistas, nosotros lo que indicamos es esto, efectivamente, que el informe se conoció en 553-PLA-RH-MI-2020, aprobado ya por el Consejo, y que reiteramos lo dicho en este informe, que los argumentos analizados uno a uno, si fueron parte del análisis de la Dirección de Planificación que mantenemos lo dispuesto por la regla Fiscal, y que el presente informe considera los requerimientos para la tramitación de asuntos con persona indígena en calidad de interviniente, lo cual nos da un resultado a nivel de cargas de trabajo que mantiene también lo dispuesto en el anterior informe de presupuesto para el 2020, ya aprobado por Corte Plena en la sesión 22-19, por lo tanto, seguimos sin modificar lo dispuesto en el informe, además les decía que el informe técnico las necesidades de este años con toda y actualización estadística se mantiene que la carga de trabajo no da para lo que ellos están solicitando, lo que solicitaban del nuevo estudio era la incorporación de 47 plazas de defensor público, nosotros ya habíamos indicado y las plazas que indicaban estaban para Puriscal, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Coto Brus, Guatuso, Turrialba, Tarrazú, Dota, León Cortes, Limón, Bribrí, para lo que es atención sobre todo de Pensiones Alimentarias, Familia y Violencia Domestica, este escenario tenía un costo de 2.563.000.000, nosotros indicamos que bueno si fue objeto de análisis estadístico cada uno de estos lugares y no justificaba por la carga de trabajo, entonces consideramos mantener lo dispuesto en el informe.-

En la segunda reconsideración ellos indican que existen lugares de pensiones y de familia en donde no hay persona defensora pública, para brindar la atención, nosotros indicamos que efectivamente existen lugares en donde hoy no se tiene persona defensora pública para la atención de los asuntos, en este caso ellos plantean sobre todo en Coto Brus, sin embargo tomamos en consideración que la zona de Coto Brus hoy, y esto es textual de la misma Defensa, mantiene la colaboración de Corredores un día a la semana, entonces a pesar de que no hay persona Defensora, la atención de los asuntos en esa zona si está siendo atendido, ahora bien, aquí le hacemos ver a la Defensa, que el impacto de ley que se atiende con este informe corresponde a los asuntos donde hay una persona interviniente de población indígena, no a la totalidad de los asuntos en materia como pensiones, familia y demás, si tenemos claro que ahora involucra la atención intervinientes sea parte actora o parte demandada.

Para hacer un resumen en relación a Coto Brus, que es sobre todo la reconsideración la que ellos enfatizan, hoy tienen un circulante de 76 asuntos, 9 de esos son pensiones alimentarias, y no cuentan con circulante en Agrario y como les repito ya esos 9 asuntos de pensiones alimentarias, están siendo atendido por la Defensa Publica de Corredores.

Nosotros igual mantenemos lo dispuesto en el informe. Ahora es importante reiterar que en el estudio técnico que nosotros realizamos, si incorporamos la cantidad de intervinientes que hoy el país tiene a nivel de persona población indígena y solo el 68 % de los asuntos está concentrado en Bribrí y Buenos Aires, de ahí que nosotros en el informe prácticamente concluye en la dotación de un recurso a cada una de estas zonas, pero en ninguno de los asuntos nos sale Coto Brus, no tenemos un porcentaje que sea representativo a nivel de carga de trabajo para dotar de plazas en esta zona.-

Otra de las consideraciones de la Defensa, es también la de Turrialba, ellos hacen ahí un desglose de las zonas que ellos consideran importantes, igual, el problema aquí es que ellos indican que se basaron únicamente en los casos activos de persona Indígena, efectivamente nosotros coincidimos con ese criterio que para medir el impacto de la ley teníamos que considerar el incremento o el impacto a nivel de este tipo de población, no de la totalidad de los circulantes, ahora los datos estadísticos oficiales que nosotros trabajamos fueron los de los anuarios estadísticos que la misma Defensa Publica en coordinación con la Sección de Estadística de Planificación publican y son los datos oficiales para realizar esta identificación de las partes en donde figura población Indígena por expediente.-

La cuarta reconsideración va relacionado sobre los datos que nosotros nos basamos fueron únicamente en los que proporcionó la Defensa, efectivamente ellos fueron quienes de muy buena forma pudieron detectar los asuntos donde hay una persona interviniente y ellos dan unas limitantes de las zonas donde no fue posible detectarlo, sin embargo, ellos querían que se conociese la totalidad de circulante de estas zonas, nosotros insistimos de nuestro criterio que se evidencia que las cargas de trabajo se mantienen y que la capacidad operátiva de las personas servidoras judiciales que trabajan hoy en la zona de Bribrí y Buenos Aires, permita que se asuman los asuntos en su totalidad, sin embargo a pesar de los datos cuantitativos, tomamos variables cualitativas como la población y alguna otras variables que la misma Defensa nos indicó y fue cuando se considera dar soporte a Bribrí y Buenos Aires por ser las zonas de mayor afluencia de personas indígenas, para el resto de la zona no consideramos que la carga de trabajo nos dé, es importante aquí recordar que parte del análisis es que la Defensa Publica de Agrario son quienes van a atender también las poblaciones indígenas y hoy los promedios por defensor son de 137 y nosotros tenemos identificado que la capacidad instalada es hasta de 180 asuntos por defensor, entonces tienen una diferencia entre su capacidad instalada y la atención actual, es por eso que se mantiene el criterio del año pasado y que coincidimos con la Defensa que sean estos 16 Defensores que además se le refuerza con 7 plazas ordinarias, para completar estos 16, que no solo conocen los intereses de las partes sino los intereses contrapuestos y en este caso sea población indígena también dentro de esta carga de trabajo.-

En la quinta reconsideración indican que no se tomaron variables como los acompañamientos que ellos hacen a las personas facilitadoras judiciales, las giras que tienen que hacer en las zonas indígenas además el tema de la asistencia, que tienen que tener en zonas, y los traslados que esto representa y la complejidad de los asuntos, aquí nosotros reiteramos lo indicado en cuanto a la capacidad instalada, que sí, lo que nosotros definimos las cargas de trabajo no fueron ajustadas para que un defensor tenga un 100% de su ocupación, por el contrario están por debajo de su ocupación y con eso nos permitimos indicar que las zonas si van a ser atendidas como se está haciendo el día de hoy tanto de las partes como de los intereses contrapuestos, además ellos pedían que se incorporara un estudio específico para cada zona, tomando en consideración otras materias, nosotros les indicamos que precisamente hoy existe un grupo de 3 profesionales en conjunto con un profesional de la defensa que se dedican a tiempo completo a los abordajes que son parte del proyecto de mejora integral del proceso penal y ya hoy en algunas zonas, algunas defensas se han dado algunas recomendaciones en relación a la mejora, por ejemplo, recomendaciones en cuanto a movilización, recomendaciones en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a indicadores de gestión, en cuanto a temas de infraestructura y demás que permitan mejorar los servicios de cada una de estas zonas, entonces, si nosotros ya tenemos recursos asignados en estas zonas que era parte de lo que ellos pedían, incluso que se incorporaron ingeniero industrial para la atención de este informe, bueno este informe fue realizado por los mismos compañeros que tienen hoy las Defensas Públicas en el proyecto de mejora integral, entonces nosotros básicamente mantenemos el criterio de que si se está haciendo lo que ellos solicitan solo que estamos bajo un cronograma de trabajo, sin embargo las cargas de trabajo a nivel de población indígena que fue extraída, en conjunto,a nivel Nacional, siguen teniendo el mismo criterio que no han aumentado en relación al año anterior, aquí solo para un ejemplo, ellos hablan de zonas como San Vito en pensiones tiene una representación de la Defensa de un 1% y no hay representación de Violencia Domestica, en la zona de Turrialba, tanto en familia, como Violencia Domestica, Pensiones se tienen representaciones de menos del 1%, por parte de la defensa, Puerto Jiménez no se tiene representación de la defensa porque todos los casos los lleva Corredores; y en Golfito por ejemplo se tienen muy pocos asuntos que son atendidos que es donde hay intervención de la población indígena, le repito que casi el 80%, de las personas indígenas son atendidas en Bribrí, y en Buenos Aires que fue donde se reforzó con recurso humano.-

La Sétima reconsideración y última, es que ellos reiteran que no se apruebe el informe de Planificación que ya había sido aprobado por el Consejo, que se incluyan los estudios específicos y la incorporación de un profesional para estos estudios, bueno nosotros reiteramos que ya estamos como le repito, con profesionales dedicados a la Defensas Publicas de todo el país, mantenemos el tema del reforzamiento de la hoy incluso con la comisión de acceso a la Justicia que indica que es importante reforzar en estas zonas Bribrí, Buenos Aires, incluso con el tema del dialecto, básicamente sería el resumen de todas las reconsideraciones que presenta la Defensa Publica y nosotros como Dirección de Planificación mantenemos el criterio técnico de que se rechacen y que se mantenga lo dispuesto en el acuerdo del Consejo Superior”.

Indica el magistrado Cruz Castro: “Si, los números no dan para esa pretensión”.

Interviene la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación indicando: “Converse con doña Diana Montero sobre que se evidencia una necesidad en la Defensa Pública, precisamente en un informe adicional, que ya desde años anteriores habíamos indicado que efectivamente ellos en materia de familia y pensiones requieren alrededor de 40 sino más plazas para completar las estructuras, sin embargo, también le comenté, que este informe es en relación a la atención de las personas indígenas, y en relación a las personas indígenas es que estamos haciendo el análisis, no sería correcto, técnicamente cargar un informe de atención de personas indígenas a una necesidad ordinaria de la Defensa Publica, esa es la explicación en concreto del porque nosotros no avalamos el hecho de todas esas plazas para Defensa Publica, en este informe.”

Manifiesta el magistrado Cruz Castro: “alguna objeción o comentario”.

- 0 -

**Se acordó**: **1.)** Aprobar el informe presentado por la Dirección de Planificación 692-PLA-RH-MI-2020 con el resultado del análisis de la reconsideración planteada mediante oficio JEFDP-450-2020, suscrito por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina. de la Dirección de la Defensa Pública. **2)** Rechazar la reconsideración planteada, y por lo tanto mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XI**

**Documento N° 5668-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio 693-PLA-RH-MI-2020, en el que se expone el resultado del **análisis de una serie de observaciones realizadas por distintas instancias judiciales al informe 555-PLA-RH-MI-2020** relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, Ley 9609.

Previo a iniciar con el análisis de las observaciones resulta procedente establecer que el informe en consulta fue realizado, tomando como base el informe 630-PLA-RH-MI-2019 relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, Ley 9609, el cual fue aprobado por el Consejo Superior Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19, celebrada el 16 de mayo del 2019, sesión extraordinaria 47-19 artículo XXIII, celebrada el 24 de mayo del 2019 y sesión de Corte Plena 22-19 artículo VI, celebrada el 6 de junio del 2019.

Como respuesta se recibieron observaciones de la Secretaría de la Defensa Pública del I Circuito Judicial de San José *(ver anexo 1 Secretaría de la Defensa Pública del I Circuito Judicial de San José Oficio JEFDP-434- 2020),* Gestión Humana *(ver anexo 2 Gestión Humana Oficio PJ-DGH-SAP-140-2020)* y Dirección Ejecutiva *(ver anexo 3 Dirección Ejecutiva Oficio 1568-DE-2020)*.

Importante mencionar que, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) y la Escuela Judicial, no tuvieron observaciones del informe *(ver anexo 4 CACMF Oficio 106-CACMFJ-JEF-2020 y anexo 5 Escuela Judicial Oficio EJ-DIR-077-2020).*

Por otro lado, es importante considerar lo indicado por el Ministerio de Hacienda, mediante oficio DM-0436-2020 del 15 de abril del 2020 *(ver anexo 6 Comunicación del gasto presupuestario máximo para 2021, Ministerio de Hacienda)*, en el cual se señala el Título IV de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” se establecen la regla fiscal y los criterios que se deben considerarse para la formulación del presupuesto 2021. También se indica que mediante oficio DM-0321-2020 de fecha 27 de marzo de 202, se comunicó lo siguiente:

*“…para el proceso de elaboración del presupuesto para el ejercicio económico del 2021, el porcentaje de crecimiento del gasto corriente será de un 4,13%, el cual se aplicará en el Presupuesto Nacional de manera agregada, considerando las erogaciones del pago de los intereses de la deuda; razón por la que este Ministerio realizó un ejercicio interno para estimar el monto máximo a presupuestar en gasto corriente por parte de su representada…”*

En el mismo oficio DM-0436-2020 se considera lo anterior y atendiendo lo dispuesto en los artículos 176 y 177 de la Constitución Política, 32 y 35 de la Ley 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, 38 de su Reglamento y sus reformas, y 4 y 5 de los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, se comunica:

*“…el gasto presupuestario máximo, monto que deberá considerar la entidad a su cargo para formular su anteproyecto de gasto para el ejercicio presupuestario del 2021.*

***GASTO PRESUPUESTARIO MÁXIMO INSTITUCIONAL***

|  |  |
| --- | --- |
| *Poder Judicial (en millones de colones)* | |
| *Gasto Presupuestario Máximo* | *468.793,00* |
| *Gasto Corriente (incluye Contribución estatal al Seguro de Salud) 1/* | *443.707,00* |
| *Gasto de Capital* | *25.086,00* |

1/ Monto estimado con cero crecimientos en plazas y costo de vida.

*El límite del gasto corriente comunicado no podrá ser mayor al que se muestra en el cuadro anterior, sin embargo, en caso de que la entidad requiera presupuestar mayores recursos en gasto de capital, podrá hacerlo, tomando recursos del límite del gasto corriente, respetando el monto del gasto presupuestario máximo.*

*Asimismo, no se autorizará la creación de plazas, ni la solicitud de recursos adicionales al monto de gasto presupuestario máximo comunicado, por lo que estas opciones estarán deshabilitadas en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP)…”*

Teniendo claro las limitaciones presupuestarias de la Institución, seguidamente se adjunta un resumen de los principales puntos planteados; así como, las observaciones correspondientes de la Dirección de Planificación:

| **#** | **Observaciones recibidas** | **Criterio de la Dirección de Planificación** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Secretaría Defensa Publica I Circuito Judicial. Oficio JEFDP-434- 2020** Mediante oficio JEFDP-434- 2020, el Dr. Erick Núñez Rodríguez, Sub Jefe a.i Defensa Pública, manifiesta: | |
| *1.1.* | *"...la Unidad Agraria ha aumentado el número de defensores con 7 plazas ordinarias en la actualidad, siendo la propuesta original de 12 (5 plazas extraordinarias de Defensora o Defensor Público, para que realice las funciones de suplencia, contraparte y de curador procesal, según las nuevas labores que le delega el Código Procesal Agrario. Estas últimas plazas destacadas, en Liberia, San Ramón, San José, Guápiles y Corredores.). Estas últimas se podría evaluar su necesidad en la entrada del Código procesal Agrario, pues se verías otros aspectos como la participación de la persona defensora Agraria en sede Administrativa y su ampliación de competencia, lo cual quedaría a cargo de la Jefatura la solicitud de nuevas plazas como complemento de las labores de la Unidad Agraria. Es importante mencionar que la carga de expedientes ponderada promedio de la Unidad Agraria es de 172 expedientes y 226 intervinientes, que de acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento de Planificación del Poder Judicial el máximo requerido por plaza es de 180. Esto tiene relevancia para tener en cuenta para la solicitud de nuevas plazas una vez entre en vigencia el Código Procesal Agraria…"* | Se toma nota de la observación  Adicionalmente, se indica que en el informe 507-PLA-RH-MI-2020, referente al Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas, se analiza que los datos proyectados de la Defensa Pública en materia Agraria, se estima una entrada promedio de 8 asuntos por recurso Defensor Público a nivel nacional; así como, un circulante promedio de 129 asuntos por cada plaza de Defensor.  De considerar la entrada promedio de 8 asuntos a nivel nacional más el circulante por cada plaza a diciembre de 2018, se estima un circulante proyectado de aproximadamente 137 asuntos por cada recurso Defensor Público; estando por debajo en 43 procesos (24%) de la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por cada plaza de Defensora o Defensor Público.  En consideración de la carga de trabajo de los recursos defensores a nivel nacional, se estima conveniente mantener la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, aprobado por Corte Plena en sesión 22-19 de Corte Plena (Presupuesto 2020) del 6 de Junio de 2019, Artículo IV donde se establece que las 16 plazas de Agrario recomendadas ordinarias para este 2020, asuman como carga ordinaria aquellos asuntos en donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Tal y como lo recomendó la Dirección de la Defensa Pública.  Importante indicar que, con respecto a la propuesta de la Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, relacionado con priorizar el reforzamiento de Defensa Pública Especializada en materia indígena, indicado en el documento compartido con la población judicial el martes 5 de mayo del 2020; en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 se recomiendan dos (2) plazas de Defensora o Defensor Público, para la atención de población de pueblos Indígenas. . .  **La observación no modifica el contenido del informe.** |
| *1.2.* | *"...en el presente informe queda más que claro el funcionamiento de las diferentes personas defensoras Agrarias a nivel nacional, donde es claro el tema de intereses contrapuestos, el recorrido de cada uno de ellos en cuanto al desplazamiento que deben de realizar, así como el tratamiento a los procesos en donde participe una persona indígena..."* | Se toma nota de lo indicado por la Defensa Pública.  **La observación no modifica el contenido del informe.** |
| *1.3.* | *"...Sobre la creación de un nuevo Juzgado Agrario en Jicaral, cabe mencionar que desde hace casi dos años la Unidad Agraria de Nicoya, en colaboración con la Coordinadora de Nicoya (Msc. Yendry Portuguéz Pizarro), se organizó la atención a usuarios al menos una vez por semana (Miércoles) en los Tribunales de Jicaral, por lo que de darse esta situación, la seguiría atendiendo a la persona defensora Agraria de Nicoya..."* | Se toma nota de lo indicado por la Defensa Pública.  **La observación se incorpora en el contenido del informe.** |
| *1.4.* | *"...A mi criterio; sobre estos aspectos como lo mencioné supra, el cuerpo de personas defensoras Agrarias actual cubre la necesidad institucional actual, pero ya se ve reflejada en nuestras estadísticas un aumento significativo de las cargas de trabajo, en muchos de ellos arriba de los 180 intervinientes, cifra dada por el Departamento de Planificación), esto sin la entrada del Nuevo Código Procesal Agrario, donde hay un aumento en las competencias Jurisdiccionales así como las nuevas competencias en sede administrativas ( estas en el ámbito ejecutivo)..."* | Se toma nota de lo indicado por la Defensa Pública.  La Dirección de Planificación mantiene el criterio mostrado en la observación 1.1, por lo que la carga de trabajo actual no justifica la creación de plazas.  Adicionalmente, en el mismo informe se indica la limitación en relación con la posibilidad de identificar la intervención de personas indígenas cuando participan en asociaciones u organizaciones; es decir, la cantidad de asuntos donde se participa como parte demandada o actora sin la representación de una asociación y/u organización presenta una limitante estadística en los sistemas actuales, para determinar la cantidad de asuntos Contenciosos Administrativos donde intervienen personas indígenas y así estimar la proyección de la demanda del proceso.  También existe la limitante que actualmente no es posible proyectar la carga de trabajo que tendrán los Juzgados Agrarios una vez entrada en vigencia el Código Procesal Agrario, ya que adquirirán competencia sobre los procesos Sucesorios de naturaleza agrícola en materia Civil y los Cobratorios con garantías Agrarias, y los Juzgados no tienen identificados esos procesos, ni en su circulante, ni en la entrada mensual. Por otro lado, el Tribunal Contencioso Administrativo no tiene identificados los casos por Responsabilidad Ambiental que, con la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, conocerá el Tribunal Agrario. Lo anterior se puede encontrar en el apartado de limitaciones del estudio en el mismo informe.  **La observación no modifica el contenido del informe.** |
| **2.** | **Gestión Humana. Oficio PJ-DGH-SAP-140-2020** Mediante oficio PJ-DGH-SAP-140-2020, la Licda. Ma. Gabriela Mora Zamora, Jefa de Sección de Análisis de Puestos, manifiesta: | |
| *2.1.* | *"...es importante de aclarar que por competencia técnica es tarea de la Sección de Análisis de Puestos el elaborar las descripciones de clases de puestos (Perfil Competencial) de los cargos que integran el Poder Judicial en ese sentido el Estatuto de Servicio Judicial indica lo siguiente:   “•Artículo 8º.- Corresponde al Jefe del Departamento de Personal: a) Analizar, clasificar y valorar los puestos del Poder Judicial comprendidos en esta ley, y asignarles la respectiva categoría dentro de la Escala de Sueldos de la Ley de Salarios, todo sujeto a la posterior aprobación de la Corte Plena;”  “Clasificación de puestos •Artículo 14.- El Departamento de Personal elaborará y mantendrá al día un Manual de Clasificación de Puestos, que contendrá una descripción completa y sucinta, hecha a base de investigación por el mismo Departamento, de las atribuciones, deberes y requisitos mínimos de cada clase de puestos a que se refiere esta ley, con el fin de que sirva como norma para la preparación de pruebas y determinación de salarios.  •Artículo 15.- Por puesto se entenderá un conjunto de tareas y responsabilidades que requieran la atención permanente de una persona durante la totalidad o una parte de la jornada de trabajo...."* | Se toma nota de lo indicado por medio de Licda. Ma. Gabriela Mora Zamora, Jefa de Sección de Análisis de Puestos.  Al no contar a la fecha con un estudio por parte de Gestión Humana en cuanto la revisión de la clasificación y valoración de los puestos de la materia Agraria como consecuencia de la aprobación del Código Procesal Agrario; se aplica el Transitorio VI del Código Procesal Agrario que indica lo siguiente:  ***“se faculta a la Corte Plena para que ajuste la categoría salarial de las personas juzgadoras Agrarias, conforme a la función que desempeñen, de acuerdo con las reformas Procesales Laboral y Civil, con el fin de garantizar la estabilidad y especialización”***  Por lo anterior, de no contarse con un informe de Gestión Humana al respecto, se acoge lo indicado en Transitorio VI del Código Procesal Agrario, **por lo que la observación no modifica el contenido del informe.** |
| *2.2.* | *"...la revisión de la clasificación y valoración de los puestos de la materia Agraria como consecuencia de la aprobación del Código Procesal Agrario que entrará en vigencia el próximo 27 de febrero del 2021; es un tarea propia de esta Sección; ante lo cual tenemos que los “perfiles competenciales, … y tareas” que se indica en el informe de cita y que fueron aprobadas por el Consejo de la Judicatura deberán ser* ***validados y actualizadas*** *de acuerdo con la técnica propia de clasificación y valoración de puestos. Lo anterior, para que de esta forma se incorpore el resultado al Manual Descriptivo de clases de puestos del Poder Judicial, el cual es la suma de perfiles de la institución (descripción de clases de puestos y perfiles competenciales), es de comentar que toda la documentación guarda un formato único que ha sido aprobado por las instancias superiores de la institución; y que precisamente estamos trabajando en la actualización de estos instrumentos de orden técnico... "* | La observación se responde con la contestación dada por parte de la Dirección de Planificación en la observación 2.1.  **La observación no se modifica el contenido del informe.** |
| *2.3.* | *"...considerando los elementos resolutivos del informe N° 555-PLA-RH-MI-2021 de la Dirección de Planificación de forma específica el punto 40 que establece los siguiente:* ***“Según lo indica el Transitorio VI del Código Procesal Agrario donde “se faculta a la Corte Plena para que ajuste la categoría salarial de las personas juzgadoras Agrarias, conforme a la función que desempeñen, de acuerdo con las reformas Procesales Laboral y Civil, con el fin de garantizar la estabilidad y especialización”****. Al respecto la Jueza Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora del Proyecto de Modernización de la Jurisdicción Agraria, indica que a diferencia con otros proyectos de reforma procesal que se han implementado, se conservan las categorías de Jueza o Juez 3 para primera instancia y categoría 4 para segunda instancia. Todo sin perjuicio, que, con el criterio técnico de la Dirección de Gestión Humana y de los órganos superiores dispongan alguna recalificación. Sin embargo, a la fecha este informe no se tiene información de que exista ningún informe de Gestión Humana al respecto.”, se debe aclarar que a la fecha se encuentra pendiente la realización del respectivo informe en donde se analiza la clasificación y valoración de los puestos de la materia Agraria a partir de la entrada en vigor en el 2021 del Código Procesal Agrario..."* | La observación se responde con la contestación dada por parte de la Dirección de Planificación en la observación 2.1.  **La observación no se modifica el contenido del informe.** |
| **3.** | **Dirección Ejecutiva. Oficio 1568-DE-2020** Mediante oficio PJ-DGH-SAP-140-2020, la Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, manifiesta: | |
| *3.1.* | **Recomendación 5.1, propuestas b:**  *“b. Propuesta 2: Propuesta que toma en consideración la propuesta 1 “a.” más la incorporación del nuevo Juzgado de Jicaral, los planes de descongestionamiento para Informaciones Posesorias y los cambios según las condiciones actuales.*  *La creación del Juzgado Agrario en el poblado de Jicaral con sus dos escenarios”*  *En cuanto a la recomendación 5.1 propuesta b del citado informe, en lo referente a la creación del Juzgado Agrario en el poblado de Jicaral con sus dos escenarios, se debe considerar el costo de la remodelación del espacio indicado en el oficio 1241-DE-2020.*  *Para lo anterior, se presenta el monto de la remodelación el cual fue calculado por el Departamento de Servicios Generales, dicho monto debe ser incluido en la subpartida 5.01.04.*  *Además, se debe considerar los costos de servicios públicos para las nuevas plazas extraordinarias contempladas.* | Se toma nota de lo indicado por la Dirección Ejecutiva, por lo que se incluyen en el informe los costos asociados a remodelación y servicios públicos. (₡19.350.001,04 y₡2.673.417,80 respectivamente).  Se modifica también el monto de *Creación de oficina nueva* pasando de **₡2.078.466,63** a ₡**880.464,04**, de acuerdo con el nuevo monto remitido.  Por lo anterior, se modifica el monto total estimado para presupuesto 2021 en ₡762.010.514,42 del Escenario 1 y ₡747.109.514,42 para el Escenario 2.  **La observación modifica el informe en los apartados *3.4.3.8. Escenarios Propuestos* y *5. Recomendaciones*.** |
| *3.2.* | ***Recomendación 5.1.1:***  *Especialización de la materia Agraria en el Cantón de Upala con una estructura mínima reforzada en el Juzgado Mixto conformada por dos (2) plazas de Jueza o Juez (una (1) de esta ya se tiene con materia Agraria y Penal Juvenil y la otra sería plaza nueva extraordinaria para materia Agraria), y una (1) plaza de técnico o técnica judicial (ya se tiene con materia Agraria y penal juvenil).*  *La inclusión de una plaza de persona juzgadora quedaría condicionada a la adjudicación de un nuevo local para la Fiscalía y Tribunal Penal ambos de Upala, ya que esto permitiría realizar movimientos de personal y liberar espacio en el Juzgado Civil y Trabajo y realizar movimientos para ubicar la plaza extraordinaria.*  *Actualmente se encuentra en revisión los planos de un edificio en la zona para realizar una contratación directa por excepción.* | Se toma nota de la observación emitida por la Dirección Ejecutiva, la cual fue considerada en el desarrollo del informe en el apartado *3.4.1. Juzgado Civil y Trabajo de Upala,* de acuerdo con la consulta realizada a la Dirección Ejecutiva, donde se indica lo siguiente*:*  *“…El poder contar con espacio en este despacho depende de que se logre adjudicar un nuevo local para la Fiscalía de Upala (ya que permitiría hacer movimientos de personal y liberar espacio en el Juzgado Civil y Trabajo); sin embargo, por particularidades de la zona el procedimiento de contratación se mantiene en trámite y de momento no tenemos certeza de cuándo se podrá resolver esta situación.*  *En vista de esto, reitero, todo queda condicionado a poder adjudicar y recibir el local nuevo para la Fiscalía…”*  También se toma nota en cuanto que actualmente se encuentra en revisión los planos de un edificio en la zona para realizar una contratación directa por excepción.  **La observación no modifica el contenido del informe.** |
| *3.3.* | ***Recomendación 5.1.2:***  *Incorporación de una plaza de persona técnica judicial al Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, para la atención de las diferentes actividades del Juzgado, la cual va a ayudar con la atención de usuarios, tramitación de expedientes, acompañamiento a giras, entre otras.*  *Según informa la Administración Regional de Pérez Zeledón, existe espacio para la ubicación del puesto de Técnico o Técnica Judicial en este despacho.* | Se toma nota de lo indicado por la Dirección Ejecutiva, con respecto a lo mencionado por la Administración Regional de Pérez Zeledón, en cuanto que la persona técnica judicial recomendada cuenta con espacio físico para realizar sus funciones.  Se incluye en el apartado *3.4.2 Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires*, lo indicado por la Dirección Jurídica en cuanto al espacio físico existente para albergar a una persona técnica judicial en el Despacho. |
| *3.4.* | ***Recomendación 5.1.5:***  *Reforzar con vehículos con sus respectivos choferes, a las Administraciones Regionales de San Ramón, Cartago, Goicoechea, Alajuela, y Puntarenas; y un chofer para la Administración Regional del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores. Adicional, con la creación del Juzgado Agrario de Jicaral, se debe dotar de una plaza de chofer con su respectivo vehículo.*  *Una vez valoradas las recomendaciones del informe, esta Dirección Ejecutiva considera que al no incluirse todos los vehículos solicitado en el oficio 581-DE-2020, el servicio que puede brindar las Administraciones Regionales de Turrialba, Pérez Zeledón y Limón, será limitado únicamente a los días y señalamientos establecidos en el informe 555-PLA-RH-MI-2021.*  *Por lo que, un aumento a futuro de señalamientos en la materia Agraria, así como, un incremento en las solicitudes y diligencias propias del circuito afectará el análisis realizado de la demanda y por ende se verá disminuida la oferta de este servicio.* | Se toma nota de lo indicado por la Dirección Jurídica.  Con respecto a los vehículos, se analizó la agenda con respecto a la cantidad de señalamientos a audiencia esperados por persona juzgadora, los cuales son ocho (8) señalamientos fuera del Despacho y 12 dentro del Despacho, de acuerdo con lo acordado en sesión extraordinaria del Consejo Superior 47-19 artículo XXIII. Lo anterior hace indicar que cada persona juzgadora durante el mes debe realizar únicamente ocho (8) salidas en vehículo, traducidas en dos (2) salidas por semana, por lo que, según consultas realizadas a las Administraciones Regionales de Limón, Pérez Zeledón y Turrialba no tienen problemas con la asignación de vehículos los días requeridos.  Ahora bien, un aumento de señalamientos fuera del Despacho como indican, se debe programar para los días hábiles que tienen asignados los vehículos, ya que el personal juzgador tiene capacidad de atender únicamente ocho (8) audiencias fuera del Despacho. En el caso de contar con situaciones especiales, el Juzgado debe acordar con la Administración Regional la disposición de otro vehículo fuera de la programación de manera previa.  **La observación no modifica el contenido del informe.** |

**Anexos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo** | **Nombre** | **Documento** |
| ***1*** | Secretaría de la Defensa Pública del I Circuito Judicial de San José Oficio JEFDP-434- 2020 |  |
| ***2*** | Gestión Humana Oficio PJ-DGH-SAP-140-2020 |  |
| ***3*** | Dirección Ejecutiva Oficio 1568-DE-2020 |  |
| ***4*** | CACMFJ Oficio 106-CACMFJ-JEF-2020 |  |
| ***5*** | Escuela Judicial Oficio EJ-DIR-077-2020 |  |
| ***6*** | Comunicación del gasto presupuestario máximo para 2021, Ministerio de Hacienda |  |

- 0 -

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, da la palabra a la licenciada Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Modernización Institucional, quien explica el informe y manifiesta: “Se reciben observaciones al informe del impacto sobre la reforma Agraria, por parte de la Defensa Pública en el oficio JPDEF 434-2020, hay dentro de las observaciones básicamente es que tomáramos en consideración que las actuales 16 plazas que se tienen para atención de la materia Agraria, también tiene la atención de pueblos indígenas, va muy relacionado con lo que anteriormente indicaba, nosotros hoy reiteramos el mismo criterio que actualmente según la capacidad instalada es de 180 y tienen circulante de 129, o sea 43 procesos o un 24% de capacidad, bueno ellos nos indican que a nivel de reforma Agraria espera el aumento de los procesos en algunas de las materias como, sucesorios y cobratorios y de demás y que sería importante que tomemos en cuenta eso, sin embargo, nosotros hemos reiterado en este informe que hay una gran limitante en cuanto a estadísticas que atienden otras materias por lo cual no es posible, sin embargo, actualmente la Defensa mantiene capacidad instalada para la atención actual, he incluso lo que tiene que ver con pueblos indígenas, otras observaciones, ya se ve más claro lo que es la atención de las partes y los intereses contrapuestos, básicamente eso sería lo de la Defensa Pública.

Después la Dirección de Gestión Humana, presenta también una observación sobre una de las recomendaciones, donde nosotros pedimos que se valore, según lo que indica el transitorio de la Ley, en donde indica que se deberá o que se faculta a la Corte para que se ajuste la categoría salarial de las personas juzgadoras Agrarias, conforme a la función que desempeñan, nosotros mantenemos la recomendación puesto que actualmente nos indican que el estudio no está realizado, entonces esta es otra de las observaciones.

Y la última observación viene de la Dirección Ejecutiva en su informe 1568-2020, en donde según la discusión del Consejo Superior nos habían pedido que se hiciera un ajuste en cuanto a la remodelación de Jicaral, la Dirección Ejecutiva presenta una nueva propuesta y de tener por ejemplo 2.078.000 para remodelación ahora se tiene una propuesta de 880 mil que es una propuesta que lo que se pide es que se incorpore como parte del presupuesto para la remodelación del informe de Jicaral, entonces la observación modifica la recomendación original del informe que se había conocido, bueno ahí hay 2 observaciones en relación a los vehículos, nosotros si mantenemos lo dispuesto si la Dirección Ejecutiva nos indica que existe un riesgo si los juzgados consideran la solicitud de más de los 8 juicios por juez fuera del despacho, que si existiría un riesgo el hecho de que las administraciones no puedan cumplir con la dotación de servicios, nosotros hay indicamos que bajo una programación, las administraciones están dispuestas a tratar de solventar esta necesidad, pero no incorporamos en el caso de Limón y Pérez Zeledón mayor cantidad de vehículos, mantenemos lo dispuesto en el informe y había otra de las observaciones en relación a los espacios tanto del técnico judicial que estamos indicando se vaya para la zona de Bribrí, la administración nos dice que si cuenta con espacio, entonces incorporamos esto en el informe y además una de las plazas para Upala, dice que está sujeto a la adjudicación de un edificio en esa zona y que con eso se podría reubicar la plaza de juez que es uno de los requerimientos del informe”.

Refiere el magistrado Cruz Castro: “Ninguna observación, si licenciada Nacira”.

Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, indica: “Nada más que en la propuesta de acuerdo, yo indique que bueno, habían 2 observaciones que si se acogen para incorporar en el informe, pero eso solamente como una nota, para que ustedes tuvieran claro que si se acogían 2 observaciones en relación a lo que nosotros habíamos indicado, que una tiene que ver con el tema de presupuesto y espacios físicos que nos indicó la Dirección Ejecutiva, entonces tal vez eliminar lo de la propuesta de acuerdo, porque es solamente una observación”.

**Se acordó: 1.)** Aprobar el informe presentado por la Dirección de Planificación 693-PLA-RH-MI-2020 relativo al resultado del análisis de las observaciones realizadas al estudio 555-PLA-RH-MI-2020 relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, Ley 9609.**Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XII**

**Documento N° 5670-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el resumen general de plazas ordinarias y extraordinarias revisadas para el 2021, conforme los diferentes estudios realizados durante el actual proceso de formulación presupuestaria 2021.

Interviene la Directora de Planificación indicando: “Bueno aquí es el resumen propiamente del total de las plazas que se analizaron en este periodo, si ustedes ven tenemos un total de 92 plazas analizadas, de esas 92 plazas analizadas en condición de ordinarias, en total están quedando 71 plazas y en condición de extraordinaria estaría quedando 21 plazas, se visibiliza por cada uno de los proyectos que quedarían consignadas, en anticorrupción y fortalecimiento de la oficina de cumplimiento, se estarían designando 3 plazas, la atención de la carga del Contravencional de Puriscal 1 plaza, atención de asuntos de Niñez y Adolescencia 2 plazas, atención de materia Penal Juvenil Restaurativa las extraordinarias de 6 plazas, Código Procesal Civil ordinarias 3, extraordinarias 7, en este análisis nosotros habíamos incorporado el escenario del juez 5, así que ahí está consignado ese escenario, y así sucesivamente cada uno de los proyectos para los cuales fueron analizados, todos los informes que aquí se vinieron y se presentaron.

Esas 71 plazas serian en un costo estimado de dos mil doscientos treinta y cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil colones (2.234.878.000) y las 21 plazas extraordinarias ochocientos cincuenta y dos millones setecientos ochenta y seis mil colones (852.786.000) para un total entonces de plazas analizadas en este periodo presupuestario 20-21, de 92 plazas, ahí luego se detalla por programa presupuestario cada una de ellas. Entonces si había que traerlo, se acuerdan de que ustedes habían indicado en todos los informes que quedaba sujeto a valoración última que realizara este Consejo en la asignación del recurso, entonces así está la propuesta en este momento”.

Añade la licenciada Valverde Bermúdez: “En el estudio de plazas de la Oficina de Cumplimiento se habían acordado que las plazas fueran en condición extraordinaria, les hago la valoración porque como es una oficina que ya ellos están trabajando de forma ordinaria y ya la Corte había ordenado su creación, sería como un contra sentido dejarlas en condición de extraordinarias cuando ya la Corte aprobó que se creara la oficina de forma ordinaria, entonces se los recordamos, porque así quedó, y hoy cuando estábamos viendo el cuadro total, nos llamó la atención, entonces se las comentamos para la valoración de ustedes también”.

Interviene la Directora Ejecutiva, máster Romero Jenkins: “son las plazas de la oficina habría que incorporarlas recalificadas, tendría que hacerse ya si se van a ordinariar ya con la clasificación que les correspondería a esos puestos”.

Manifiesta el integrante Montero Zúñiga “Yo creo que corregirse el acuerdo si habíamos dicho que se remitiera a Gestión Humana para que viera la calificación de las plazas, porque eran de profesional 2, si son de Control Interno, ya hemos tomado el acuerdo que Gestión Humana tomara nota para darle la categoría correspondiente para efectos presupuestarios, lo que habría que corregir es eso que son ordinarias.

Aquí faltan manifestaciones de doña Ana Romero, una consulta del informe de Tránsito de San José

Amplía la licenciada Valverde Bermúdez: “La recomendación para que ustedes valoren dada la situación porque nosotros no sabíamos en qué momento iba a entrar, acuérdense que en el Ministerio Publico todavía nos están quedando, tener que darle las plazas de los técnicos, porque lo único que se le ha podido dar son los fiscales, pero si tenemos la necesidad de darle técnicos a la fiscalía que también son 6, entonces, esa es una posibilidad para poder darles el recurso”.

Añade la licenciada Romero Jenkins: “Al final era la Dirección de Planificación que debía indicar en donde asignarlas, pero entonces más bien de una vez, casi que la respuesta sería dirigirla a la Fiscalía Anticorrupción.”

Prosigue la licenciada Valverde Bermúdez, Directora de Planificación señalando, en otro tema: “Para aclararles, había un estudio que se había hecho de ejecución contractual, esas plazas se había visibilizado la necesidad de crearlas, no sé si los integrantes de este Consejo Superior se acuerdan de ese tema, sin embargo, esas plazas recordemos que no tenían un código, no tenían una posibilidad de creación, entonces al no tener código ni posibilidad de creación, nosotros no las incorporamos en ese conglomerado que les estamos mandando de plazas, tal vez la aclaración del porque se explica que las plazas no están ahí”.

- 0 -

**Se acordó:** **1)** Según los lineamientos establecidos por del Ministerio de Hacienda, existe imposibilidad en el crecimiento de plazas nuevas, por tanto los recursos aprobados corresponden a los análisis técnicos realizados partiendo de la existencia detectada desde hace años atrás, según los lineamiento de la Corte Plena, después de revisar los recursos disponibles se le ha dado prioridad a incorporar recursos para la atención del tema de anticorrupción en el Poder Judicial, según las limitadas posibilidades existentes. **2)** Aprobar las plazas de recurso humano conforme el detalle presentado, respondiendo el mismo a las aprobaciones previas que se brindaron en cada sesión de presupuesto extraordinaria realizadas con anterioridad. **3)** Aprobar la reclasificación de las plazas existentes y crear las plazas de la Oficina de Cumplimiento con carácter ordinario, conforme la discusión y argumentos realizados. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XIII**

**Documento N° 5854-20**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta el oficio 706-PLA- EV-2020, suscrito por la ingeniera. Elena Gabriela Picado González, Jefe, interina de Subproceso de Modernización Institucional, en el que se indica textualmente:

“En sesión de presupuesto del Consejo Superior 45-20, celebrada el 8 de mayo de 2020, artículo XIX, se conoció el informe 656-PLA-RH-MI-2020, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Código Procesal de Familia para el 2020.

En relación a este tema, la Dirección de Planificación, recomendó la asignación de una plaza de Técnico o Técnica Judicial 2, en forma extraordinaria a partir del 2021 para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, para completar la estructura de trabajo, bajo el criterio técnico de que actualmente, se atiende con una persona la manifestación y con dos personas la atención de la entrada de asuntos de las seis materias del despacho; además, de que una de las dos personas técnicas judiciales debe participar de las audiencias que se realizan fuera del despacho en materia Agraria, por lo que se presenta el riesgo de la no atención oportuna, al mantener solamente una persona técnica judicial para el trámite de asuntos de todas las materias que se atienden en el despacho.

Es importante indicar que la plaza extraordinaria solicitada para este despacho, por estar ubicado en una región con población indígena, se completó exclusivamente que domine el dialecto indígena de la zona, para así atender la necesidad de esta población vulnerable.

Al respecto en el oficio 555-PLA-RH-MI-2020, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, Ley 9609, se recomienda la asignación  de una plaza de persona Técnica Judicial 2 para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires; por lo tanto, siendo que en ambos informes se determinó la necesidad del mismo recurso humano, se solicita modificar lo acordado en la sesión 45-20, artículo XIX de manera que la plaza extraordinaria de Técnico o Técnica Judicial 2 para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, solicitada en el informe 656-PLA-RH-MI-2020,y no sea tomada en cuenta dentro de las plazas nuevas a asignar.

Por último, este cambio trae a su vez modificaciones en las estimaciones presupuestarias, dado que en la estructura original que se planteó en el informe 656-PLA-RH-MI-2020, se estimó que el costo anual de la plaza extraordinaria es de ₡16.085.962,04 (dieciséis millones ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos colones con 04/100), por lo que los costos asociados a la necesidad de la nueva plaza se identificaron en el informe 555-PLA-RH-MI-2020, Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, Ley 9609.”

- 0 -

Interviene la licenciada Valverde Bermúdez: “Es solamente una observación nosotros en el informe de Familia, hicimos 2 informes, el de Familia y el de Agrario, en el incorporamos por error la misma plaza en los 2 informes, entonces lo que estamos aquí diciendo es que del informe de Familia se debe de excluir 1 plaza del Juzgado Mixto de Trabajo y Civil de Familia de Buenos Aires, ya que esa plaza se estaba contemplando en el análisis que hicimos de ese mismo Juzgado Mixto de Agrario”.

Interviene el magistrado Cruz Castro: “eso es”.

Añade la licenciada Valverde Bermúdez: “esa es la aclaración del error que cometimos, para eliminarlo del informe de Familia”.

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota de la aclaración planteada por la licenciada Nacira Valverde, Directora de Planificación y aprobar la aclaración propuesta, en el sentido de que se excluya del informe de Familia una plaza del Juzgado Mixto de Trabajo y Civil de Familia de Buenos Aires. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XIV**

**Documento N° 5855-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez informa que se han presentado todos los informes por parte de la Dirección de Planificación, por tanto, relacionado con remuneraciones y gasto variable relativo a la formulación del presupuesto del 2021, así como lo relativo a la actualización de Leyes Especiales, con lo que se finaliza la presentación de temas para la etapa de discusión y análisis por parte del Consejo Superior.

- 0 -

**Se acordó:1.)** Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021 y su remisión a Corte Plena para su análisis y discusión. **2)** Aprobar los presupuestos y actualizaciones correspondientes a Leyes Especiales: Código Procesal Agrario, Acceso a la Justicia para Poblaciones Indígenas, Ley de Justicia Restaurativa, Código Procesal de Familia y Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, para ser enviados a Corte Plena y luego al Ministerio de Hacienda de forma complementaria o adicional al presupuesto ordinario. **3.)** Autorizar a la Dirección de Planificación y a la Dirección de Gestión Humana para efectuar los ajustes correspondientes y definitivos conforme el límite presupuestario establecido por el Ministerio de Hacienda. **Se declara acuerdo firme.**

**---o0o---**

**A las trece horas cuarenta y ocho minutos terminó la sesión.**

1. La producción esperada es la establecida pero tomando en consideración factores que pueden afectar el cumplimiento del plan de trabajo, como incapacidades, vacaciones o ascensos. [↑](#footnote-ref-1)
2. Reunión efectuada el 17 de diciembre de 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Entrada total de la Sala en materia Civil para 2018, sin contemplar los conflictos de competencia ni los asuntos de Auxilio Internacional. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se consolida el promedio mensual con la entrada de la Sala Primera y Tribunal de Casación. Se excluye asuntos de Auxilio Internacional o Conflictos de Competencia. [↑](#footnote-ref-4)
5. La reunión se efectuó el 12 de febrero de 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Informes 586-PLA-MI-2020 del 23 de abril de 2020 y 657-PLA-RH-MI-2020 del 5 de mayo de 2020. [↑](#footnote-ref-6)